



**UNIVERSIDAD NACIONAL PEDRO RUIZ GALLO ESCUELA
DE POSGRADO**

TESIS

**“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA
ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO
INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)**

AUTORA

Abogada Irina del Carmen Villanueva Alcántara

**Para optar el Grado Académico de: Maestra en Derecho con mención en Ciencias
Penales**

ASESOR:

Dr. MARIANO LARREA CHUCAS

Lambayeque, mayo 2018

Elaborada por:

Abogada IRINA DEL CARMEN VILLANUEVA ALCÁNTARA
AUTORA

Dr. MARIANO LARREA CHUCAS
ASESOR

Presentada a la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Para
optar el Grado Académico de: **Maestra en Derecho con mención en Ciencias Penales**
Aprobada por:

DR. JOSÉ MARÍA BALCAZAR ZELADA
PRESIDENTE DEL JURADO

DR. LUIS HUMBERTO FALLA LAMADRID
SECRETARIO DEL JURADO

DR. RICARDO PONTE DURANDO VOCAL
DEL JURADO

Lambayeque, mayo 2018

DISPERCIÓN TEMÁTICA

RESUMEN.....	7
ABSTRACT.....	9
INTRODUCCIÓN.....	11
CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO.....	15
1.1. UBICACIÓN.....	15
1.1.1. Ubicación Geográfica.....	15
1.1.2. Ubicación Temporal.....	15
1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA.....	16
1.2.1. Formulación del problema.....	22
1.2.2. Justificación e importancia del estudio.....	22
1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA.....	26
1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA.....	27
1.4.1. Formulación de Hipótesis.....	27
1.4.1.1. Hipótesis.....	27
1.4.1.2. Identificación de Variables.....	27
1.4.2. OBJETIVOS.....	27
1.4.2.1. Objetivo General.....	27
1.4.2.2. Objetivos Específicos.....	28
1.4.3. Área de Estudio – Ubicación Metodológica.....	28
1.4.4. Delimitación de la Investigación.....	28
1.4.5. Métodos y Técnicas.....	29
1.4.6. Población de Estudio.....	29

1.4.7. Muestra de Estudio.....	30
CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO.....	31
SUB CAPÍTULO I: PROCESO INMEDIATO.....	31
1. PROCESO INMEDIATO.....	31
1.1. Antecedentes.....	31
1.2. Concepto.....	32
1.3. SUPUESTOS DE APLICACIÓN	36
1.3.1. Flagrancia.....	36
1.3.2. Confesión.....	38
1.3.2.1. Instrucciones previas a la declaracion.....	40
1.3.2.2. Objetivo de la declaración.....	41
1.3.3. Elementos de convicción previa declaración del imputado.....	42
2.DERECHO DE DEFENSA.....	44
2.1. Antecedentes.....	44
2.2. Concepto.....	47
2.4. Derecho a ser asistido por un abogado	51
SUB CAPÍTULO II PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA.....	56
1. DEBIDO PROCESO.....	56
2. PLAZO RAZONABLE.....	58
2.1. Antecedentes.....	58
2.2. Concepto.....	61
2.3. Regulación Nacional.....	64
3. EL PLAZO RAZONABLE COMO GARANTÍA AL DEBIDO PROCESO	

PENAL.....	65
3.1. Violacion del plazo razonable.....	67
3.2.Los efectos juridicos de la violación del plazo razonable.....	68
3.3.DERECHO COMPARADO.....	70
3.3.1. Argentina.....	70
3.3.2 Costa Rica.....	70
3.3.3 España	71
4.EJERCICIO DE LA ABOGACIA.....	72
5. DERECHO AL TIEMPO RAZONABLE.....	74
6. JUICIO INMEDIATO.....	80
SUB CAPÍTULO III: CASOS DE FLAGRANCIA.....	84
1.FLAGRANCIA	84
1. 1.Antecedentes	84
1.2. Concepto.....	87
1.3. Antecedentes constitucionales de flagrancia.....	90
1.4. Caracteristicas principals del flagrancia.....	91
1.5. Flagrancia Presunta.....	94
2. POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL.....	96
2. 1.Marco Cnstitucional sobre Flagrancia	98
2..2.1 La libertad individual: Libertad Ambulatoria.....	99
2.2.2. La inviolabilidad del domicilio.....	99
2.2.3. El derecho a la intimidad.....	100
3. POSTURA DEL AUTOR.....	102
CAPÍTULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO.....	104

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS.....	104
3.1.1. Tabulación de encuesta dirigida a operadores del derecho.....	104
3.2. Análisis de los Resultados.....	138
3.3. Discusión y contrastación de hipótesis.....	148
CONCLUSIONES.....	153
RECOMENDACIONES.....	154
CAPÍTULO V: FUENTES DE INFORMACIÓN BIBLIOGRÁFICAS.....	156
1. Fuentes bibliográficas	156
Linkográficas.....	158

RESUMEN

El informe Final de Tesis que se presenta, y que ha sido intitulado **“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASO DE FLAGRANCIA PRESUNTA EN EL PROCESO INMEDIATO (Lambayeque 2016-2017)”** elaborado por la Abogada IRINA DEL CARMEN VILLANUEVA ALCÁNTARA, para optar el Grado de Magister en Derecho Penal con mención en Ciencias Penales a otorgar por la Escuela de Post Grado de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo de Lambayeque, cuestiona si la brevedad de la audiencia única de juicio inmediato por flagrancia delictiva afecta el derecho de defensa, concretamente, el derecho a la obtención de tiempo razonable para preparar una adecuada defensa, en el modo y forma que crea por conveniente el investigado acusado.

Los resultados de la investigación nos dan a conocer que en la doctrina nacional y a nivel jurisprudencial, más aun en la práctica, no existe un adecuado tratamiento del derecho de defensa, el cual incluye a que toda persona tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa, ya que un plazo demasiado corto representa un estado perjudicial no solo para el procesado sino también para el propio Ministerio Público, e incluso perjudicial para el juez, en la medida que ha de motivar en corto tiempo una sentencia en la que se han de adoptar las circunstancias y características del proceso.

Así también, la investigación comprueba la necesidad de desregular el proceso inmediato en flagrancia presunta porque se estaría vulnerando el derecho fundamental de defensa al momento de tratar de solucionar el problema en el menos tiempo posible, ya que será una “justicia” excesivamente veloz y sin mayores actos de prueba y de investigación que las actuadas en menos de 48 horas, pues recordemos que una vez recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día, de manera general.

En ese sentido, debemos recordar que el proceso inmediato fue introducido al ordenamiento jurídico peruano por el NCPP y lleva siendo, hasta la fecha, un tema muy controversial en lo que respecta a la flagrancia delictiva; ya sea por la rapidez y eficacia de la resolución de los casos penales o por los polémicos fallos que esta

ha producido a lo largo de su vigencia, lo que amerita analizar las consecuencias de su correcta o incorrecta aplicación.

Llegado este punto deviene necesario analizar si el proceso simplificado inmediato cumple las expectativas con las que fue creado inicialmente en nuestro estado social democrático de derecho. Frente a las bondades expuestas por los propulsores de estas simplificaciones existen serios cuestionamientos acerca de si la brevedad de la audiencia de juicio inmediato por flagrancia delictiva afecta el derecho de defensa, concretamente, el derecho a la obtención del tiempo razonable para preparar la defensa, ya sea para negociar alguna salida alternativa o para refutar la imputación efectuada contra un ciudadano.

En suma, el estudio del proceso inmediato peruano tiene incidencia sobre el derecho de defensa, que en su versión constitucional no se haya directamente reconocido sino a través del denominado principio de no ser privado del derecho de defensa, el cual resulta transgredido cuando se inobserva una norma procesal que incide en el derecho de defensa, convirtiéndose así en un principio y garantía a la vez, lo que lo convierte en un pilar de cualquier tipo de procedimiento y como tal en aval del debido proceso; siendo así, su ejercicio no solo debe estar permitido sino, sobre todo, favorecido.

Es así como de este principio – garantía surge el atributo específico de contar con el plazo razonable para organizar y preparar la defensa.

PALABRAS CLAVES: proceso inmediato, derecho de defensa, debido proceso, principio, garantía, prepara la adecuada defensa.

LA AUTORA

ABSTRACT

The final report of the thesis presented and that has been entitled "PRECISIONS TO THE REASONABLE TERM FOR THE EXERCISE OF THE ADVOCACY, IN THE EVENT OF FLAGRANCIA PRESUMED IN THE IMMEDIATE PROCESS (Lambayeque 2016-2017)" prepared by the lawyer IRINA DEL CARMEN VILLANUEVA ALCÁNTARA , to apply for the Master's Degree in Criminal Law with a mention in Criminal Sciences awarded by the Postgraduate School of the Pedro Ruiz Gallo National University of Lambayeque, to question whether the brevity of the single hearing of immediate judgment for criminal flagrancy affect the right of defense, specifically, the right to obtain a reasonable time for which the demand of an accused investigator is created.

The results of the investigation make us known in the national doctrine and jurisprudential level, even more in practice, there is no adequate treatment of the right of defense, which includes a person all life has the right to be granted a reasonable time so that it prepares its defense, since a short term represents a harmful state not only for the accused but also for the Public Prosecutor's Office, and even prejudicial to the judge, insofar as it has motivated in a short time a sentence in the that has to do with the circumstances and characteristics of the process.

Therefore, the investigation understands the need to eliminate the immediate process in flagrante delicto because the fundamental right of defense can be violated when dealing with the problem in the least possible time, since it is a "justice" excessively fast and without major acts of trial and investigation that the actions in less than 48 hours, that registered that once received the car that initiates the immediate process, the judge carries out the unique hearing of an immediate judgment in the day, of general way.

In this regard, we must remember that the immediate process was introduced into the Peruvian legal system by the NCPP and the fact that it is, to date, a very controversial issue with regard to criminal flagrancy; either by the speed and efficiency of the resolution of criminal cases or by the political problems that have

had a long period of validity, which merits analyzing the consequences of its correct or incorrect application.

At this point it becomes necessary to analyze whether the simplified process immediately meets the expectations with which it was created in our democratic social state of law. Faced with the benefits expressed by the proponents of these simplifications, there are serious questions about whether the brevity of the hearing immediately due to criminal flagrancy affects the right of defense, specifically, the right to obtain a reasonable time to prepare the defense, and to negotiate alternative exit or to refute the accusation made against a citizen.

In sum, the study of the Peruvian immediate process has an impact on the right of defense, which in its constitutional version has not been allowed in which the right of defense is transmitted, which is violated when a procedural norm is ignored that affects the right of defense, thus becoming a principle and guarantee at the same time, which transforms it into a type of process and as such in the approval process; thus, its exercise should not only be allowed but, above all, favored.

This is how this principle - the guarantee increases the specific attribute of having a reasonable time to organize and prepare the defense.

KEYWORDS: immediate process, right of defense, due process, principle, guarantee, prepare the adequate defense.

THE AUTHOR

INTRODUCCIÓN

El derecho de defensa genera consigo la necesidad de establecer diversas estrategias que puedan considerarse eficaces frente a un caso en concreto, lo cual requiere de la identificación y adopción de una serie de pasos, siendo en el caso penal de necesidad la identificación y análisis de la imputación, identificación y análisis de los medios de prueba en que la imputación se basa, identificación y análisis de las acciones de defensa material y de defensa técnica que han de ser adoptadas, organización de la defensa material y técnica, entre otros pasos, a criterio del defensor, para lo cual se requiere de tiempo razonable; es allí en donde la investigación centra su desarrollo para establecer si el proceso inmediato, tal como actualmente se encuentra estructurado, permite a la defensa técnica del procesado prepararse de manera adecuada frente a una imputación, pues esta lleva consigo la plena seguridad de recabar cómodamente la información buscada y requerida, en las circunstancias apropiadas y sin presiones ni limitaciones de ninguna naturaleza que dificulten u obstaculicen tal labor.

En el contexto que antecede, la presente investigación se planteó como problema la siguiente interrogante: *“¿De qué manera el plazo corto que genera un reducido tiempo para la preparación de una adecuada defensa técnica en casos de flagrancia presunta, se constituye en presupuesto para la desregulación de este proceso especial, sobre la base de la existencia de condiciones de probanza especiales?”*. Para contestar dicha interrogante, la propuesta investigativa se formuló como objetivo general *“Sustentar que la preparación de la adecuada defensa técnica, en los casos de flagrancia presunta, deviene en el presupuesto necesario para sustentar la desregulación del proceso inmediato en atención a las especiales consideraciones de probanza que presenta”*; y como se tiene

desarrollado por la metodología de la investigación en el campo del Derecho, los objetivos para ser alcanzados deben plantearse diversas actividades, acciones y tareas por cumplir, desarrollar y ejecutar. Así, el estudio se planteó como objetivos específicos: *“a) Analizar el correcto desarrollo del proceso inmediato para de esta manera no se vulnere el derecho de la adecuada defensa, b) Precisar que el derecho de defensa es un atributo genérico que comprende un conjunto de garantías, entre ellas el derecho de contar con el plazo razonable para organizar y preparar la defensa., c) Establecer que la vulneración del plazo razonable en el proceso inmediato no permite preparar una adecuada defensa técnica, d) Conocer que, en el proceso inmediato no es posible un correcto ejercicio de la abogacía más aun en los casos de flagrancia presunta por los polémicos fallos que se han producido, razón por la cual es que ahora estamos con la atención fija en las consecuencias de su incorrecta aplicación”.*

En atención a lo anterior, el estudio propuso como hipótesis la siguiente afirmación tentativa: *“El reducido tiempo para la preparación de una adecuada defensa técnica en los casos de flagrancia presunta se constituye en el presupuesto lógico-jurídico para sustentar la desregulación del proceso inmediato, dadas las especiales condiciones de probanza que presenta”.* Respuesta de solución adelantada que ha guiado todo el estudio desarrollado en el caso que nos convoca al redactar las presentes líneas, las mismas que se hayan sustentadas en adecuadas bases teóricas, las que se hayan precedidas del desarrollo metodológico que acabamos de comentar, y que forman parte del Capítulo I de la investigación que entregamos.

Así, la investigación en ciernes se estructuró en tres capítulos: El primero referido al Análisis del Objeto de Estudio, en donde se abordan temas precisos sobre la

ubicación temporal y geográfica del objeto de estudio, la manera cómo surge el problema, la manifestación y características del problema, así como la formulación de la hipótesis debidamente contrastada, a través del cumplimiento de los diversos objetivos: general y específicos, y la utilización de métodos y técnicas empleadas en el desarrollo de toda la investigación.

El segundo capítulo de la investigación corresponde al Marco Teórico, estructurado en cuatro sub capítulos, el primero que aborda el tema del proceso inmediato, el segundo subcapítulo comprende el plazo razonable para el ejercicio de la abogacía, el tercer sub capítulo trata respecto casos de flagrancia presunta.

Finalmente, el último capítulo lo conforma el análisis y discusión de los resultados sobre los datos obtenidos de la encuesta aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo, pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque, se procedió a plasmar la información en cuadros estadísticos.

Respecto del proceso inmediato, en la actualidad, no negamos que denota un ambiente de seguridad y tranquilidad para el ciudadano, pero aquello no implica, o mejor dicho exige que se implementen rigurosos controles para hacer posible todas estas aspiraciones de justicia o de administración de aquella que el Estado se propone frente al ciudadano. Llegado a este punto deviene en necesario analizar si el proceso simplificado inmediato cumple todas las expectativas con las que fue creado al interior de nuestro estado social democrático de derecho, pues no es menos alarmante, frente a las bondades expuestas por los propulsores de estas simplificación que entorno a la simplificación existen serios cuestionamientos acerca de si la brevedad de la audiencia de juicio inmediato por flagrancia delictiva afecta el derecho de defensa, concretamente, el derecho a la obtención del tiempo

razonable para preparar la defensa, ya sea para negociar alguna salida alternativa o para refutar la imputación efectuada contra un ciudadano.

En suma, el estudio nos lleva a concluir que para lograr un efectivo ordenamiento jurídico es necesario que los operadores jurídicos identifiquen la necesidad del plazo razonable para una adecuada preparación de la defensa técnica, de tal forma que se evitaría vulnerar el derecho a la defensa y, por ende, trasgredir el principio acusatorio.

Llegado a este punto, el estudio se pone en consideración de la comunidad jurídica, local y nacional para las críticas que pudieran presentarse, teniendo por seguro que no se pretende agotar el debate sobre el tema, sino por el contrario, se espera incentive a futuras investigaciones sobre el mismo a fin de profundizarlo e incluso llegar a mejorarlo.

Lambayeque, Mayo de 2018.

Abogada. Villanueva Alcántara, Irina del Carmen

Autora

CAPÍTULO I: ANÁLISIS DEL OBJETO DE ESTUDIO

1.1. UBICACIÓN

1.1.1. Ubicación Geográfica:

La investigación se desarrollará en el Distrito Judicial de Lambayeque, en donde se llevará a cabo tres temas tiempo razonable y los medios adecuados para preparar una buena estrategia de defensa los cuales requiere una serie de pasos 1. Identificación y análisis de la imputación, 2. Identificación y análisis de los medios de prueba en aquella se basa, 3. Identificación de la defensa material y técnica; toda esta secuela exige tiempo, tiempo razonable, el proceso inmediato por flagrancia delictiva, los estados de flagrancia. Derecho a la obtención del tiempo razonable para preparar la defensa es lo esencial de esta investigación.

1.1.2. Ubicación Temporal:

El objeto de estudio de la presente investigación se ubica en el tiempo comprendido entre los años 2016-2017 sobre precisiones al plazo razonable para el ejercicio de la abogacía, en casos de flagrancia presunta, en el proceso inmediato del Distrito Judicial de Lambayeque, así como la opinión actual de la comunidad jurídica entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque sobre Precisiones al plazo razonable para el ejercicio de la abogacía, en casos de flagrancia presunta, en el proceso inmediato.

1.2. SURGIMIENTO DEL PROBLEMA

El proceso inmediato es un proceso especial regulado por el código procesal penal de reciente vigencia en varios distritos judiciales del país y todavía en proceso de implementación respecto a la capital de nuestro país, donde se concentra mayor volumen de carga procesal. Este proceso especial a pesar de su diseño enfocado a darle celeridad al modelo, aún no es muy utilizado, siendo el referido por ahora el proceso de Terminación Anticipada en contra posición del proceso común. Este nuevo texto adjetivo penal viene siendo implementado, de manera progresiva a nivel nacional, iniciando su aplicación en el Distrito Judicial de Huaura en el año 2006, estando aún pendiente su entrada en rigor en el Distrito Judicial de Lima.

Mediante Ley N.º 30558, publicada en el diario oficial El Peruano el 9 de mayo del 2017, se modifica el literal f del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú. La referida Ley ha establecido:

Artículo único. Modificación del literal f. del inciso 24 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú. Modifícase el literal f del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, conforme al texto siguiente:

Artículo 2. Toda persona tiene derecho: [...] 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: [...]

f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la distancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término.

Cabe señalar que esta modificación al Código Procesal Penal no es suficiente ya que el tiempo para preparar una buena estrategia de defensa es más amplia; una estrategia que puede considerarse eficaz requiere la adopción de una serie de pasos: identificación y análisis de la imputación; identificación y análisis de los medios de prueba en aquella se basa; identificación de la defensa material y técnica; toda esta secuela exige tiempo, tiempo razonable.

Así, el pacto internacional de derechos civiles y políticos del 16 de diciembre de 1966 señala que:

Artículo 14. Igualdad de las personas.

(...) 3. durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad, las siguientes garantías mínimas:

(...) b) A disponer del tiempo (...) para la preparación de su defensa (...)

También, la convención americana sobre derechos humanos de San José de Costa Rica nos dice: Artículo 8. Garantías judiciales: (...)2. (...). Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:

(...)c) Confesión al inculpado del tiempo (...) para la preparación de su defensa

En el ámbito nacional, el art. IX.1 del Título Preliminar del Código Procesal Penal comprende esta manifestación del derecho de defensa.

Artículo IX. Derecho de defensa:

1. Toda persona (...) tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa (...).

También, nuestro tribunal constitucional, en el Expediente N° 00156-2012PHC/TC-Lima, reconoce el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar defensa, basándose en las sentencias de la corte interamericanas de derechos humanos, al indicar que:

El derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa se encuentra se encuentra previsto en el artículo 8.2.c de la convención americana. En sentido similar el título preliminar del código procesal penal en su artículo IX reconoce que toda persona “tiene derecho a que se conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa”.

A decir de la corte interamericana, este derecho “obliga al estado a permitir el acceso del inculcado al conocimiento del expediente llevado en su contra” y le exige que se respete “el principio de contradicción, que garantiza la intervención de aquel en el análisis de la prueba” (caso Barreto Leiva vs. Venezuela).

Cabe señalar que este cambio de modelo procesal se sustentó en la necesidad de articular una persecución penal más ágil, moderna y eficaz, pretendiendo con ello armonizar “garantía” con “eficacia”, tal como logra ser advertido del estudio de su Título Preliminar; consiguientemente, de allí se logran advertir las aristas que comprometen la reforma procesal penal peruana, en donde el Ministerio Público asume un rol protagónico como

órgano conductor y director de la investigación criminal, lo cual opera desde que toma conocimiento de la notitiacriminis, guiando con su actuación funcional la suerte del procesado, ya sea para lograr una condena, su absolución o el sobreseimiento de la causa, debiendo resaltarse que hasta antes de formalizarse la investigación de manera formal, cuenta entre sus funciones la exclusiva competencia para el cese de la persecución penal le es de su exclusiva competencia, ello a través de diversas instituciones procesales, como el principio de oportunidad, regulado en el Art. 2ª del NCPP, por el cual el Fiscal, de oficio o a pedido de parte, podrá a su decisión abstenerse de ejercitar la acción penal, la cual es de naturaleza pública. A la par de este instituto jurídico procesal se haya el acuerdo reparatorio, que lleva como eje central de sustento legal a la conciliación penal, entre otros.

No cabe duda de que actualmente el proceso inmediato por flagrancia delictiva es el tema más resonante, ya sea por la rapidez y eficiencia de la resolución de los casos penales o por lo polémicos fallos que se han producido, razón por la cual es que ahora estamos con la atención fija en las consecuencias de su correcta o incorrecta aplicación. Entonces, surgen algunas preguntas en sentido de establecer. ¿Cómo puede llevarse un proceso inmediato sin afectar el derecho de defensa?, ¿la designación formal de un abogado garantizará un buena defensa?, ¿permitirá el proceso inmediato que el acusado aporte las pruebas necesarias para su defensa?, ¿de qué manera se vulnera la dignidad personal del acusado?, ¿este proceso garantiza un tiempo razonable para preparar la defensa?

Sobre los estados de flagrancia, en el Código Procesal Penal, artículo 259ª, encontramos cuatro estados de flagrancia: 1. La flagrancia propiamente dicha:

que hace referencia a que el sujeto es sorprendido realizando actos de ejecución propios del delito; 2. La cuasi flagrancia: El sujeto es detenido inmediatamente después de haber cometido el delito; 3. Presunción legal: En este supuesto hace referencia cuando al sujeto se le encuentra dentro de las 24 horas de producido el delito con los objetos o instrumentos del mismo; y, 4. La presunción por sindicación: Por sindicación del testigo, víctima o por video vigilancia. El artículo 446. 1 del Código Procesal Penal, modificado por Decreto legislativo N°1194, establece que el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259 del Código Procesal Penal. Es así que, surgen algunas preguntas en este sentido. ¿Cómo procede en todos los supuestos?, ¿Cómo se vulnera el plazo en los casos de flagrancia presunta?, ¿de qué manera el plazo dado vulnera el derecho de defensa?, ¿Cómo se produce la inadecuada preparación de la defensa técnica?, ¿Cómo los fundamentos del proceso general o común le son propios, en esencia, a los procesos especiales?, ¿Cuál es la motivación legislativa para reducir los plazos en el proceso penal peruano?

No cabe duda de que actualmente el proceso inmediato por flagrancia delictiva es el tema más resonante, ya sea por la rapidez y eficiencia de la resolución de los casos penales o por lo polémicos fallos que se han producido, razón por la cual es que ahora estamos con la atención fija en las consecuencias de su correcta o incorrecta aplicación.

Es un estado constitucional y democrático de derecho, la supuesta rapidez introducida por el D. Legislativo N° 1194 de diminutos plazos, parece arriesgar

el cumplimiento de ciertas condiciones del debido proceso, dentro de las cuales está en el tiempo razonable para preparar la defensa, que constituye la manifestación de la garantía constitucional de derecho de defensa establecida por los tratados internacionales sobre derechos humanos que ha suscrito el Perú.

El propósito del presente trabajo es ensayar si la brevedad de la audiencia única de juicio inmediato de la flagrancia delictiva de carácter inaplazable afecta el derecho a la obtención de tiempo razonable para preparar la defensa. ¿Cómo en derecho de defensa es vulnerado en el proceso inmediato?, ¿Cómo se aplica el derecho a la defensa en el proceso inmediato?, ¿Cómo el derecho de defensa y el plazo razonable es vulnerado en el proceso inmediato?, ¿en los casos de flagrancia presunta es factible el proceso inmediato?, ¿de qué manera el ejercicio de la adecuada defensa es vulnerada en el proceso inmediato?

1.2.1. Formulación del problema

¿De qué manera el plazo corto que genera un reducido tiempo para la preparación de una adecuada defensa técnica en casos de flagrancia presunta, se constituye en presupuesto para la desregulación de este proceso especial, sobre la base de la existencia de condiciones de probanza especiales?

1.2.2. Justificación e importancia del estudio

No son pocos los procesalistas penales quienes durante el transcurrir del tiempo han dicho, en uno y otro sentido, que un proceso judicial que no sea simple deviene en un violento flagrante de la Constitución; razón por la cual, se

justifica, sobre la base de aquello, la regulación de las alternativas al proceso común, denominadas medidas de simplificación procesal, como corolario del derecho fundamental de acceso a la justicia y de los principios fundamentales de la democracia y Estado social de Derecho, de lo cual no consideramos alejado de los postulados constitucionales que nos guían pero que deviene en necesario su adecuación a aquellos. Así, los doctrinarios nacionales sostienen que “Los tratados internacionales sobre derechos humanos y título preliminar de nuestro código procesal penal establecen como parte del derecho de defensa que toda persona tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa” (GARCÍA CALIZAYA, 2016, p, 327).

Nótese, que un plazo demasiado corto podría significar perjudicial para las partes, no solo para el procesado sino también para el propio ministerio público e incluso perjudicial para el juez, en la medida que ha de motivar en corto tiempo una sentencia en la que se han de adoptar las circunstancias y características del proceso.

Es cierto lo dicho hasta aquí que “Justicia que tarda no es justicia”, pero aquí solo será una justicia excesivamente veloz y sin mayores actos de prueba y de investigación que las actuadas en menos de 48 horas, pues recordemos que una vez recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día, de manera general. También, debe tenerse en cuenta que la designación formal de un abogado no asegura por si sola la defensa eficaz; pues para que ello ocurra el abogado defensor deberá estudiar de manera seria y profesional las diversas cuestiones planteadas, lo cual le ha de permitir el planteamiento de pretensiones que a su

criterio le parezca viables conforme a las reglas de su experiencia. Un abogado que por el apremio del tiempo que señala la norma asume el caso difícilmente podrá cubrir las exigencias que caracterizan a una defensa eficaz, por más que se pretenda soslayar este hecho en la existencia de casos fáciles, siendo que ningún caso en los que se ve involucrada la libertad puede ni debe ser tomado a la ligera.

De lo anterior no negamos que denota un ambiente de seguridad y tranquilidad para el ciudadano, pero aquello no implica, o mejor dicho, no exige que se implementen rigurosos controles para hacer posible todas estas aspiraciones de justicia o de administración de aquella que el Estado se propone frente al ciudadano.

Llegado a este punto deviene en necesario analizar si el proceso simplificado inmediato cumple todas las expectativas con las que fue creado al interior de nuestro estado social democrático de derecho, pues no es menos alarmante, frente a las bondades expuestas por los propulsores de estas simplificación que entorno a la simplificación existen serios cuestionamientos acerca de si la brevedad de la audiencia de juicio inmediato por flagrancia delictiva afecta el derecho de defensa, concretamente, el derecho a la obtención del tiempo razonable para preparar la defensa, ya sea para negociar alguna salida alternativa o para refutar la imputación efectuada contra un ciudadano.

Recordemos que el proceso inmediato fue introducido al ordenamiento jurídico peruano por el NCPP, siendo a la fecha el proceso inmediato por flagrancia delictiva un tema muy resonante, ya sea por la rapidez y eficacia de

la resolución de los casos penales o por los polémicos fallos que esta ha producido, lo que amerita analizar las consecuencias de su correcta o incorrecta aplicación.

Un agregado final por lo cual se justifica el estudio del proceso inmediato peruano es su incidencia sobre el derecho de defensa, que en su versión constitucional no se haya directamente reconocido sino a través del denominado principio de no ser privado del derecho de defensa, el cual resulta transgredido cuando se inobserva una norma procesal que incide en el derecho de defensa, el cual es un principio y garantía a la vez, constitutivo en un pilar de cualquier tipo de procedimiento, y como tal una garantía del debido proceso; siendo así, su ejercicio no solo debe estar permitido sino, sobre todo, favorecido. Es así como de este principio – garantía surge el atributo específico de contar con el plazo razonable para organizar y preparar la defensa. “Por ello, nuestro ordenamiento jurídico y las normas internacionales conciben el derecho de defensa como pilar de cualquier tipo de procedimiento y, por ende, como garantía del debido proceso. La defensa constituye un verdadero requisito para la validez del proceso, y la aplicación de la pena” (GIMENO SENDRA, 2015, p, 170).

El derecho de defensa genera consigo la necesidad de establecer diversas estrategias que puedan considerarse eficaz frente a un caso en concreto, lo cual requiere de la identificación y adopción de una serie de pasos, siendo en el caso penal de necesidad la identificación y análisis de la imputación, identificación y análisis de los medios de prueba en que la imputación se basa, identificación y análisis de las acciones de defensa material y de defensa

técnica que han de ser adoptadas, organización de la defensa material y técnica, entre otros pasos, a criterio del defensor, para lo cual se requiere de tiempo razonable. Y es allí en donde la investigación centra su desarrollo para establecer si el proceso inmediato, tal como actualmente se encuentra estructurado permite a la defensa prepararse de manera adecuada frente a una imputación pues esta lleva consigo, de igual manera, la plena seguridad de recabar cómodamente la información buscada y requerida, en las circunstancias apropiadas y sin presiones ni limitaciones de ninguna naturaleza que dificulten u obstaculicen tal labor. Lo anterior significa que tanto el imputado como su abogado defensor puedan contar con la herramienta exacta para optimizar la tesis de defensa que han de esgrimir.

Recordemos que la eficacia hace referencia al cumplimiento de un objetivo que se pretende alcanzar con el mínimo costo posible, en donde mucho tiene que ver el medio a elegir; en tanto que, la eficacia hace alusión al logro de los efectos deseados en cuanto al modo en que estos fueron previstos. Entre eficiencia y eficacia existe una amplia discusión, y que el tema en estudio no será ajeno pues ambos circundan a la simplificación procesal ya que son criterios organizativos que persiguen el resultado legitimador del accionar administrativo, aunque no tengan el efecto de positivizarse jurídicamente como criterios. Al respecto se sostiene que “El hecho de que una acción administrativa no sea eficaz solo puede tener como consecuencia el que se juzgue a la administración como una mala administración” (ARAYA VEGA, 2016, 264). Lo que equivale a decir que una administración de justicia ineficaz o ineficiente es infractora a la constitución por fallar en contra de la justicia mas

no de su administración, todo lo cual tiene incidencia sobre la vigencia y respeto que un Estado ha de otorgar a los derechos fundamentales de las personas.

1.3. MANIFESTACIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL PROBLEMA

El presente trabajo de investigación manifiesta a través del corto plazo que tiene el proceso inmediato en casos de flagrancia presunta los cuales no permite que se tenga una adecuada defensa y de esta manera se vulnera el plazo razonable, lo que se pretende fijar son precisiones para el ejercicio adecuado de la abogacía también se va a fijar es el bien jurídico tutelado, delimitar el espacio y tiempo entre la acción y el resultado.

El artículo 446. 1 del Código Procesal Penal, modificado por Decreto legislativo N°1194, establece que el fiscal debe solicitar la incoación del proceso inmediato, bajo responsabilidad, cuando el imputado ha sido sorprendido y detenido en flagrante delito, en cualquiera de los supuestos del artículo 259 del Código Procesal Penal.

El propósito del presente trabajo es ensayar si la brevedad de la audiencia única de juicio inmediato de la flagrancia delictiva de carácter inaplazable afecta el derecho a la obtención de tiempo razonable para preparar la defensa.

1.4. DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA

1.4.1. Formulación de Hipótesis

1.4.1.1. Hipótesis:

El reducido tiempo para la preparación de una adecuada defensa técnica en los casos de flagrancia presunta se constituye en el presupuesto lógico-jurídico para sustentar la desregulación del proceso inmediato, dadas las especiales condiciones de probanza que presenta.

1.4.1.2. Identificación de Variables:

Las variables quedan expresadas en los siguientes términos:

- a) El Proceso inmediato.
- b) Derecho de defensa
- c) Vulneración del plazo razonable
- d) Ejercicio de la abogacía
- e) Flagrancia presunta

1.4.2. OBJETIVOS

1.4.2.1. Objetivo General

Sustentar que la preparación de la adecuada defensa técnica, en los casos de flagrancia presunta, deviene en el presupuesto necesario para sustentar la desregulación del proceso inmediato en atención a las especiales consideraciones de probanza que presenta.

1.4.2.2. Objetivos Específicos

1. Analizar el correcto desarrollo del proceso para de esta manera no se vulnere el derecho de la adecuada defensa.
2. Precisar que el derecho de defensa es un atributo genérico que comprende un conjunto de garantías, entre ellas el derecho de contar con el plazo razonable para organizar y preparar la defensa.
3. Establecer que la vulneración del plazo razonable en el proceso inmediato no permite preparar una adecuada defensa técnica.
4. Conocer que, en el proceso inmediato no es posible un correcto ejercicio de la abogacía más aun en los casos de flagrancia presunta por los polémicos fallos que se han producido, razón por la cual es que ahora

estamos con la atención fija en las consecuencias de su incorrecta aplicación.

1.4.3. Área de Estudio – Ubicación Metodológica:

- a. Área de estudio** : Dimensión Praxiológica
- b. Nivel Epistemológico:** Valoración.
- c. Tipo de Investigación:** Explicativa.
- d. Campo de Investigación:** Investigación Jurídico-Social.

1.4.4. Delimitación de la Investigación:

- a. Espacial:** Distrito Judicial de Lambayeque.
- b. Temporal:** Tiempo necesario en analizar el tema bajo estudio.
- c. Cuantitativa:** Cantidad de proceso inmediato por flagrancia presunta en el Distrito Judicial de Lambayeque.
- d. Cualitativa:** Nivel de valoración de las opiniones de los operadores del derecho en cuanto al proceso inmediato por flagrancia presunta en el Distrito Judicial de Lambayeque.

1.4.5. Métodos y Técnicas

- A. Métodos:** Entre los métodos tenemos: Inductivo-deductivo, exegético, analítico, sintético, descriptivo-explicativo, dogmático.
- B. Técnicas:** Tenemos: la Observación, Bibliográficas, documental, fichaje y encuesta.

1.4.6. Población de Estudio

La aplicación de los métodos y técnicas de investigación señalados, y otros que serán agregados en el transcurrir de la investigación, nos permitirán recopilar la información necesaria para los efectos de contrastar la hipótesis planteada. Y, siendo así, por la naturaleza del estudio y los

efectos de la propuesta a formular, la población estará conformada por todos aquellos aspectos que de una u otra manera permitan relacionar lo que constituye el eje central de la presente investigación, esto es los procesos penales por delitos culposos, con especial identificación de los delitos con concausa en la competencia de la víctima por el resultado dañoso.

Y, siendo que la POBLACIÓN es el conjunto de individuos, objetos, situaciones, cursos, etc., de los que se desea conocer algo en una investigación; en tanto que la MUESTRA, es una pequeña porción representativa y adecuada de la población, a partir de la cual el investigador va obtener datos que son puntos de partida de las generalizaciones, se tiene que la población de estudio estará conformada por los Profesionales del derecho que ejercen en la Ciudad de

Lambayeque y Chiclayo, ya sean como Magistrados, Jueces y Fiscales, o Abogados de la defensa, a quienes se procederá a aplicar encuestas innominadas y entrevistas (de ser el caso), para obtener mayores datos estadísticos, conforme al sustento teórico a desarrollar en la investigación.

1.4.7. Muestra de Estudio

La población de Abogados que ejercen en el Distrito Judicial de Lambayeque oscila entre los 3589 Abogados, según los datos obtenidos del último proceso electoral en el Ilustre Colegio de Abogados de Lambayeque; de los cuales la

$$n = \frac{N \times Z_a^2 \times p \times q}{d^2 \times (N - 1) + Z_a^2 \times p \times q}$$

MUESTRA
 quedará
 conformada
 como sigue,
 según la
 fórmula
 siguiente:

En donde:

N = tamaño de la población = 3589

Z = nivel de confianza = 0.5

P = probabilidad de éxito, o proporción esperada = 0.5

Q = probabilidad de fraqués = 0.5

D = precisión (Error máximo admisible en términos de proporción) = 0.05

$$n = \frac{3589 \times (0.5)^2 \times (0.5)^2 \times (0.5)^2}{(0.05)^2 \times (3589 - 1) + (0.5)^2 \times (0.5)^2 \times (0.5)^2}$$

$$n = \frac{3589 \times 0.15625}{(0.0025) \times (3588) + 0.015625}$$

$$n = \frac{560.0781}{8.985625} = 62.33 \Rightarrow \boxed{} n = 62$$

CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO

SUB CAPÍTULO I: PROCESO INMEDIATO

1. PROCESO INMEDIATO

1.1. Antecedentes

NEYRA FLORES (2010) precisa que:

En nuestro ordenamiento, el proceso inmediato tiene en cierto modo su antecedente más directo en la ley N° 28122, de 16 de diciembre del 2003, la misma que regula la conclusión anticipada de la instrucción para ciertos delitos. Dicha ley, establece la realización de una instrucción judicial breve, similar a la instrucción de los juicios rápidos del sistema procesal español. Sin embargo, resalta una diferencia entre ambos, y es que el proceso inmediato del Nuevo

Código procesal Penal, no es precisa la existencia de una, siquiera breve, fase de investigación formal, sino que simplemente en base a lo actuado preliminarmente el Fiscal formula su requerimiento para pasar a juicio oral.

Por otro lado, el proceso penal inmediato, o también llamado juicio inmediato, tiene como fuente a los juicios directísimos (flagrancia o confesión) e inmediato (prueba evidente) del código de procedimientos penales italiano de 1989 (p, 432).

Somos de la opinión de que el proceso inmediato solo se basa en lo actuado preliminarmente para de esta manera pasar a juicio oral, y así, acelera el proceso para que se pueda llevar de manera rápida y resolver los casos y evitar la carga procesal.

Por tanto, de similar idea YOSELY HERRERA (2002) nos menciona que: Dichos mecanismos constituyen en conjunto uno de los pilares principales del Código Procesal Penal, pues permite simplificar, economizar y descongestionar el Sistema de Justicia Penal, logrando resultados de mayor eficacia en la respuesta penal frente a los punibles.

Dentro de estos el proceso inmediato constituye uno de los principales mecanismos de simplificación, el mismo que tiene sus bases en el Ordenamiento Italiano de 1988 que regula el *guidizzio* inmediato, donde se prescinde de la etapa intermedia. Quedando expedito los hechos para el juzgamiento, en especial para presupuestos de flagrancia, confesión del imputado o la obtención de prueba evidente suficiente para atribuir responsabilidad al investigado (p, 2).

Llegamos a la conclusión de que el proceso inmediato es uno de los mecanismos de celeridad procesal mejor planteadas hasta el momento ya que

evita que se llegue a la etapa intermedia y omite por completo la investigación preparatoria propia mente dicha, pasando de las diligencias preliminares a juicio oral de manera rápida, generando así mayor confianza a la ciudadanía de resolver su caso en el menor tiempo posible.

1.2. Concepto

Así, mismo el fiscal de la nación SANCHÉZ VELARDE (2016) menciona que:

El proceso inmediato es un proceso especial previsto en el Nuevo Código Procesal Penal (CPP) y procede en tres supuestos, cuando: a) la persona es sorprendida en flagrante delito, b) la persona confiesa el delito y c) hay suficiencia probatoria. En estos casos, el Decreto Legislativo 1194 obliga al fiscal a que solo en los casos de delito flagrante debe promover el proceso inmediato, dejando de lado el proceso común (En: <https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/flagrancia-proceso-inmediato> pablo-sanchez-velarde-267580).

GARCIA CALIZAYA (2016) conceptualiza como:

El proceso inmediato fue introducido al ordenamiento jurídico procesal penal peruano, por el CPP del 2004; sin embargo, como obligación del fiscal para su incoación en caso de flagrancia delictiva se establece a partir de la vigencia del Decreto Legislativo N° 1194, publicado el 30 de agosto del 2015 en el diario oficial el peruano (p, 336).

En el mismo criterio UGAZ ZEGARRA (2016) precisa que:

No cabe duda de que actualmente el proceso inmediato por flagrancia delictiva es el tema más resonante, ya sea por la rapidez y eficiencia de la resolución de los casos penales o por lo polémicos fallos que se han producido,

razón por la cual es que ahora estamos con la atención fija en las consecuencias de su correcta o incorrecta aplicación.

Es un estado constitucional y democrático de derecho, la supuesta rapidez introducida por el D. Legislativo N° 1194 de diminutos plazos, parece arriesgar el cumplimiento de ciertas condiciones del debido proceso, dentro de las cuales está en el tiempo razonable para preparar la defensa, que constituye la manifestación de la garantía constitucional de derecho de defensa establecida por lo tratados internacionales sobre derechos humanos que ha suscrito el Perú.

El propósito del presente trabajo es ensayar si la brevedad de la audiencia única de juicio inmediato de la flagrancia delictiva de carácter inaplazable afecta el derecho a la obtención de tiempo razonable para preparar la defensa (p, 150).

Cabe señalar que el proceso inmediato en la actualidad es una de las más eficientes ya que cuando se produce un hecho delictivo en flagrancia se detiene de manera inmediata al sospechoso y se procede a requerir al juez penal el proceso inmediato para que pueda ser sentenciado rápidamente.

Como podemos apreciar para la correcta aplicación del proceso inmediato tiene que haber concurrencia de tres requisitos fundamentales, de ello el fiscal de la nación nos aclara cada una de estas no pueden ser dejadas de lado de ninguna manera.

De esta manera aclara ANGULO MORALES que:

El denominado Proceso Inmediato es un tipo de proceso especial, que bajo ciertos presupuestos específicamente previstos en la ley, permiten abreviar el proceso penal, suprimiendo la etapa de "Investigación

Preparatoria” y la “etapa intermedia” propias del proceso penal común (En: https://www.minjus.gob.pe/defensapublica/contenido/actividades/docs/727_17_microsoft_powerpoint___proceso_inmediato___flagrancia_delictiva_exposicion_09_12_2015_eti.ppt_%5Bmodo_de_compatibilidad%5D.pdf).

NEYRA FLORES (2010) conceptualiza como:

El proceso inmediato se encuentra regulado en la sección primera del libro Quinto del Nuevo Código Procesal Penal, dedicado a los procesos especiales. Puede ser definido como aquel proceso especial que, en aras de la celeridad de los procesos penales, pasa directamente a la fase de diligencias Preliminares al juicio oral, obviando llevar a cabo las etapas de investigación preparatoria propiamente dicha y la intermedia de un proceso común.

No obstante, este proceso, según se señala en el artículo 477° del nuevo código procesal penal, puede realizarse inclusive, cuando el fiscal haya formalizado la investigación preparatoria, siempre y cuando este lo solicite antes de los treinta días de haberse producido esta formalización (p, 431).

CALLE PAJUELO (2007), precisa que:

El proceso inmediato, se encuentra pues determinado por la falta de necesidad de realizar la investigación preparatoria, debido a la existencia de flagrancia delictiva, confesión del imputado en la comisión del delito y/o porque los elementos de convicción evidencian la materialización del ilícito penal y la participación del imputado (p, 103)

Y continúa NEYRA FLORES (2010) diciendo que:

Son estos supuestos de aplicación los que justifican la directa presencia del imputado al juicio oral, dada la superfluidad e innecesaridad en que deviene

pasar el filtro de la audiencia preliminar en la etapa intermedia ante dichos supuestos es innecesario.

Este proceso, cuya incoación correspondiente al Fiscal, constituye una celebración anticipada del juicio oral. Por ello, es considerado, como uno de los procesos especiales en los que se expresa con mayor nitidez el objetivo de buscar la simplificación y celeridad del procedimiento ordinario (p, 431)

Llegamos a la conclusión de que el proceso inmediato es una de los nuevos mecanismos procesales más rápidos que en poco tiempo puede resolver un caso en específico, y de esta manera evitar la carga procesal que viene aquejando a las fiscalías en la actualidad.

1.3. Supuestos de aplicación

1.3.1. Flagrancia

Para que exista flagrancia es necesaria, entiende MARTIN MORALES, “una evidencia sensorial, no bastando una presunción, por muy probable que se presente la comisión delictiva; es necesaria una real perpetración del hecho, no una mera sospecha”, añade además que el TS español considera que: La palabra flagrante viene del latín flagrans-flagrantis, participio de presente del verbo flagrare, que significa arder o quemar, y se refiere a aquello que está ardiendo o resplandeciendo como fuego o llama, y en este sentido ha pasado a nuestros días, de modo que por delito flagrante en el concepto usual hay que entender aquel que se está cometiendo de manera singularmente ostentosa o escandalosa”. La flagrancia requiere percepción directa, agregará el autor citado (p, 94).

En España la STC 341/1993 concibió la flagrancia como “situación fáctica en la que el delincuente es 'sorprendido' -visto directamente o percibido de otro modo- en el momento de delinquir o en circunstancias inmediatas a la perpetración del ilícito.”

Desde otro punto de vista el catedrático ZAMORA-PIERCE, citado por SAN MARTIN (1999), precisa que flagrar (del latín *flagrare*) significa arder o resplandecer como fuego o llama, de manera que, etimológicamente, el término delito flagrante se refiere al hecho vivo y palpitante, resplandeciente, cuya observación convence al testigo de que está presenciando la comisión de un delito (p, 807).

Asimismo, la apreciación de la flagrancia, continúa el autor citado arriba, corresponde a quien efectiviza la detención, es decir, al miembro de la PNP que efectúa la detención. Por eso, cuando el efectivo de la PNP cree erróneamente que concurre flagrancia, se dará el supuesto del error de tipo del artículo 14 primer párrafo del Código Penal, cuya consecuencia jurídica es tornar en imprudente la infracción. Resulta interesante la consideración que entiende el caso de los delitos permanentes, por no suponer normalmente riesgo inminente para bien jurídico alguno, como si ocurre en sentido contrario, por ejemplo, con los delitos de robo, incendio, lesiones, etc., es difícil que configure un delito flagrante, pues la continuidad temporal elimina la necesidad de intervención inmediata; teniéndose la obligación de buscar el mandato judicial (p, 807).

De la misma idea señaló FRANCO CHICO (2009) que:

El descubrimiento del delito al momento de su perpetración, o también cuando el autor del hecho es perseguido inmediatamente después de la comisión del acto delictivo o cuando es encontrado inmediatamente después

por inmediaciones del lugar donde ha ocurrido el hecho, con objetos o efectos del delito siempre que concurren los requisitos de inmediatez temporal y personal. No obstante, también es importante señalar cual es la definición que se le ha dado al término de flagrancia en nuestro sistema procesal penal (En: <https://agendamagna.wordpress.com/2009/06/09/la-presuncion-de-flagranciadelictiva-y-su-enfoque-en-el-codigo-procesal-penal-peruano/>).

1.3.2 Confesión

De esta manera nos menciona TABOADA PILCO (2008) sobre la confesión la cual está:

Constituida por la declaración del imputado en la que acepta, reconoce ser autor o partícipe de un delito o una falta, prestada ante una autoridad competente y con las formalidades y garantías correspondientes.

Si la libre declaración del inculcado contiene la admisión de la imputación formulada en su contra, confirmada con el material probatorio actuado en el proceso, se convierte en medio de prueba (art. 160º del CPP), que permite la realización de los principios de economía, celeridad y eficacia procesal, evitando las complicaciones procesales que pudieran presentarse en la búsqueda de la verdad de la hipótesis acusatoria (p, 5).

De la misma manera el autor señala que:

La confesión en un sistema acusatorio adversarial también es vista como una decisión estratégica, en miras a obtener beneficios prémiales concretos, como la utilización de diversas salidas alternativas de solución del conflicto jurídico penal, permitiendo en algunos casos, evitar la condena, previa reparación efectiva del daño al agraviado (principio de oportunidad), en otros casos, la imposición de condena, pero reducida la pena a límites inferiores al

mínimo legal, sin necesidad de exponer el caso a juicio público (terminación anticipada del proceso) (p, 5).

Somos de la opinión que la figura de la confesión es una de los mecanismos que permite al investigado terminar de manera rápida su proceso y también puede hacer uso mediante esta de las diversas salidas alternativas que ofrece el Nuevo Código Procesal Penal.

Como precisa GALLIRGOS VELARDE (2012) que:

Cuando el imputado ha confesado la comisión del delito. La confesión supone el reconocimiento de los cargos por parte del imputado. Para que tenga valor probatorio, debe estar debidamente corroborada por otro u otros elementos de convicción, así como ser prestada libremente y en estado normal de las facultades psíquicas, y realizada ante el Juez o Fiscal en presencia del abogado defensor (Art. 160° del CPP). Por ello, para que sea factible el Proceso Inmediato en esta hipótesis, no sólo se requiere la confesión, sino la existencia de elementos probatorios que generen convicción sobre la responsabilidad del imputado (p, 24).

La perspectiva objetiva de la confesión como estrategia de defensa técnica, no descarta de plano que tal reconocimiento de los hechos delictivos, pueda derivar de un plano subjetivo de profundo y sincero arrepentimiento, como precisaba MITTERMAIER (2006) producto de una conciencia atormentada y que quiere desembarazarse a todo trance del peso que la oprime (p, 231), la revivificación de ROMANOVICH RASKOLNIKOV (1868) en la conciencia del criminal arrepentido, amén de eventualmente acontecer otros móviles, a decir de HINOSTROZA PARIACHI (2005): por laxitud (ansiedad), por necesidad de

explicarse (en crímenes pasionales), por lógica (interrogatorio sin salida), por orgullo (vanidad de hazañas), por esperanza o temor (evitar una pena mayor) (p, 179-182).

1.3.2.1. Instrucciones previas a la declaración

El artículo 87º del CPP prescribe que los operadores jurídico-penales (jueces, fiscales, policías) antes de iniciar la declaración del imputado o acusado cumplan las siguientes instrucciones preliminares:

- a. Antes de comenzar la declaración del imputado, se le comunicará detalladamente el hecho objeto de imputación, los elementos de convicción y de pruebas existentes, y las disposiciones penales que se consideren aplicables. De igual modo se procederá cuando se trata de cargos ampliatorios o de la presencia de nuevos elementos de convicción o de prueba (numeral 1).

Para que se considere valido esta declaración se le tiene que comunicar al investigado de los cargos que se le imputan y de esta manera él pueda reconocer o no los cargos.

- b. Se le advertirá que tiene derecho a abstenerse de declarar y que esa decisión no podrá ser utilizada en su perjuicio. Asimismo, se le instruirá que tiene derecho a la presencia de un abogado defensor, y que si no puede nombrarlo se le designará un defensor de oficio. Si el abogado recién se incorpora a la defensa, el imputado tiene derecho a consultar con él antes de iniciar la diligencia y, en su caso, a pedir la postergación de la misma (numeral 2).

El derecho a mantener silencio en muchas ocasiones obstaculiza la labor fiscal ya que este tiene una mayor carga de producir pruebas de cargo y descargo para generar convicción.

- c. Será informado de que puede solicitar la actuación de medios de investigación o de prueba, a efectuar las aclaraciones que considere convenientes durante la diligencia, así como a dictar su declaración durante la etapa de Investigación Preparatoria (numeral 3).

La actuación de pruebas por parte del investigado es fundamental ya que de esta manera se puede probar si lo que está diciendo es cierto y en muchas ocasiones se declare su inocencia con los medios de prueba presentados por este.

- d. Sólo se podrá exhortar al imputado a que responda con claridad y precisión las preguntas que se le formulen. El Juez, o el Fiscal durante la investigación preparatoria, podrán hacerle ver los beneficios legales que puede obtener si coopera al pronto esclarecimiento de los hechos delictuosos (numeral 4).

1.3.2.2. Objetivos de la declaración

ANDRÉS BAYTELMAN A. Y MAURICIO DUCE J. (2005) señala que el objetivo de la declaración es:

Las técnicas de interrogatorio aplicables a todo órgano de prueba (imputado, testigo, perito), que declara en un proceso penal de corte acusatorio adversarial, buscan los siguientes objetivos: 1) Solventar la credibilidad del declarante, 2) Acreditar las proposiciones fácticas de nuestra teoría del caso, 3) Acreditar e introducir al juicio prueba material

(objetos y documentos) y 4) Obtener información relevante para el análisis de otra prueba (p, 109).

1.3.3 Elementos de convicción previa declaración del imputado

GALLIRGOS VELARDE (2012) también señala:

Cuando sean evidentes los elementos de convicción acumulados durante las diligencias preliminares, previo interrogatorio del imputado. Las diligencias preliminares tienen por finalidad realizar actos urgentes e inaplazables con el propósito de determinar si han ocurrido los hechos denunciados, así como asegurar los elementos materiales e individualizar a los autores y agraviados (Art. 330° del CPP). En ocasiones, las diligencias preliminares pueden aportar elementos probatorios suficientes para demostrar la responsabilidad del imputado. Si además el imputado ha sido interrogado, y todo ello genera en la Fiscal convicción sobre su responsabilidad, podrá solicitar el Proceso Inmediato (p, 24).

Como nos aclara la página web CORPORATE CRIMINAL LAWYER ALBERTO JURADO precisando que:

Para que el fiscal pueda acusar y por ende pedir el enjuiciamiento penal de una persona debe existir “fundamento serio” y luego debe el Juez de Control analizar la acusación, a fin de establecer si hay alta probabilidad de una sentencia condenatoria.

Para ello, el Fiscal debe contar con suficientes elementos de convicción que demuestren la comisión del hecho y la responsabilidad del sujeto; en este sentido, debe estar acreditado el hecho delictivo y fundados elementos de convicción que señalen al sujeto como autor o partícipe de los hechos, pero

adicionalmente debe realizar el ofrecimiento de los medios de prueba que resulten necesarios a los efectos de generar la convicción suficiente en el Juez de Juicio, a los fines de desvirtuar la presunción de inocencia que arroja al imputado.

Decretado el inicio de la investigación, el fiscal del Ministerio Público debe ordenar sin perder tiempo se investigue para el esclarecimiento de los hechos y lograr la identificación del o los autores y cómplices del delito, cuyos resultados serán la base sobre la cual el representante fiscal sostendrá su acusación. A ello se refiere el Código Orgánico Procesal Penal, cuando establece que toda acusación debe contener “los fundamentos de la imputación, con expresión de los elementos de convicción que la motivan”, los cuales representan las razones por las cuales el fiscal del Ministerio Público considera que el imputado fue autor o partícipe del delito investigado; debiendo posteriormente comprobar que los hechos cometidos son ciertamente conductas consideradas como delito por la ley.

Así las cosas, debe reiterarse que los elementos de convicción están conformados por las evidencias obtenidas en la fase de investigación o en el momento de la detención en los casos de flagrancia, que permiten reconocer que estamos en presencia de un delito y por ello se debe solicitar el enjuiciamiento del imputado, razón por la cual el legislador exige una debida fundamentación basada en los elementos de convicción (En: <http://www.alc.com.ve/elementos-de-conviccion/>)

Como ya se ha venido señalando en el párrafo anterior la importancia de tener elementos de convicción para el fiscal ya que este es uno de los medios que usa para que pueda desvirtuar su derecho a la presunción de inocencia del

investigado; para que de esta manera pueda generar convicción en el juez y seguir con el proceso de manera favorable para al Ministerio Público.

2. DERECHO DE DEFENSA

2.1. Antecedentes

El abogado de la prestigiosa ROBLETO GUTIÉRRES (2013) señala que los antecedentes del derecho de defensa en:

Las primeras civilizaciones en general no distinguían entre el derecho civil y el derecho penal. El primer escrito o los primeros códigos de la ley fueron redactados por los sumerios. Alrededor de 2100-2050 antes de cristo, por UrNammu, el rey sumerio de Ur. Promulgo el código que lleva su nombre, aunque antes de este, el código de Urukagina de lagash ya había sido promulgado. Otro aspecto importante a remarcar son los principios del código de Hammurabi. Estos códigos formaron el núcleo de la ley de babilónica. Los primeros signos de la moderna distinción entre delitos y los asuntos civiles nacen durante la invasión Normanda de Inglaterra. La noción especial de sanción penal, por lo menos en relación con Europa, surgió en la España antigua (véase Alfonso de Castro), cuando la teología imponía la noción de Dios sobre la pena (poena aeterna), y que por cuenta de un culpable, se convirtió en la transformación del derecho del derecho canónico en primer lugar y por último, el derecho penal secular.

No hay información histórica científicamente probable que demuestre que en los pueblos antiguos haya existido una profesión u oficio que corresponda a la abogacía. No obstante, vale anotar que entre los egipcios, caldeos, asirios, fenicios y hebreos, los sabios oradores, teólogos y filósofos, asumieron la tarea

de aconsejar al pueblo y en ocasiones la defensa del pueblo o la representación verbal de los intereses públicos y privados ante la administración judicial.

Cuando en la antigüedad se trató de un proceso acusatorio puro como en las ciudades de Grecia y Roma Republicana la defensa era un derecho indiscutible del imputado a quien se le informaba desde el primer momento la imputación formulada en su contra y se ubica en el mismo plano jurídico del acusador.

En un primer momento, el imputado podía actuar personalmente. Así por ejemplo, en Atenas el acusado podía defenderse personalmente y, hasta hubo un tiempo que ante el Areópago no le fue permitido defenderse por intermedio de abogados. En las ciudades Estados Griegos, el actuar en calidad de acusador o defensor ante el Areópago, y demás tribunales griegos, era confiada por las partes a oradores y hombres de cualidad elocuentes, sobre quien el afectado o interesado depositaba la confianza de que su causa estaría bien defendida y representada. Esta práctica fue desarrollándose fundamentalmente en Atenas con reformas instauradas por el “reconciliador y arconte” Solón quien reglamento la actuación ante los tribunales, dándole a la abogacía el carácter de una función pública y atribuyéndole un prestigio religioso (p, 10)

Como nos señala el catedrático BARRIOS GONZÁLEZ (2011), el cual conceptualiza los antecedentes al derecho de defensa en:

El derecho a la defensa penal constituye hoy una garantía fundamental; garantía que ha sido el producto de un largo proceso de evolución que inició desde las sociedades griegas y romanas, pasando por las civilizaciones

germanas alcanzando su consagración de principio fundamental con los revolucionarios franceses pasando, precisamente, a la constitución revolucionaria de 1790. Luego de los postulados de los revolucionarios franceses, el derecho a la defensa ha pasado de su consagración constitucional a un proceso de depuración ontológica e ideológica hasta alcanzar hoy el postulado de la defensa integral; esto es la unidad conceptual y práctica de la defensa material y técnica (p, 23).

Desde otro punto de vista GIMENO SENDRA (2015) menciona que:

Por ello, nuestro ordenamiento jurídico y las normas internacionales conciben el derecho de defensa como pilar de cualquier tipo de procedimiento y, por ende, como garantía del debido proceso. La defensa constituye un verdadero requisito para la validez del proceso, y la aplicación de la pena (p, 170).

El derecho de defensa para LANDA ARROLLO (2012) “reconocido en el artículo 139, inciso 14 de la Constitución, se proyecta como principio de interdicción para afrontar situaciones de indefensión, y como principio de contradicción de los actos procesales para asegurar la igualdad de oportunidades y descargos en el proceso. Y es que el derecho de defensa garantiza que: [...] toda persona sometida a un proceso o procedimiento no quede en estado de indefensión, por lo que su contenido esencial queda afectado cuando en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedido, por concretos actos de los órganos judiciales, de hacer uso de los medios necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos (p, 19).

“Este derecho es exigible en todas las etapas de los procedimientos judiciales o administrativos sancionatorios, por lo que ningún acto ni norma privada de carácter sancionatorio puede prohibir o restringir su ejercicio; ello en tanto que este derecho no solo puede ser vulnerado en el momento en que se sanciona a una persona sin permitirle ser oído con las debidas garantías, sino en cualquier etapa del proceso y frente a cualquier coyuntura.” (Landa, 2012, p.19)

2.2. Concepto

ALBERTO BINDER (2015) El ejercicio del derecho de defensa debe ser no solo permitido sino favorecido. El derecho de defensa es un atributo genérico que comprende un conjunto de garantías entre ellas el derecho a contar en el plazo razonable para organizar y preparar la defensa (p, 92).

NEYRA FLORES (2010) señala que:

El derecho de defensa está regulado expresamente en el artículo 11° de la declaración universal de derechos humanos (1948), en el artículo 14° inciso 3 de Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1966), y en el artículo 8°.2 de la convención Americana sobre Derechos humanos (p, 194). Dije

Del mismo pensamiento MORY PRINCIPE (2012) precisa que:

Todo ser humano por el hecho de serlo tiene derechos frente al Estado, derechos que este, o bien tiene el deber respetar y garantizar o bien está llamado a garantizar su acción a fin de satisfacer su plena realización. Uno de esos derechos que el Estado debe respetar y garantizar es el ejercicio pleno de la defensa, en diferentes ámbitos en que se medie un conflicto, con mayor razón

dentro de un proceso judicial de índole penal en que se determinará la libertad o la prisión de una persona (p, 490).

PEREZ VAGUERO La esencia de este derecho a la defensa radica en que, una vez que se le haya informado de la acusación, debe garantizarse al acusado “la posibilidad de ejercer su derecho de manera efectiva, concreta y, en especial, con un margen de tiempo” adecuado para prepararla. El contenido esencial del derecho de defensa queda afectado cuando, en el seno de un proceso judicial, cualquiera de las partes resulta impedido, por concretos actos de los órganos judiciales de hacer uso de los medios necesarios, suficientes y eficaces para ejercer la defensa de sus derechos e intereses legítimos. EXP. N°1230-2002.HC/TC (p, 26, En: bit.ly/29VMjQG).

PASTOR SALAZAR (2015) nos indica que:

No olvidemos que el derecho de defensa a su vez es el principio y garantía que constituye un principio porque sirve de fundamento para el desarrollo del proceso y para la interpretación de la norma adjetiva. Es una garantía porque el ordenamiento jurídico dota de mecanismos legales para hacerlo valer durante el proceso (p, 385-386).

NEYRA FLORES (2010) lo conceptualiza de la siguiente manera:

Tal como puede advertirse existe una clara regulación del derecho de defensa en los tratados internacionales de derechos humanos, por lo que toda regulación nacional debe ser acorde con las normas y tratados internacionales a los que el Perú está adscrito y que regulan esta materia.

Así, que en el contexto nacional el derecho de defensa está reconocido constitucionalmente (p, 195).

Así, mismo señala el citado autor que:

El derecho a la defensa por importancia y el contenido de que abarca, se constituye en: un principio que informa todo el ordenamiento procesal, un derecho subjetivo individual, de carácter público, de intervenir en el proceso penal en todo momento para decidir acerca de una posible reacción pena, y una garantía que se le asiste a todo imputado de ser asistido por un abogado defensor, a ser informado de la imputación en todos los estados del proceso, de poder ofrecer los elementos probatorios que considere necesarios, a contradecir prueba, invocar prueba prohibida y exponer los elementos facticos y jurídicos que permitan al tribunal declarar su absolución (p, 195).

La Constitución Política del Perú en el artículo 139, inciso 14), reconoce el principio de no ser privado del derecho de defensa en ningún estado del proceso.

Como lo señala la docente VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ (2008) que:

Toda persona será informada inmediatamente y por escrito de la causa o razones de su detención. Tiene derecho a comunicarse personalmente con un defensor de su elección y a ser asesorada por este desde que es citada o detenida por cualquier autoridad (En:

<http://www.eumed.net/rev/cccss/02/ivvv.htm>).

Por derecho de defensa, puede entenderse el derecho fundamental que asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso

penal el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente. La vigencia del principio supone, como lo señala MORENO CATENA, el reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa. De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de la acusación y de la sanción penal. También confluyen en la defensa otras garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción procesal, el derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el derecho a no declarar contra sí mismo o declararse culpable (En: <http://www.eumed.net/rev/cccss/02/ivvv.htm>)

Según el tratadista extranjero ARAYA VEGA señala que:

El NCPP, aprobado con el D. Leg. N° 957, constitucionaliza el proceso penal, con el reconocimiento de principios y valores constitucionales: juicio oral, público y contradictorio, presunción de inocencia, principios de igualdad procesal, principio acusatorio, legitimidad de la prueba, derecho de defensa irrestricto, participación y acceso al proceso de la parte agraviada y protección de la víctima (En: <https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/2201bc804dcb9c3dba9efa73e0b6364e/lusInFraganti2+ULTIMO.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=2201bc804dcb9c3dba9efa73e0b6364e>).

2.3 Derecho a ser asistido por un abogado

Así, mismo señala NEYRA FLORES (2010) que:

Una vez conocido los cargos de imputación se hace necesario el derecho a contar con un abogado defensor de su elección (lo que se denomina la defensa técnica), es decir con un defensor letrado en conocimiento de las leyes y del proceso, que a su vez tiene derecho a participar en todos los actos del proceso y a interpretar la prueba y el derecho conforme le favorezca a su patrocinado (p, 204)

Cuando se produce la detención y el poco tiempo que tiene el abogado para que prepare una adecuada defensa por lo que se considera que es una vulneración a su derecho fundamental antes mencionado.

La defensa integral se basa en que el sujeto de investigación, que actúa en ejercicio de la defensa material no impide el ejercicio de la defensa técnica que debe cumplir el abogado defensor y que ambas pueden actuar por separado o en su conjunto y que el ejercicio de una no es pretexto para desestimar o ilegitimar el ejercicio de la otra; como tampoco que el ejercicio de la defensa técnica sirva de excusa para desestimar o ilegitimar el ejercicio de la defensa material; como tampoco interrumpir ni la una ni la otra. En nuestro sistema no pocas veces la defensa penal es desestimada o ilegitimada ya sea en su manifestación material o técnica so pretexto de una insuficiencia normativa constitucional o legal, o por arbitrariedad de los funcionarios o simplemente dilación por omisión, esto es por inactividad de los despachos (p, 24).

El magistrado ROBLETO GUTIÉRREZ (2013) define al derecho de ser asistido por un abogado en sentido amplio:

La defensa “como aquella actividad que se ejercitó durante todo el proceso con el fin de eliminar la duda que el ejercicio de la acción penal ha producido con relación a una persona determinada”.

La garantía constitucional de la inviolabilidad de la defensa se encuentre contemplada en el artículo 39 de la Constitución Política, el cual implica el reconocimiento de una serie de derechos, que son propios de toda la persona, por la sola circunstancia de ser vinculado como el presunto autor de un hecho con naturaleza del delito.

Por su parte el artículo 8.1 de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos desarrolla todo un elenco de garantías judiciales relativas al derecho de defensa que le asiste al imputado, entre las cuales destaquín: artículo 8.1.d. “El derecho del imputado a defenderse personalmente a defenderse personalmente. e.- el derecho a ser asistido por un defensor de su elección y derecho a comunicarse libre y privadamente con él. f.- derecho que se le nombre un defensor proporcionado por el Estado, en el caso de que transcurrido el plazo de ley no haya nombrado uno de su confianza.

En cuanto a la legislación comparada, es conveniente citar a la sexta Enmienda de la constitución de los Estados Unidos de América estipula que “en todos los procesos criminales y el acusado gozará del derecho...a contar con la asistencia de un abogado para su defensa” (p, 24).

Sin embargo, hasta 1932 cuando la Suprema Corte Interamericana declaró que el derecho de defensa era tan fundamental que la cláusula sobre el sobre legal de la Decimocuarta Enmienda exigía que los estados brindaran la asistencia efectiva de un abogado a todos los casos de crímenes capitales. Seis años después, amplió la disposición a todos los acusados federales. La expansión de ese derecho continuó durante los años sesenta y setenta. En los años ochenta volvió a ampliarlo cuando la corte dictaminó que los indigentes

cuya defensa se basa en la locura tenían incluso el derecho a contar con un psiquiatra pago con fondos públicos (p, 25).

Como lo señala la docente VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ (2008) que:

Derecho fundamental que asiste a todo imputado y a su Abogado defensor a comparecer inmediatamente en la instrucción y a lo largo de todo el proceso penal a fin de poder contestar con eficacia la imputación o acusación contra aquél existente, articulando con plena libertad e igualdad de armas los actos de prueba, de postulación e impugnación necesarios para hacer valer dentro del proceso penal el derecho a la libertad que asiste a todo ciudadano que, por no haber sido condenado, se presume inocente. La vigencia del principio supone, como lo señala MORENO CATENA, el reconocimiento del ordenamiento jurídico a un derecho de signo contrario el derecho que tiene el imputado o procesado de hacer uso de una adecuada defensa. De tal manera que la defensa opera como un factor de legitimidad de la acusación y de la sanción penal. También confluyen en la defensa otras garantías y derechos como la audiencia del procesado, la contradicción procesal, el derecho a la asistencia técnica del abogado. El uso de medios de prueba, el derecho a no declarar contra sí mismo o declararse culpable (En: <http://www.eumed.net/rev/cccss/02/ivvv.htm>).

La tratadista STELUTA IONESCU (2011) y otros hacen una precisión sobre el derecho a la defensa nos dice que:

Durante el juicio, el defensor tiene el derecho a asistir al acusado, a ejercitar los derechos procesales al acusado y, cuando el acusado es detenido, tiene el derecho a ponerse en contacto con él. Observamos que sus derechos durante el juicio no

son tan explícitos como en la fase de investigación, pero esto no implica una restricción de ellos, sino un ejercicio de acuerdo con la nueva etapa procesal (p, 8). De acuerdo con el profesor GHEORGHE DUMITRU (2011), los elementos que completan el derecho de defensa para el acusado son la posibilidad ofrecida a estos de no hacer ninguna declaración (derecho a guardar silencio), el derecho de cualquier parte de participar a las discusiones, así como el derecho a la ejercitación de cualquier vía de ataque. En la opinión del profesor Ion Neagu, el aspecto institucional combinado en un modo indirecto con el derecho de defensa se refleja de tres maneras: la posibilidad de las partes de defenderse durante el juicio penal, la obligación de los órganos judiciales de tener en cuenta de oficio los aspectos favorables para las partes, y también la posibilidad, y, a veces, la obligación de conceder asistencia jurídica durante el proceso penal. Sobre las últimas dos remitimos a los comentarios anteriores; la posibilidad de las partes para defenderse nos revela, en opinión de Neagu, las modalidades indirectas de ejercitación del derecho de defensa tanto durante el periodo de investigación penal, como el del juicio, revelando su parte sustancial. Así, el acusado participa directamente a la realización de unos actos de investigación penal, tales como la investigación del lugar o la reconstrucción y, en la etapa de juicio, asiste a todos los actos (p, 9).

MORENO CATENA (2010) precisa acerca de defensa que:

El derecho a la defensa es un derecho fundamental reconocido constitucionalmente y en los derechos humanos, el cual debe salvaguardarse en cualquier procedimiento jurisdiccional. Es parte del debido proceso y requisito esencial de la validez del mismo.

Consiste en la posibilidad jurídica y material de ejercer la defensa de los derechos e intereses de la persona, en juicio y ante las autoridades, de manera que se

asegura la realización efectiva de los principios de igualdad de las partes y de contradicción.

Asimismo, constituye un derecho ilimitado, por ser un derecho fundamental absoluto. Justamente, la defensa de la persona en juicio y de sus derechos se concibe sola mente través de la intervención del abogado.

La declaración universal de los derechos humanos, adoptada por la asamblea general de las naciones unidas en su resolución 217 A (III) el 10 de diciembre de 1948, establece que toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y co justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal.

Asimismo, toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público, en el momento de cometerse no fueron delictivos según el derecho nacional o internacional. Tampoco se impondrá pena más grave que la aplicable en el momento de la comisión del delito.

Conforme a la misma Declaración, nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su correspondencia, ni de ataques a su honra o a su reputación. Toda persona tiene derecho a la protección de la ley contra tales injerencias o ataques.

El Pacto Internacional De Derechos Civiles y Políticos establece en su artículo 14 que todas las personas son iguales ante los tribunales y los cotes de justicia, y toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente y con las debidas garantías de los tribunales competentes, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la

sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulada contra ella para la determinación de sus derechos u obligaciones de carácter civil (p, 6).

SUB CAPÍTULO II: PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACIA

Para adentrarnos al estudio del plazo razonable es menester hacer un estudio del debido proceso, este proceso se desprende contiene garantías constitucionales y dentro de ellos se encontramos el derecho antes mencionado.

1. DEBIDO PROCESO

Según lo señala PEDRO SAGÜÉS (1993) que el debido proceso:

Tiene su origen en el due process of law anglosajón, se descompone en: el debido proceso sustantivo, que protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales y, el debido proceso adjetivo, referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales.

Su incorporación al constitucionalismo latinoamericano ha matizado sus raíces, señalando que el debido proceso sustantivo se refiere a la necesidad de que las sentencias sean valiosas en sí mismas, esto es, que sean razonables; mientras que el debido proceso adjetivo alude al cumplimiento de ciertos recaudos formales, de trámite y de procedimiento, para llegar a una solución judicial mediante la sentencia (p, 328)

Del mismo modo GARCÍA TOMA (1993) señala que:

Por su parte la doctrina y la jurisprudencia nacionales han convenido en que el debido proceso es un derecho fundamental de toda persona peruana o extranjera, natural o jurídica y no sólo un principio o derecho de quienes ejercen la función jurisdiccional. En esa medida, el debido proceso comparte el doble carácter de los derechos fundamentales: es un derecho subjetivo y particular exigible por una

persona y, es un derecho objetivo en tanto asume una dimensión institucional a ser respetado por todos, debido a que lleva implícito los fines sociales y colectivos de justicia.

En ese entendido, el debido proceso en tanto derecho fundamental con un doble carácter es oponible a todos los poderes del Estado e incluso a las personas jurídicas. Por ello, el debido proceso de origen estrictamente judicial, se ha ido extendiendo pacíficamente como debido procedimiento administrativo ante las entidades estatales civiles y militares y debido proceso parlamentario ante las cámaras legislativas, así como, debido proceso inter privados aplicable al interior de las instituciones privadas (p, 236).

Del mismo pensamiento Saenz Dávalos (1999) precisa que:

En consecuencia, el debido proceso encierra en sí un conjunto de garantías constitucionales que se pueden perfilar a través de identificar las cuatro etapas esenciales de un proceso: acusación, defensa, prueba y sentencia, que se traducen en otros tantos derechos que enunciativamente a continuación se plantean (p, 483-564).

2. PLAZO RAZONABLE

2.1. ANTECEDENTES

Así, si bien la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 (DUDH) no consideró entre ellos el derecho a un juicio rápido, sí se ocupó expresamente de la cuestión, ese mismo año, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, cuyo art. XXV establece que “todo individuo que haya sido privado de su libertad tiene derecho [...] a ser juzgado sin dilación injustificada”

En el mismo orden de ideas El Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales de 1950 (CEDH) es el

primero de estos tratados internacionales que establece este derecho bajo la fórmula más usual del plazo razonable: “toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa, públicamente y en un plazo razonable por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá sobre sus derechos y obligaciones de carácter civil, o bien sobre el fundamento de toda acusación penal dirigida contra ésta” (art. 6.1).

Luego, en 1966, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU (PIDCP: en vigor desde 1976) reguló, también en dos oportunidades, este derecho básico del imputado. En primer lugar, en el art. 9.3, al referirse a los derechos de quien está privado de su libertad provisionalmente, se estableció que toda persona detenida “tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable”. En segundo lugar, en el art. 14.3.c se recurrió a otra fórmula para regular el mismo derecho de la persona acusada: “ser juzgada sin dilaciones indebidas”.

La Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), dada en San José de Costa Rica en 1968 y en vigor desde 1978, siguió textualmente en esta materia, como en casi todas, el modelo europeo. En efecto, en el art. 7.5 se establece que “toda persona detenida o retenida [...] tendrá derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable”. A su vez, y con más precisión, el art. 8.1 dispone que “toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella”

La Convención sobre los Derechos del Niño, de 1989 y en vigor desde 1990, preceptúa que a todo ser humano menor de edad sometido a proceso penal se le

debe garantizar “que la causa será dirimida sin demora por una autoridad u órgano judicial competente” (art. 40.2.b.iii).

Del mismo modo hace una precisión el doctor ROJAS PASTOR (2004) sobre lo antes mencionado nos dice que:

Son numerosos los órdenes constitucionales del derecho comparado que incluyen al juicio penal rápido expresamente entre los derechos de la persona sometida a persecución penal. Así, p. ej., la Constitución de Canadá establece que toda persona acusada de delito tiene derecho a ser juzgada dentro de un plazo razonable (art. 11.b); la Constitución de México prescribe plazos de entre cuatro meses y un año como máximos para la duración de los procesos penales (art. 20 VIII); según la Constitución de Japón el acusado tiene derecho a un juicio rápido y público ante un tribunal imparcial (art. 37); la Constitución de Portugal dispone que el acusado debe ser juzgado tan rápidamente como ello sea compatible con la salvaguarda del ejercicio de su defensa (art. 32.2); la Constitución española otorga a todas las personas el derecho a un proceso público sin dilaciones indebidas (art. 24.2); por último, según una reforma reciente, la Constitución italiana sostiene que la ley debe asegurar la duración razonable del proceso (art. 111) (p, 55).

Del mismo criterio en antes mencionado precisa que:

Todas estas formulaciones remiten a una misma configuración del derecho fundamental en análisis y tienen los mismos alcances: el imputado goza de un derecho constitucional subjetivo según el cual su proceso debe finalizar definitivamente dentro de un plazo que asegure un enjuiciamiento expeditivo. Por ello, en principio, estas diversas fórmulas de regulación de un mismo derecho son indistintas: “por derecho a un proceso sin dilaciones indebidas’ no cabe entender

concepto diferente al de que la causa sea oída ‘dentro de un plazo razonable’”. Sin embargo, este trabajo ha de ceñirse más estrechamente a la expresión que, de entre todas las que resultan equivalentes, tiene la mejor factura técnica, a saber, la que prescribe el derecho del acusado a ser juzgado dentro de un plazo razonable, pues ella, a pesar de una inevitable textura abierta propia de toda regulación de derechos fundamentales, brinda, al menos en parte, una precisión insuperable al establecer la idea de plazo, concepto determinado con toda exactitud por la metodología del derecho procesal penal. Por otra parte, la fórmula del plazo razonable es por sí sola, aunque no únicamente, derecho entre una mayoría de naciones que están emparentadas con una misma cultura jurídica, aunque algunas más lejanamente (así, p. ej. Latinoamérica y Europa CEDH, 6.1 y CADH, 8.1, respectivamente). Además, la fórmula citada también lleva la preferencia debido a que la opinión dominante que se ha impuesto en esta materia en el ámbito cultural citado ha sido desarrollada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) a partir de la regla del plazo razonable (p, 66).

2.2. Concepto

La doctora MARCELA ZUÑIGA hace un pequeño concepto de plazo razonable y preciso que de acuerdo a: que te ha dicho

Los márgenes dentro de los cuáles deben contarse el plazo razonable de duración del proceso van desde el día en que se acusa a alguien y se extiende hasta el fallo que resuelva el fundamento de la acusación, incluyendo la resolución del tribunal de segunda instancia si se recurre

Artículo 7.5 convención americana sobre derechos humanos:

Toda persona detenida o retenida debe ser llevada, sin demora, ante un juez o funcionario autorizado para ejercer funciones judiciales y tendrá derecho a

ser juzgada dentro de un plazo razonable o ser puesta en libertad, sin perjuicio de que continúe el proceso. Su libertad podrá estar condicionada a garantías que aseguren su comparecencia en el juicio.

De acuerdo a la conceptualización realizada por DIAZ VARGAS menciona que:

El derecho al plazo razonable constituye un derecho fundamental, que si bien no está reconocido explícitamente en nuestra Constitución Política del Estado, pues deriva del debido proceso, en su calidad de derecho continente.

El derecho al plazo razonable, constituye una manifestación del derecho al debido proceso y alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los objetos de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para que ello ocurra debe existir una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable.

El plazo razonable está referido al plazo de duración del proceso en general o de un estadio del proceso, que ha sido introducido en algunas legislaciones como un derecho fundamental del imputado a ser juzgado dentro de un plazo razonable. El plazo razonable siempre está ligado a la excesiva duración del proceso y no a lo limitado en el tiempo de las mismas, de ahí que en la jurisprudencia se invoca la doctrina del juicio penal rápido para poner fin al proceso. Sobre este derecho la Corte Interamericana de Derechos Humanos en concordancia con el Tribunal Constitucional han manifestado que el derecho al plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurar que ésta se decida prontamente (Caso

Suárez Rosero contra Ecuador, sentencia sobre el fondo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fundamento 70).

El plazo razonable en términos de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (en adelante CADH), está referido a que "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter" (Artículo 8.1 de la CADH); así también la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el CASO GENIE LAQUÍYO VS. NICARAGUA, haciendo referencia al artículo 8.1 de la Convención ha precisado que el concepto "plazo razonable" no es un concepto de sencilla definición, y que se pueden invocar para precisarlo los elementos que ha señalado la Corte Europea de Derechos Humanos en varios fallos en los cuales se analizó este concepto, pues este artículo de la (CADH) es equivalente en lo esencial, al 6 del Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, de la cual podemos afirmar que el plazo razonable es la expresión más significativa que utiliza la dogmática de los derechos fundamentales para regular la prerrogativa del imputado a que su proceso termine tan pronto como sea posible.

Siguiendo la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, según lo prescrito por el artículo V del Título Preliminar de Código Procesal Constitucional, constituye fuente de interpretación de los

derechos fundamentales, un proceso penal que dure más de 50 meses sin llegar a su conclusión configura una vulneración evidente del derecho al plazo razonable proceso reconocido por la Convención. Así, en el párrafo 73 de la sentencia del 12 de noviembre de 1997, caso Suárez Rosero vs. Ecuador se estableció:

73. Con fundamento en las consideraciones precedentes, al realizar un estudio global del procedimiento en la jurisdicción interna contra el señor Suarez Rosero, la Corte advierte que dicho procedimiento duró más de 50 meses. En opinión del acote, este periodo excede en mucho el principio de plazo razonable consagrado en la Convención Americana. (En: <http://www.monografias.com/trabajos91/vulneracion-derecho-plazorazonable/vulneracion-derecho-plazo-razonable.shtml#conceptoda>).

2.3. Regulación nacional

Desde la perspectiva del abogado penalista litigante NAKASAKI SERVIGÓN (2017) conceptualiza:

NCPP 2004 ha considerado, al colocar al derecho de defensa en el título preliminar, como un principio que guiará todo el desarrollo del proceso penal, en ese sentido el artículo IX señala: “1. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra, y a ser asistida por un abogado defensor de su elección, o en su caso, por un abogado de oficio desde que es citada o detenida por la autoridad. También tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa; a ejercer su autodefensa material; a intervenir en plena igualdad en la actividad probatoria; y en las condiciones previstas por ley, a utilizar los

medios de prueba pertinentes. El ejercicio del derecho de defensa se extiende a todo Estado y grado de procedimiento, en la forma y oportunidad que la ley señale.

2. Nadie puede ser obligado inducido a declarar o reconocer culpabilidad contra sí mismo, contra su cónyuge o contra sus parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

3. El proceso penal garantiza, también el ejercicio de los derechos de información y de participación procesal a la persona agraviada o perjudicada por el delito. La autoridad pública está obligada a velar por su protección y a brindarle un trato acorde con su condición (p, 194-195).

3. EL PLAZO RAZONABLE COMO GARANTÍA AL DEBIDO PROCESO PENAL

SANCHEZ-CRUZAT (1989). Conceptualiza:

El debido proceso indica el derecho de los justiciables de acceder a una tutela judicial efectiva, a través del desarrollo de un procedimiento reglado, en el cual se observen una serie de principios y garantías, cuya finalidad última es alcanzar justicia. A su vez, este derecho lleva implícito una serie de “derechos filiales” reconocidos como fundamentales y que incluye el derecho a la defensa, el principio de igualdad de armas, el principio de contradicción, publicidad, celeridad y presunción de inocencia (p, 194).

En esta línea, el TC peruano, siguiendo la doctrina jurisprudencial de la Corte Internacional de Derechos Humanos, ha establecido que el derecho al plazo razonable es propiamente una “manifestación implícita” del derecho al debido proceso y a la tutela judicial efectiva y, en tal medida, se funda en el respeto a la dignidad de la persona humana. Así, el principio del plazo razonable tiene

como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurarle que ésta se decida prontamente.

Cabe precisar que el hecho de que el derecho al plazo razonable sea considerado como un “contenido implícito” del derecho al debido proceso trae como consecuencia que aquel pueda ser identificado como un derecho fundamental de configuración autónoma. Así lo ha entendido el Tribunal Constitucional peruano, agregando, además que, no deben confundirse tales contenidos implícitos de los “derechos viejos” con los derechos no enumerados, es decir, aquellos no mencionados en el texto constitucional, pero que derivan de su artículo 3º.

Mediante Ley N.º 30558, publicada en el diario oficial *El Peruano* el 9 de mayo del 2017, se modifica el literal f del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú.

La referida Ley ha establecido:

Artículo único. Modificación del literal f del inciso 24 del artículo 2º de la Constitución Política del Perú

Modifícase el literal f del inciso 24 del artículo 2 de la Constitución Política del Perú, conforme al texto siguiente:

“**Artículo 2.** Toda persona tiene derecho: (...) 24. A la libertad y a la seguridad personales. En consecuencia: (...) f. Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. La detención no durará más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las investigaciones y, en todo caso, el detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro del plazo máximo de cuarenta y ocho horas o en el término de la

distancia.

Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje, tráfico ilícito de drogas y a los delitos cometidos por organizaciones criminales. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.

3.1. VIOLACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE

Cabe destacar que COUTURE ETCHEVERRY (1989), menciona sobre la violación del plazo razonable en conjunto con el debido proceso, de origen anglosajón (due process of law) expresa la potestad de los justiciables de acceder a la tutela judicial efectiva a través del desarrollo de un procedimiento el cual observe básicos principios y garantías, concluyendo en un fallo justo, razonable y proporcional (...) y ha sido definido, en términos muy generales por la doctrina comparada, como aquél derecho fundamental que garantiza al ciudadano que su causa sea oída por un tribunal imparcial y a través de un proceso equitativo, derecho al proceso debido que agrupa y se desdobra en un haz de derechos filiales reconocidos a la vez todos ellos como derechos fundamentales y que incluye; entre otros principios y garantías, el derecho a la defensa, el principio de igual de armas, el principio de contradicción, el principio de publicidad, el principio de aceleración procesal y el de presunción de inocencia (p, 194).

De la misma opinión menciona PESTANA URIBE (2009), que:

Nótese que respecto a los llamados contenidos implícitos el Tribunal (Constitucional) ha sostenido que, en ocasiones, en efecto, es posible identificar dentro del contenido de un derecho expresamente reconocido otro derecho que,

aunque susceptible de entenderse como parte de aquel, es susceptible de ser configurado autónomamente. Agrega el TC, que, por ejemplo, el derecho al plazo razonable es un contenido implícito del derecho al debido proceso. Pero también el Tribunal Constitucional ha dicho que tales contenidos implícitos de los derechos viejos no deben ser confundido con los derechos nuevos o no enumerados” (p, 283).

DIAZ VARGAS señala que:

La violación del derecho al plazo razonable en la investigación preliminar, cabe señalar que este derecho constituye una manifestación del derecho al debido proceso y alude a un lapso de tiempo suficiente para el esclarecimiento de los hechos objeto de investigación y la emisión de la decisión respectiva. Si bien es cierto que toda persona es susceptible de ser investigada, no lo es menos que para que ello ocurra debe existir una causa probable y la búsqueda de la comisión de un ilícito penal en un plazo que sea razonable (En: <http://www.monografias.com/trabajos91/vulneracion-derecho-plazorazonable/vulneracion-derecho-plazo-razonable.shtml>).

3.2. Los efectos jurídicos de la violación del plazo razonable.

VITERI CUSTODIO (2012) menciona que los efectos jurídicos de la violación del plazo razonable existen cuatro posiciones al respecto:

La primera, exige la conclusión del proceso penal por sobreseimiento, en mérito a que las consecuencias de las dilaciones indebidas ya significan para el autor un castigo suficiente; La segunda, vigente en Alemania, es denominada “solución de la medición de la pena” o “solución de determinación de la pena”, y señala que la violación del plazo razonable constituye una causa de atenuación de la pena; Una tercera posición, utilizada por el Tribunal Constitucional español, señala que las

consecuencias jurídicas deben ser de naturaleza sustitutoria o complementaria. Entre las medidas sustitutorias figuran la exigencia de responsabilidad civil y aun penal del órgano judicial, así como la responsabilidad civil del Estado por mal funcionamiento de la administración de justicia. Y entre las medidas complementarias pueden situarse, por ejemplo, el indulto o la aplicación de la remisión condicional de la pena; Finalmente, la cuarta posición, más radical, ha sido la sostenida y adoptada por la Corte Suprema de los Estados Unidos, la misma que indica que la consecuencia o solución procesal es la declaración de nulidad de la acusación fiscal y de la eventual sentencia. Teniendo presente las diferentes posturas, el TC, que fue duramente criticado por su decisión de “excluir” del proceso penal al General Chacón Malaver, en el Caso Salazar Monroe optó por “racionalizar” su posición, y crear una nueva, según la cual: 1. En caso se constate la violación del derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable, además de estimarse la demanda se ordenará a la Sala Penal emplazada que conoce el proceso penal que, en el plazo máximo de 60 días naturales, emita y notifique la correspondiente sentencia que defina la situación jurídica del favorecido, y 2. Si la Sala Penal emplazada no cumple con emitir y notificar la respectiva sentencia que defina la situación jurídica del favorecido, de oficio deberá sobreseerlo inmediatamente del proceso penal (p, 9).

3.3. DERECHO COMPARADO

3.3.1 Argentina

Se dictó la Ley N° 2784 que regula el Código Procesal Penal para la provincia de Neuquén, que entró en vigencia el 14 de enero del 2014 y en su artículo 18º, respecto del Plazo Razonable ha señalado que “Toda persona tiene derecho a

una decisión judicial definitiva en tiempo razonable”; y respecto a la duración máxima del proceso penal común ha señalado en su artículo 87º que “Todo procedimiento tendrá una duración máxima de tres años improrrogables, contados desde la apertura de la investigación penal preparatoria. Transcurrido ese plazo se producirá la extinción de la acción penal y deberá darse el sobreseimiento del imputado”. Por otro lado, con respecto a la investigación preparatoria el artículo 158º señala “(...), Transcurrido ese plazo se producirá la extinción de la acción penal y deberá dictarse el sobreseimiento del imputado, (...)”.

3.3.2 Costa Rica

Respecto a la exclusión de procesado debido a la vulneración de plazo razonable, el artículo 30º (causas de extinción de la acción penal) de su Código Procesal Penal señala que, la acción penal se extinguirá por causas siguientes: “i) El incumplimiento de los plazos máximos de la investigación preparatoria, en los términos fijados por este Código”, luego el artículo 171º (duración del procedimiento preparatorio). En su artículo 172º (extinción de la acción penal por cumplimiento de plazo).

3.3.3 España

La Cadena SER ha tenido acceso al borrador de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. El Gobierno quiere presentar el proyecto de la nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal para su aprobación por las cortes antes de que finalice la legislatura. Desaparece el modelo decimonónico y se incorporan

novedades de otros países europeos. Juristas consultados por la SER elogian la nueva ley.

La revolución ha llegado después de 129 años. El procedimiento penal español puede sufrir un cambio radical en su contenido y en su desarrollo si finalmente el proyecto de reforma de la LECRIM que el gobierno quiere presentar ante el parlamento antes de que acabe la legislatura sale adelante. El nuevo modelo del procedimiento penal español introduce cambios

históricos que redefinen el papel de juez y del fiscal. A partir de la reforma, los jueces dejan de investigar y su misión será velar por las garantías y derechos del sospechoso. Se refuerza así su posición de jefes y garantes del proceso. Se establecen filtros para garantizar la presunción de inocencia: el juez de garantías primero, el juez de la audiencia preliminar después y, por último, el juicio. Se sustituye la figura del imputado por la del investigado y se crea el estatuto de la víctima para acomodar nuestro ordenamiento jurídico a las exigencias de la Unión Europea.

La fiscalía será quien dirija la investigación y podrá archivar el caso si considera que no hay indicios de delito. Aunque su decisión es recurrible ante el "juez de garantías". La policía dependerá exclusivamente, en régimen de monopolio, de lo que le ordene el fiscal y cesará su actividad cuando identifique el presunto responsable. Por primera vez se regula la colocación de micrófonos en las viviendas, las intervenciones telefónicas y se define la actividad del agente encubierto.

El plazo de incomunicación por orden judicial podría ampliarse, según el documento, hasta los 13 días y aumentan las garantías. El detenido será grabado en video y estará asistido cada ocho horas por un médico forense y

otro designado por el Mecanismo de Prevención de la Tortura (En: http://cadenaser.com/ser/2011/07/05/espana/1309823411_850215.html).

4. EJERCICIO DE LA ABOGACIA

La Ley Orgánica del Poder Judicial y su modificatoria por la Ley 27020, en su Art. 285°; señala “Para ejercer la abogacía se debe tener Título de abogado, hallarse en ejercicio de los derechos civiles, tener inscrito el Título Profesional en la Corte Superior de Justicia más cercana; e igualmente estar inscrito en el Colegio de Abogados del Distrito Judicial correspondiente y si no lo hubiere en el Distrito Judicial más cercano”; bastará para ejercer a nivel nacional estar inscrito en un sólo Colegio de Abogados y una Corte Superior.

El maestro MENDOZA AYMA (2016) menciona que:

De hecho, la premura (...) de las Diligencias Preliminares en la policía materialmente imposibilita la propuesta y práctica de actos defensivos, dado que la concurrencia de la defensa técnica generalmente la defensa pública se limita a acompañar y suscribir los actos de investigación realizados policialmente, pues precisamente por la flagrancia del hecho recién toma conocimiento del caso, y es poco probable que pueda articular una estrategia de acopio de información defensiva (...).

Agotado ese primer momento, el Ministerio Público, siempre dentro del exiguo tiempo restante de las 24 horas, tiene que ejercer sus atribuciones bien promoviendo una salida alterna o bien preparando el requerimiento de inicio del proceso inmediato; en ese lapso, la defensa técnica si continua en vigilia permanente obviamente por ser un momento diferente y básicamente de despacho

burocrático tampoco puede articular una estrategia de acopio de información conforme a una estrategia de defensa.

Esos dos momentos policial y fiscal, por lo general, generan un contexto de innegable presión institucional, de tal manera que se configura un contexto para que el imputado acepte de manera incondicional los hechos.

Conforme a lo señalado, se concluye que la garantía del plazo razonable está completamente anulada en el proceso inmediato por flagrancia. Por más que el caso sea fácil, no hay duda que no configura la garantía del plazo razonable, pues por su propio diseño el proceso inmediato por flagrancia se orienta en lógica de configurar solo los hechos imputados reputados como flagrantes. Simplemente se asume esa posición normativa, sin posibilidad de realizar una defensa eficaz.

Esa es la razón por lo que es urgente la defensa del proceso inmediato regular y el plazo necesario modulado dentro de 30 días, para los casos fáciles; y cuestionar el proceso inmediato por flagrancia, centralmente por la anulación de la garantía procesal del plazo necesario.

Acierta el profesor ALFREDO ARAYA, cuando refiere que el plazo razonable debe configurarse en función de la complejidad del caso; empero, una cosa es la modulación del plazo en función de las necesidades concretas del caso, y otra asumir fictamente que el momento de las 24 horas configura el plazo necesario para preparar una estrategia de defensa, por más que el caso sea fácil. De hecho, los casos complejos previstos normativamente –y los de complejidad no previstos normativamente– requieren de los plazos previstos para el proceso común. En ese orden, para los casos fáciles y flagrantes urge operativizar el proceso inmediato regular (EN: <http://legis.pe/la-garantia-del-plazo-razonable-esta-completamente-anulada-en-el-proceso-inmediato-por-flagrancia/>).

Llegamos a la conclusión de que el ejercicio de la abogacía se ve de alguna manera limitada por los plazos tan cortos que se presenta en la figura de proceso inmediato por flagrancia, ya que como se viene estudiando que este proceso omite completamente las fases del proceso común que son investigación preparatoria y etapa intermedia; por su misma naturaleza de proceso especial pasa de las diligencias preliminares a juicio oral directamente en un plazo de 60 días, y en alguno de los casos los abogados que son contratados por la familia para la defensa del investigado le es más complicado por que el tiempo para preparar la defensa es demasiado corto y solo le garantiza al investigado que su derecho a la defensa no sea vulnerado pero prácticamente si se ve el problema a profundidad es totalmente vulnerado y no existe una adecuada defensa técnica.

5. DERECHO AL TIEMPO RAZONABLE PARA PREPARAR LA DEFENSA

ROBLETO GUTIÉRREZ (2013) nos menciona acerca del derecho al tiempo razonable para preparar la defensa es:

La defensa del procesado es un derecho últimamente unido al ser humano es un derecho natural. Y de acuerdo a Carnelutti se basa en un principio de contradicción, así “El juicio es síntesis de Acusación y Defensa no se puede dar acusación sin defensa, lo cual es un contrario y por eso igual a la acusación. De esto se deduce que la defensa es producto de la contradicción existente, siendo por lo tanto irrenunciable” (p, 43).

No podemos dejar de señalar un caso emblemático que ocurrió en los Estados Unidos para ellos cabe traer a colación la sentencia que dio lugar al derecho de defensa. El llamado “Primer Caso de Scottsboro- Powell contra Alabama” en 1932, constituyo un hito en el sistema de justicia de estadounidense, por su importancia, procedemos a reseñarlo brevemente.

Nueve jóvenes negros analfabetos, con edades oscilantes entre los trece y los veintiún años de edad, fueron acusados de violar a dos muchachas blancas en un tren de carga que pasaba por Tennessee y Alabama. El juicio se celebró en Scottsboro, Alabama, donde la comunidad se mostró tremendamente hostil contra los acusados. El juez nombró a todos los abogados incorporados a la “barra” local, ninguno compareció a defender a los acusados, pese a ello se exigió a un abogado de la ciudad que asumiera la representación de los acusados, que lo hizo de mala gana. Para sorpresa de nadie fueron condenados a muerte. Los imputados acudieron a la Corte Suprema alegando que le había negado de hecho la asesoría legal porque no tuvieron oportunidad de preparar su defensa con el abogado asignado.

La Corte Suprema a su favor con siete votos y dos en contra: así “Está de más decir que una vez concebido el derecho a un abogado, debe brindarse al acusado una justa oportunidad de asegurarse la asesoría que prefiera. No sólo fue este el caso, si no que la designación del defensor, según se llevó a cabo, resultó tan indefinida o tan próxima al juicio que equivalió a negar una asistencia legal efectiva y sustancial”, además se expresó que “A la luz de los hechos...la ignorancia y el analfabetismo de los acusados, y su juventud, la atmosfera de hostilidad pública, su encarcelamiento y su estrecha vigilancia y por parte de las fuerzas militares, la circunstancia de que sus amigos y familiares se hallaban en otros estados y que, por necesidad, era difícil comunicarse con ellos y, sobre todo el peligro mortal que corrían sus vidas nos lleva a opinar que la incapacidad del tribunal de ofrecerles tiempo y oportunidad para procurarse de un abogado fue una clara negación del proceso legal (p, 25).

Opinamos que, bajo las circunstancias descritas, la necesidad de asesoría era vital e imperativo que el hecho de no habérseles nombrado eficazmente un defensor, equivalió a negarles el proceso penal, de acuerdo con la letra decimocuarta Enmienda. No necesitamos determinar aquí si esto mismo se aplicaría a otras causas penales o bajo otra circunstancia. Lo único que nos toca decidir ahora, y así lo hacemos, es que en un caso capital en el que el acusado no puede contratar a un abogado ni asumir adecuadamente su propia defensa por ignorancia, debilidad mental, analfabetismo o impedimentos similares, es deber del tribunal asignarle un defensor, ya sea que el acusado lo solicite o no, como requisito necesario del proceso penal; y ese deber no queda cumplido cuando el nombramiento se realiza en un momento o bajo unas circunstancias tales que impiden proporcionar asistencia eficaz en la preparación y en proceso de la causa.

ROBLETO GUTIÉRREZ (2013) menciona también que:

Finalmente, se incorpora esta parte del fallo que estimo vital, “En muchos casos, el derecho a ser escuchado no sirve de nada si no comprendiera el derecho a ser escuchado por un asesor legal. Hasta el lego inteligente y culto tiene escasa preparación y a veces ninguna, en la ciencia de las leyes. Por lo general, cuando se le acusa de un delito, es incapaz de determinar por su propia cuenta si el auto de acusación está bien o está mal. No está familiarizado con las normas que rigen las pruebas. Sin la ayuda de su asesor, podría ser llevado a juicio sin una acusación apropiada y condenado mediante pruebas insatisfactorias que no son pertinentes para la causa o que resultan inadmisibles por algún motivo (p, 26).

Necesita la guía de un abogado que lo conduzca a cada etapa de los procedimientos en su contra. Sin ella, aunque no sea culpable corre el riesgo de que lo condenen por no saber cómo demostrar su inocencia. Si esto es así con respecto de los hombres inteligentes, lo es mucho más para los ignorantes y analfabetos, o los que padecen debilidad mental. Cuando, ya se trata de un caso civil o penal, un tribunal estatal federal se niegue arbitrariamente en escuchar una parte por boca del abogado, al que ella emplea ya que actúa en su nombre, no hay razón para dudar de ese rechazo implica una negación de la audiencia (p, 27)

El derecho al tiempo razonable para preparar la defensa como lo precisa GARCÍA CALIZAYA (2016) se encuentra en:

Los tratados internacionales sobre derechos humanos y título preliminar del nuestro código procesal penal establecen como parte del derecho de defensa que toda persona tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa (p, 327).

De la misma idea ZAMBRANO PASQUEL señala que:

El respeto a este derecho tiene una importante incidencia en los ordenamientos jurídicos de cada país, en especial sobre las normas que regulan los procesos penales, puesto que su contenido debe respetar los estándares que a nivel internacional se consideren como apropiados, en cuanto a tiempo y medios, para garantizar una adecuada defensa (p, 10) (En: bit.ly/2ac2LrV).

GARCÍA CALIZAYA (2016) aclara que:

El pacto internacional de derechos civiles y políticos del 16 de diciembre de 1966 señala que: Artículo 14. Igualdad de las personas. (...) 3. durante el

proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad, las siguientes garantías mínimas: (...) b) A disponer del tiempo (...) para la preparación de su defensa (...). También, la convención americana sobre derechos humanos de San José de Costa Rica nos dice: Artículo 8.

Garantías judiciales: (...) 2. (...). Durante el proceso, toda persona tiene derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (...) c) Confesión al inculpado del tiempo (...) para la preparación de su defensa.

En el ámbito nacional, el art. IX.1 del Título Preliminar del Código Procesal Penal comprende esta manifestación del derecho de defensa.

Artículo IX. Derecho de defensa

1. Toda persona (...) tiene derecho a que se le conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa (...) (p, 327).

REYNA ALFARO (2015) considera que:

Una estrategia que puede considerarse eficaz requiere la adopción de una serie de pasos: identificación y análisis de la imputación; identificación y análisis de los medios de prueba en aquella se basa; identificación de la defensa material y técnica; toda esta secuela exige tiempo, tiempo razonable. (p, 236).

Siguiendo la misma idea ORÉ GUARDIA (2009) señala que:

El tiempo razonable para preparar la defensa ha de entenderse aquel tiempo adecuado, justo o necesario que requiere el imputado, o mejor aún su defensa técnica, para diseñar, desarrollar, y ejecutar de manera eficaz todos aquellos actos que le permitan desvirtuar o contradecir la protección penal dirigida en su contra. Ahora bien, el tiempo adecuado o justo para preparar la defensa, muchas veces, no está determinada por la norma, situación en la cual será el

propio juez, quien discrecionalmente, y de acuerdo al caso concreto, deberá establecer, en forma proporcional al acto procesal a realizarse, el tiempo con el que contará en imputado o su defensor para preparar la defensa (p, 182).

El citado autor también considera que:

En algunos supuestos, el otorgamiento de un tiempo razonable para preparar la defensa será más imperativo. Así por ejemplo cuando el imputado decide cambiar de abogado defensor resulta imprescindible que el juez le otorgue un tiempo prudencial al nuevo defensor, en aras de que se plantee y elabore defensa del imputado de la mejor manera (p, 183).

TELLO RAMIREZ señala que:

Vale decir que el imputado, al contar con este derecho se debe sentir con la plena seguridad de recabar cómodamente la información buscada y requerida, en las circunstancias apropiadas y sin presiones ni limitaciones de ninguna naturaleza que dificulten u obstaculicen tal labor. Este derecho otorga al imputado y a su abogado defensor la herramienta exacta para optimizar la tesis de la defensa a esgrimir, dotando incluso al abogado defensor de una suerte de mecanismos adicionales de exigibilidad que le va a permitir accionar inmediatamente a su favor ante una situación de emergencia como podría ser, por ejemplo, asumir un caso con audiencia ya señalada u otros (En: bit.ly/2aoX1Hv).

6. JUICIO INMEDIATO POR FLAGRANCIA

El Fiscal provincial de Trujillo CANO GAMERO menciona que el juicio inmediato se realiza en sesiones continuas e ininterrumpidas. El Juez que instale juicio no puede conocer otros hasta que culmine el ya iniciado. Se aplica las reglas del proceso común en lo no previsto.

El profesor nacional GARCÍA CALIZAYA (2016) hace una reflexión sobre el juicio inmediato y preciso que:

El plazo demasiado corto puede ser perjudicial para las partes procesales y para el propio juez que debe motivar la sentencia, en la medida de que la brevedad no se adapta proporcionalmente las circunstancias y características del proceso; de lo contrario, permitirá tomar la decisión oportuna. La implementación del proceso inmediato por flagrancia delictiva no sintoniza con los principios y garantías de un Estado constitucional y democrático de derecho, concretamente, ya que no se condicen el procedimiento sencillo, rápido y eficaz, y el derecho de defensa eficaz del procesado (p, 330).

Del mismo modo el citado autor hace mención que:

En el caso de proceso inmediato por flagrancia, los plazos que trajo el Decreto Legislativo N° 1194 arremeten al acusado dejando en estado de indefensión, el abogado defensor en ese escenario cumple un papel simbólico. Incluso peor, tratándose de defensa pública que no se abastece de tiempo, pocas veces realiza un estudio minucioso de los casos, por la cantidad de expedientes, encomendados, o porque lo designan en reemplazo del abogado privado inconcurrente de manera inmediata, etc.

Bajo este procedimiento, entendemos que una persona involucrada en un ilícito penal es sentenciada en menos de 24 horas en la actualidad en 48 horas; dado que, una vez recibido el auto que incoa el proceso inmediato, el juez realiza la audiencia única de juicio inmediato en el día; excepcionalmente la audiencia podrá llevarse a cabo dentro de las setenta y dos horas (72) horas, esto bajo responsabilidad (artículo 448.1).

Es más, el artículo 488.2 de CPP señala que la audiencia única de juicio inmediato es inaplazable, pues rige lo establecido en el artículo 85.

En cuanto al reemplazo del abogado defensor insistente, el artículo 85.1 prescribe: “si el abogado defensor no concurre a la diligencia para la que es citado, y esta es de carácter inaplazable será reemplazado por otro que, en ese acto, designe el procesado, o por uno de oficio, llevándose adelante la diligencia”.

Si esto ocurre, el defensor público o el abogado que en ese acto designe el procesado el llamado de inmediato, por lo que este definitivamente no estará en capacidad de realizar en menos de 24 horas, en la actualidad 48 horas, un cumulo de actos para una defensa eficaz del acusado; ya que no estará, física ni psicológicamente, en condiciones para elaborar una estrategia de defensa con estándar y rigor que el caso requiere, porque para ello necesita tiempo (p, 330).

PALOMINO AMARO (2014) hace mención importante sobre:

La designación formal de un abogado no asegura la defensa eficaz; la defensa eficaz también implica que el defensor estudie de manera seria las cuestiones planteadas, lo que le permitirá fundar pretensiones que entonces le aparezcan como viables o aptas a sus expectativas.

La adopción de los mecanismos de defensa a ejercitar exige la evolución del caso en concreto, en función a la información a la información obtenida. Ello demanda. La notificación con antelación del contenido de los cargos atribuidos y de sus elementos de convicción, solo así se podrá gestionar los medios para armar una estrategia de defensa, sea para admitir o refutar la imputación, no solo con argumentos sino con pruebas.

Sin embargo, por el apremio del tiempo, cuando por sorpresa se asume el caso, el abogado defensor difícilmente podrá cubrir las exigencias que caracterizan una defensa eficaz, es por ello que, muchas veces, se acogen a salidas alternativas en perjuicio del procesado, ya que realizando un examen mesurado y con calma pudo haberse logrado la absolución o la reducción de la pena a favor del patrocinado (p, 18)

Haciendo un análisis práctico MINAYA RAMOS (2015) señala:

El caso de Silva Buscaglia Zapler, mujer que agredió al suboficial de la PNP Elías Quispe Carbajal en el aeropuerto Jorge Chávez de la ciudad de Lima, quien fue procesada bajo la aplicación del proceso inmediato y se acogió a la terminación anticipada, por lo cual fue condenada por la Corte Superior de Justicia del Callao a seis años u ocho meses de cárcel. “No se trata de exculpar a Silvana Buscaglia. Es perfectamente reprochable su conducta. El problema es la desproporcionalidad de la pena” (En: bit.ly/2aa8Gk3). Menciona dicho caso para que se tome en cuenta el grado de vulneración al derecho de defensa que hay en el nuevo código procesal penal.

SOTA SÁNCHEZ (1993, p, 295) precisa que la tutela de los derechos y libertades fundamentales debe desplegar también su eficacia respecto al sujeto infractor, cuya dignidad personal no puede desconocer el estado democrático.

NUGAZ ZEGARRA (2016), Las tensiones en la aplicación del proceso inmediato en casos de flagrancia, evidente que una sentencia o la condena fácil, rápida y efectiva no construyan más que una quimera, un monstruo cuya única consecuencia es la devastación del individuo, en cuanto a sus derechos fundamentales, entre los cuales se halla el derecho al tiempo razonable para preparar la defensa (En: bit.ly/2aoYzbP).

SUB CAPÍTULO III: CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA

1. FLAGRANCIA

1.1. Antecedentes

Las conductas que se consideraban delitos en la antigüedad, aplicando las normas de hecho del grupo social se castigaban en el acto, no existen investigaciones detalladas o juicios por lo que se afirma que se impartía una inmediata “justicia” ante un hecho delictivo.

En China, ante un delito cometido en flagrancia se establecían penas inmediatas, considerando la intención y el móvil del delito, llegando desde la amputación de la nariz y orejas, obturación de los orificios del cuerpo, incisiones de los ojos, hasta la pena de muerte. En el Código laico de Hammurabi, primer código legal de la historia, creado por el Rey Hammurabi, cuando gobernaba Babilonia, entre los años 1790 a 1750 a.c. “El código buscaba evitar, bajo leyes aplicables en todos los casos, que los ciudadanos tomaran la justicia por su propia cuenta. Se regularon aspectos como (...) las penas por delitos de robo, asesinato, entre otros. El castigo fijado por el estado consistía en 5 penas: pena de muerte, castigos corporales, composición económica, multas y expulsión de la comunidad”.

Ingrid SERNA, comenta algunas de las leyes del Código de Hammurabi, donde podemos encontrar que se sancionaba como delito en flagrancia son las siguientes: “Si un hombre conoce carnalmente a su hija, se desterrará a ese hombre de la ciudad.

- Si un hombre, tras la muerte de su padre, yace con su madre, se los quemará a ambos.
- Si un hijo ha golpeado a su padre se le cortará la mano.

- Si un hombre quiere desheredar a su hijo y afirma ante los jueces "Quiero desheredar a mi hijo", los jueces determinarán los hechos de su caso y, si él no ha demostrado las razones de la desheredación, el padre no puede desheredar a su hijo (En: http://www.uniderecho.com/leer_articulo_DerechoEn-general_7_1453).

Asimismo, PILAR RIVERO, nos menciona que “Si una mujer odia a su marido y afirma “No harás uso carnal de mí”, se determinarán los hechos de su caso en un juicio y, si se ha mantenido casta y sin falta en tanto que su marido es convicto de abandono y agravio, esa mujer no sufrirá castigo, tomará su dote (sheriktu) y marchará a la casa de su padre. ...”. En Israel se conoció el talión por homicidio, así como algunas formas de venganza privada. En tales casos penas rigurosas. El fin de la pena era la expiación (En: <http://clio.rediris.es/fichas/hammurabi.htm>).

De la India se conoce el Código de Manú compuesta de Doce Libros, principio de organización social, moral, religiosa y educativa. Es un código que tiene como finalidad la purificación, es decir, la sanción va en relación a los hechos cometidos, sin embargo, debemos tener en cuenta que las penas se presentan ante la flagrancia del delito. La historia no nos toca temas de procesos largos, como ahora, todos son cortos, con aplicación inmediata de una sanción. Es así como con el desarrollo de la humanidad y la creación de normas que regulan la convivencia, se puede observar que antes de Cristo, ya se hablaba al respecto, conforme a GARRIDO MUÑOZ , quien sobre este tema haciendo alusión de un texto de la edad antigua, que se encuentra “en la Biblia, en el Libro de Eclesiastés en sus Capítulos 1, 2 y 3, referidas al Rey Qohelet – hijo de David – de que no hay nada nuevo bajo el sol, desde que existen la

sociedades humanas en nuestro orbe, ésta ha tenido que sacrificar la libertad individual, entendida como el querer hacer todo y de todo, por el bienestar común, que se ajuste a nuestra conducta y aplaquen los instintos naturales de supervivencia más arraigado en nuestra personalidad consciente e inconsciente”. La primera referencia al delito flagrante, la encontramos en el derecho romano, conocido como manifestum, en oposición al no manifestum (furtum) y esta distinción tenía importancia, en razón de que el primero era punido no sólo en forma más severa sino también de oficio. La razón de la mayor sanción la explica CARRARA “por” a) la culpabilidad es evidente; b) más intenso el espíritu de venganza” (En: <http://flagranciaendelito.blogspot.com/>).

De esta manera el catedrático MOMMSEN (1991) señala que:

El arresto (prensio) como consecuencia de la flagrancia podía imponerle a su arbitrio el magistrado con imperium y esa importante atribución se aplicó muchas veces también bajo forma de prisión por deudas, contra los deudores de la comunidad, pero el penetrar en casa del arrestado era contrario a la costumbre (Lex Julia) (p, 32).

Por su parte, VINCENZO MANZINI (1952) señalaba que, en las costumbres romanas, el arresto en flagrancia era un acto con el que una persona sorprendida mientras estaba cometiendo un delito, era privada provisionalmente de su libertad personal sin mandato u orden del pretor (p, 601).

1.2. Concepto

Al hablar de flagrancia estamos hablando, verdaderamente, de delito flagrante, que es definido como el delito "...descubierto en el momento mismo de su realización" OSSORIO (1992, p, 279)

Ahora bien, un problema en esta definición es que no advierte la evidente relación que existe entre el hecho descubierto y el sujeto activo del delito, en este sentido MANZINI ha efectuado una necesaria precisión: "El concepto jurídico de flagrancia está constituido por una idea de relación entre el hecho y el delincuente. No puede haber flagrancia en virtud solamente del elemento objetivo: es necesaria siempre la presencia del delincuente, fuera de los casos expresamente exceptuados por la ley, "un cadáver todavía sangrante; una casa que en ese momento se incendia..." no constituyen flagrancia si el reo no es sorprendido en el acto mismo o no se lo consigue inmediatamente"

En cuanto a la flagrancia delictiva está vinculada al preciso momento en que es percibido o apreciado la ejecución de un delito, lo cual, proporciona en términos procesal penal, una mayor convicción tanto respecto al delito mismo como de la responsabilidad del presunto autor.

Enseña CARNELUTTI (1950), Flagrancia es el delito en general, mientras se ve, o sea para quien lo ve cometer; en otras palabras, para quien está presente a su cumplimiento. Esto quiere decir que la flagrancia "no es un modo de ser del delito en sí, sino del delito respecto a una persona; y, por eso, una cualidad absolutamente relativa; el delito puede ser flagrante respecto a Ticio y no flagrante respecto a Cayo" (p, 77).

El citado autor nos dice, en relación a esta noción, puede establecerse que la flagrancia del delito coincide con la posibilidad para una persona de comprobarlo mediante una prueba directa; lo cual nos puede conducir erró- neamente a afirmar

que el delito es flagrante en cuanto constituya la prueba de sí mismo, ello significaría que el delito flagrante es "... el delito que se comete actualmente", en este sentido no habría delito que no sea o que al menos no haya sido flagrante, porque todo delito tiene su actualidad; pero la flagrancia no es la actualidad sino la visibilidad del delito (p, 77-78).

Por lo que la definición del delito flagrante debe ser entendido no solamente en la actualidad del evento delictuoso, sino en la presencia de un testigo mientras se comete, se tiene otro significado de esta institución Por otra parte, la presencia de alguien mientras el delito se comete se resuelve la percepción de la acción del reo por parte de alguno; aquí es necesaria para comprender bien la noción de flagrancia la distinción entre acción y evento; que es fundamental para el conocimiento físico del elemento físico del delito; no basta para constituir la flagrancia el que alguno perciba su evento, sino que es necesario que asista a la acción (no basta que vea el muerto, si no presencia el acto de matarlo). Cuando la acción del delito no sea instantánea se puede tener una flagrancia parcial, llamo flagrancia total a la percepción por parte de alguno de la acción en su entero desarrollo; por el contrario la flagrancia es parcial cuando la asistencia se limita a una parte del iteractionis. Se entiende que, a los fines del arresto es suficiente la flagrancia parcial. (...)"

1.3. Antecedentes constitucionales de la flagrancia.

La flagrancia ha tenido marcada presencia en las Constituciones del país, que merece ser brevemente analizados.

La Constitución de Cádiz de 1812. Si bien no se trata precisamente de una Constitución Política del Perú, sino de la denominada Constitución Política de la Monarquía Española, promulgada en Cádiz el 19 de marzo de 1812, en su

Capítulo III “De la Administración de Justicia en lo Criminal”, conocida como Constitución de Cádiz, la cual rigió el Virreynato del Perú hasta antes de su independencia. Dicha Carta Política estableció en su artículo 292 que: “In fraganti delincuente puede ser arrestado y todos pueden arrestarle y conducirlo a la presencia del juez: presentado o puesto en custodia, se procederá en todo, como se previene en los dos artículos precedentes”. Se aprecia de la citada norma constitucional la posibilidad de arresto del delincuente in fraganti por cualquier persona y su conducción ante la autoridad judicial. Se entendía in fraganti el arresto en el momento de que el autor cometía el delito. (En: http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/doctorado/trabajo_de_investigacion/2011/7_La_flagrancia_en_el_Nuevo_Proceso_penal.pdf).

La Constitución de 1823. La Constitución Política del Perú de 1823, fue aprobada por el Primer Congreso Constituyente, la promulgó el Presidente de la República José Bernardo Torre Tagle el 12 de noviembre de 1823, no llegó a regir ya que días antes se había acordado que quedarían en suspenso los artículos constitucionales incompatibles con el ejercicio de las amplias facultades otorgadas al libertador Simón Bolívar, y hasta que los hechos de la emancipación varíen. Por ley del 17 de febrero de 1824 y considerando que las libertades amenazadas por los reveses que había sufrido la república se le entregó todo el poder a Bolívar quedando en suspenso los artículos constitucionales, leyes y decretos que fueran incompatibles con la autoridad de Bolívar. En 1826 se promulgó la constitución vitalicia. Por decreto ley del 11 de julio de 1827 al mismo tiempo que se declaraba nula y sin valor la constitución vitalicia, se ponía en vigor la de 1823, con modificaciones y subrogaciones que robustecían al Poder Ejecutivo y ampliando las atribuciones de la república. Es de apreciarse que en esta constitución de 1823, no se señaló nada

sobre la “flagrancia”, más bien en su Título IX “Régimen interior de la República” su artículo 127 señalaba que: Les está prohibido absolutamente todo conocimiento judicial, pero si la tranquilidad pública exigiere fundadamente la aprehensión de algún individuo, podrán ordenarla desde luego, poniendo al preso dentro de 24 horas a disposición del

Juez y remitiéndole los antecedentes” (En: http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/doctorado/trabajo_de_investigacion/2011/7_La_flagrancia_en_el_Nuevo_Proceso_penal.pdf).

1.4 Características Principales de Flagrancia. La flagrancia es un instituto procesal con relevancia constitucional 31, que justifica privar a una persona de su libertad por personal policial, que corresponde dentro del contexto de una situación particular de urgencia, la misma que debe darse concurriendo la inmediatez tanto temporal como personal.

SAN MARTIN CASTRO (2015, p, 806), expresa que “la flagrancia delictiva es el eje o condición previa que legitima la detención preliminar policial”.

Desprendiéndose de la doctrina y la normatividad existente ciertas características que le son propias, pudiéndose mencionar las siguientes:

- a) Inmediatez temporal, que consiste en que la persona esté cometiendo el delito, o que se haya cometido momentos antes. El elemento central lo constituye el tiempo en que se comete el delito. Lo inmediato es en el momento mismo, lo que se está haciendo o se aquíba de hacer.
- b) Inmediatez personal, es decir, que la persona se encuentre en el lugar de los hechos en situación que se infiera su participación en el delito o con objetos o huellas que revelen que aquíba de ejecutarlo.
- c) Necesidad urgente, se da ante un conocimiento fundado, directo e

inmediato del delito, por el cual, resulta urgente la intervención de la policía para que actúe conforme a sus atribuciones y ponga término al delito. Esto se da ante la imposibilidad de obtener una orden judicial previa. La característica propia de la inmediatez exige la intervención policial en el delito. Es preciso resaltar que, para que se configure la flagrancia en un delito, el agente debe haber superado las fases internas del *iter criminis* y debe encontrándose como mínimo en la fase ejecutiva o externa del delito o a punto de consumir el hecho ilícito (En: http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/doctorado/trabajo_de_investigacion/2011/7_La_flagrancia_en_el_Nuevo_Proceso_penal.pdf).

ORE GUARDIA (1999) señala que no sólo debemos conocer las características de la flagrancia, sino reconocer sus tipos, para lo cual señala que: “En la doctrina procesal suele distinguirse hasta tres clases de flagrancia las mismas que varían según el alejamiento temporal que existe entre la conducta delictuosa y la aprehensión de su autor.

- **Flagrancia estricta:** Hay flagrancia estricta cuando el sujeto es sorprendido y detenido en el momento mismo de estar ejecutando o consumando el delito, concepto que se encuentra vinculado con las fases consumativa o ejecutiva del hecho punible.
- **Cuasiflagrancia:** Se da cuando un individuo ya ha ejecutado el hecho delictivo, pero es detenido poco después, ya que no se le perdió de vista desde entonces. Por ejemplo, un sujeto roba un artefacto y es visto en el acto de perpetrar el latrocinio, siendo perseguido por quien o quienes lo han sorprendido y es detenido.

- Presunción de flagrancia: En este caso el individuo ni ha sido sorprendido al ejecutar o consumir el delito, y tampoco ha sido perseguido luego de cometido. Sólo hay indicios razonables que permiten pensar que él es el autor del hecho” (p, 345 – 346).

ARCIBIA MEJIA, Elizabeth y otros (2011) De conformidad con ello nos precisa que estos distintos tipos de flagrancia a la fecha han sido establecidos por la Ley N° 29569, que modifica el Nuevo Código Procesal Penal del 2004, sin embargo, debe tenerse en cuenta la pluriculturalidad de nuestro país, debido a que la casuística nos demuestra que no en todo el Perú, se entiende a la flagrancia del mismo modo (p, 31).

Al respecto, ANGULO ARANA, señala que “En casos acontecidos en la sierra peruana, donde los agraviados se organizan en grupo para perseguir a quienes sustrajeron ganado ovino u otros, que no pueden ser tan fácilmente trasladados, las persecuciones siendo continuas y permanentes podrían durar 4 o 5 días o algo más, y hasta podría ocurrir que durante tal tiempo no se perdiera nunca de vista a los autores del ilícito o que sólo se los perdiera en algunas curvas, al subir cerros o cruzar un abra, por algunas horas o que efectivamente se les dejara de ver por uno, dos o tres días o más en que se continúa la persecución, conociendo exactamente el lugar por el que se desplazan y que no podrán tomar otro camino, y, podría ser que conociendo en la parte final un atajo, los perseguidores aparecieran delante de ellos, reduciéndoles y deteniéndolos, inclusive ya con apoyo policial; y en tal caso ¿diríamos aquíso que la flagrancia ya había terminado? Ciertamente no parece razonable el concluir así, y abrirles paso para que se retiren. Por ende, se advierte que el tema de no perder de vista al perseguido y el tiempo en que se dilata la persistencia de la persecución, y se mantiene aún la flagrancia, puede ser no tan

corto ni tan lejano, y por ello debe ser establecido, en cada caso concreto, por la
razonabilidad y el buen criterio” (37 - 38).

En este mismo sentido, CABALLERO GUEVARA, Rosa (2009) señala: “Así pues, una vez que el delincuente huyó, y por ende se quiebra e interrumpe el criterio de la inmediatez, lo que corresponde es una investigación, que permita acopiar la evidencia necesaria para identificarlo con certeza y determinar las circunstancias en que el delito fue cometido. Precisamente la investigación, sujeta a reglas y garantías, tiene por objeto impedir conclusiones arbitrarias (p, 147).

1.5. Flagrancia Presunta

En el artículo 259 del Código Procesal Penal, según la ley número 29596, el inciso 4 del citado artículo regula la denominada “flagrancia presunta”. En este supuesto el agente, ha de tener los bienes delictivos (instrumentos del delito, objetos del delito o efectos del delito) en su poder y en ese momento debe ser detenido.

Según la COMISIÓN ESPECIAL DE IMPLEMENTACIÓN DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL detalla que:

La Flagrancia presunta (ex post ipso) se encuentra en:

El inciso 4 regula esta modalidad. A diferencia de los dos supuestos anteriores, aquí no se ha sorprendido al autor (inmediatez personal), solo existiendo indicios de su comisión por la existencia de instrumentos o efectos del delito que, habría cometido (p, 3).

En la revista GACETA JURIDICA (2017) se estipula:

Para incoar proceso inmediato en caso de flagrancia presunta se requiere la existencia de prueba directa a partir de información categórica brindada por el agraviado.

Así lo ha determinado la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema en la Casación N° 692-2016-Lima Norte, en donde además sostuvo que la prueba evidente no requiere que se realicen inferencias complejas para determinar que el detenido intervino en la comisión de los hechos.

Veamos el caso: una mujer denunció que fue víctima de un robo por parte de dos sujetos, uno de los cuales el apuntó con un arma y el otro le sustrajo la cartera. Luego de ello, los delincuentes abordaron un vehículo que se les acercó y le abrió la puerta. Mientras los asaltantes se iban, la agraviada pudo apuntar el número de plaquí y denunciarlo a la policía, pero no pudo reconocer al chofer.

Hecha la denuncia, los efectivos policiales pudieron identificar el vehículo y detener al chofer. En ese marco, realizaron un registro vehicular junto al representante del Ministerio Público en el que no se encontró rastro de los bienes de la agraviada. Sin embargo, luego de un segundo registro se les encontró. El acta fue firmada por la Fiscalía, pero se negó a hacerlo el imputado, quien aducía no tener responsabilidad.

En este marco, se incoó proceso inmediato por el delito de robo agravado, la que fue admitida por el juez de primera instancia, quien condenó al imputado en calidad de autor de robo agravado a doce años de privación de libertad. No obstante, la sentencia fue impugnada por el ahora condenado.

No obstante, la Sala de Apelaciones de Lima Norte declaró probados los hechos y confirmó la condena de primera instancia. Esta decisión fue materia de un recurso de casación de parte del imputado, en el que sostuvo que se vulneraron las

garantías del debido proceso pues no constaba prueba evidente que fundamente el proceso inmediato, por lo que debió tramitarse en vía de proceso común.

Admitido a trámite el recurso de casación, la Primera Sala Penal Transitoria de la Corte Suprema determinó que, en este caso, no se podía sostener la existencia de flagrancia presunta debido al tiempo transcurrido, y que al imputado no se le capturó en el marco del delito. Asimismo, se tomó en consideración que durante la primera revisión vehicular no se encontraron los objetos de la agraviada por lo que tuvo que hacerse una nueva sin consignar en acta la negativa del imputado a firmar y las causas de la ausencia de su abogado o de un abogado de oficio.

Finalmente, la Corte sostuvo que en el presente caso existían vacíos probatorios que impedían concluir que el imputado era quien intervino en la comisión del delito. Ello debido a que no existía prueba evidente que permitiera la incoación de proceso inmediato. Por estos motivos, se declaró fundado el recurso de casación y nula la condena, ordenándose que se tramite la causa en la vía del proceso común (En: <http://laley.pe/not/3969/proceso-inmediato-por-flagranciapresunta-requiere-prueba-directa/>).

2. POSICIÓN DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

El Tribunal Constitucional, asumió una posición primigenia en la cual consideraba dentro del concepto de flagrancia, no sólo los casos en que una persona era detenida en el mismo acto de la comisión de un delito, sino también aquellos en los cuales una persona era encontrada con evidencias de haberlo cometido, ello no se contradecía con lo que se indicaba en la Ley N° 27934 y con la del Código Procesal Penal de 2004. Al respecto, debe tenerse en cuenta que con anterioridad a dichas disposiciones el Tribunal Constitucional, a través de su jurisprudencia había estado construyendo una definición sobre el flagrante delito.

Tal es así que mediante la sentencia recaída en el Expo. 975-96-HC/TC, estableció que: “La excepción (a la libertad física) se produce cuando la propia persona se aleja de su dignidad y se relaciona con el delito. En esta eventualidad la persona sólo puede ser detenida por orden escrita y motivada del Juez o por la autoridad policial en caso de flagrante delito; vale decir, por evidencias en el momento mismo de la comisión del hecho delictuoso o posterior a tal acto cuando subsisten evidencias del delito; (...) no necesariamente in fragante, es decir, en el momento mismo de la producción del evento. Lo contrario significaría que, aun existiendo notorias evidencias del hecho punible, después de la perpetración, el presunto responsable goce aún de libertad; y, además, desde luego, para la detención debe existir nexo de causalidad entre el delito y la conducta del supuesto infractor quien jurídicamente es inocente hasta que se pronuncie sentencia sobre su responsabilidad”.

Otro pronunciamiento se efectuó en el Exp. 818-98-HC/TC, en similar término establece que flagrancia se produce en el mismo momento de la perpetración del delito o cuando posteriormente a ella, antes del vencimiento del plazo de prescripción, existen hechos o pruebas evidentes, sustentados en la técnica o la ciencia, que demuestren la producción del delito. Con ello podemos decir, que el Tribunal asumió una posición en la que consideraba también flagrancia, en los casos en que una persona era encontrada con evidencias de haber cometido delito

(En:

http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/doctorado/trabajo_de_investigacion/2011/7_La_flagrancia_en_el_Nuevo_Proceso_penal.pdf).

Con la dación de los Decretos Legislativos N° 983 y 989, indudablemente que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional no compatibilizaba, pues con estas

nuevas leyes se ampliaba la flagrancia hasta 24 horas después de su perpetración con señales que indiquen su probable autoría o participación. Al respecto, incluso la Defensoría del Pueblo se pronunció sobre dichos Decretos, señalando lo siguiente: “La ampliación de los supuestos de flagrancia contemplados en los Decretos Legislativos 983 y 989 resultan inconstitucionales, al no contemplar adecuadamente los requisitos de percepción directa de la comisión del delito, inmediatez temporal e inmediatez personal. Esta ampliación, asimismo, puede generar serios problemas en la interpretación y aplicación de los citados decretos legislativos, lo que constituye una amenaza a la libertad física de toda persona. El supuesto de flagrancia como una causa para privar de libertad a una persona debe ser una medida excepcional y tener un desarrollo legislativo preciso, que no permita acudir a ella más allá de los supuestos en los que razonablemente cabe considerar que existe flagrancia en la comisión de un delito”. Ante ello, contra los Decretos Legislativos N° 983 y N° 989 fue presentada una demanda de inconstitucionalidad, sobre la cual el Tribunal Constitucional se ha pronunciado recién en el año 2010, pero antes de que esto ocurra, se produjo una nueva reforma sobre la definición legal del flagrante delito mediante la Ley N° 29372 con lo cual se volvió al texto original del artículo 259° del Código Procesal Penal de 2004, razón por la que el Tribunal declaró que se había producido la sustracción de la materia. Sin embargo, ello fue en vano por cuanto el 25 de agosto de 2010 se dio la Ley N° 29569, en la que nuevamente fue modificado el artículo 259° del Código Procesal Penal del 2004, regresándose al mismo texto de los Decretos Legislativos N° 983 y N° 989 sobre la definición de flagrante delito. Ante ello, seguramente el Tribunal Constitucional nuevamente tendrá que pronunciarse, pues es de advertirse que con este nuevo alcance sobre las características de delito flagrante se podría ingresar

a un domicilio, por ejemplo a las 23 horas de cometido el delito, sin necesidad de autorización de su titular o la existencia de una orden judicial.

2.1 Marco Constitucional Sobre Flagrancia.

Nuestra actual Constitución en su título I, regula hace referencia a la flagrancia en forma específica en los artículos 2 inciso 24, párrafo f) al referirse como un límite de la libertad locomotora y de excepción a la detención sin mandato judicial; así como en el mismo artículo 2 inciso 9, al referirse al derecho a la inviolabilidad del domicilio, en el cual, una excepción a dicho derecho, es la flagrancia (En: http://www.derecho.usmp.edu.pe/postgrado/doctorado/trabajo_de_investigacion/2011/7_La_flagrancia_en_el_Nuevo_Proceso_penal.pdf)

2.2 Derechos Fundamentales Afectados por la Flagrancia.

A efectos de iniciar el análisis de los derechos fundamentales afectados por la flagrancia, tiene que acudirse necesariamente a lo señalado expresamente en nuestra actual Constitución de 1993, de cuyo estudio tenemos como derechos fundamentales que pueden verse afectados con la institución de la flagrancia a los siguientes:

2.2.1 La Libertad Individual: Libertad Ambulatoria. Este punto en su desarrollo no se refiere a la afectación de la libertad ambulatoria sino a la legitimidad de la detención preliminar. En efecto, nuestra Carta Política en su artículo 2 inciso 24, señala que toda persona tiene derecho a la “libertad y seguridad personal”, precisando en su párrafo f, que como consecuencia de ello: “Nadie puede ser detenido sino por mandamiento escrito y motivado del juez o por las autoridades policiales en caso de flagrante delito. El detenido debe ser puesto a disposición del juzgado correspondiente, dentro de las veinticuatro horas o en el término de la

distancia. Estos plazos no se aplican a los casos de terrorismo, espionaje y tráfico ilícito de drogas. En tales casos, las autoridades policiales pueden efectuar la detención preventiva de los presuntos implicados por un término no mayor de quince días naturales. Deben dar cuenta al Ministerio Público y al juez, quien puede asumir jurisdicción antes de vencido dicho término”.

Por su parte BERNALES BALLESTEROS, Iván (1993), al comentar el dispositivo antes glosado señala que en su párrafo primero se establece las dos formas de detención constitucionalmente correcta, la primera por mandato escrito y motivado del juez, que debe ser producido no arbitrariamente, sino de acuerdo a los procedimientos preestablecidos. La segunda entendida como la detención directa por la autoridad policial en caso de flagrante delito, la cual la entiende como el momento en el cual el agresor comete la acción criminal. Es por ello que teniendo en claro que éstos dos supuestos de detención son los permitidos por la Constitución, toda aquella detención que no se encuadre dentro de ambas, constituiría una detención arbitraria (p, 178 - 181).

2.2.2. La Inviolabilidad del Domicilio.

Otro de los derechos que pueden verse afectados con la institución procesal penal de flagrancia y que deriva de la afectación a la libertad locomotora comentado en la anterior disposición constitucional, es la inviolabilidad del domicilio, la cual se encuentra prevista en la Constitución, que lo regula en el artículo 2, en su inciso 9, según el cual toda persona tiene derecho: “A la inviolabilidad del domicilio. Nadie puede ingresar en él ni efectuar investigaciones o registros sin autorización de la persona que lo habita o sin mandato judicial, salvo flagrante delito o muy grave peligro de su perpetración. Las excepciones por motivos de sanidad o de grave riesgo son reguladas por la ley”.

MESÍA RAMIREZ, Carlos y Juan Manuel SOSA SACIO (2008) Sobre el particular, cabe señalar que este derecho ha sido entendido desde un principio por la doctrina constitucional como una extensión de la libertad individual a tal punto de ser definida como una verdadera libertad⁴⁹, a partir del cual una persona ejercita la defensa o reacción frente a los actos vulneran la libertad. Sin embargo, se reconoce que mediante este derecho no sólo se protege la libertad individual sino también otros derechos individuales, como el derecho de propiedad y principalmente el derecho a la intimidad (p, 131).

2.2.3 El Derecho a la Intimidad.

La posibilidad de verse afectado este derecho por la flagrancia delictiva, conforme ha sido indicado en el punto precedente deriva de la afectación que pudiera darse al efectuarse a la inviolabilidad del domicilio por causa de la flagrancia, por lo que la afectación de este derecho por causa de esta flagrancia si bien no resultaría directa también lo es que sí resulta en forma indirecta, que deriva la conectividad que tiene este derecho a la intimidad con el de la inviolabilidad del domicilio, por ser al interior de un domicilio y la privacidad que representa, en donde la persona o el ciudadano desenvuelve su personalidad y realiza con mayor libertad todas las acciones y omisiones que desea que sean conocidas por los demás.

Sobre este derecho RUBIO CORREA (2001), señala que “la intimidad personal y familiar es aquella esfera de la vida de una persona en la que ningún extraño puede interferir, además que es reservada con plena autonomía a la persona misma y a sus familiares más cercanos, siendo los asuntos íntimos y de familia, es decir todo aquello llamamos vida privada” (p, 35).

Sobre este derecho MORALES GODO, Juan (2008), ha señalado “que existe una diversidad de definiciones provenientes tanto del sistema del *commomlaw* como de nuestro sistema romano germánico, según los cuales el contenido de este derecho es diverso”. Sin embargo, agrega “que de acuerdo a nuestro Código Civil de 1984, la Constitución de 1993, como el Código Penal de 1991, la definición debe girar en torno a la protección de la esfera de nuestra existencia que la persona reserva para sí misma, libre de intromisiones, tanto de particulares como del Estado, así como el control de la información de esta faceta de nuestra vida, haciendo presente al igual de muchos derechos de la personalidad este derecho no es absoluto al ser limitado por el “interés público” o de “interés general” que no debe confundido con la curiosidad pública (p, 118).

Los mencionados y analizados anteriormente son los derechos fundamentales más evidentes que se ven vulnerados cuando se presenta la flagrancia

3. POSTURA DEL AUTOR

Considerando que el tema de vulneración al derecho de Defensa en el Proceso inmediato se da de manera desproporcional ya que el Proceso Inmediato es uno de los procesos especiales más rápidos que tiene el nuevo código procesal penal porque suprime completamente a Investigación Preparatoria propiamente dicha y en consecuencia también se suprime la etapa intermedia de esta manera poniendo en práctica el principio de celeridad procesal.

De esta manera el ejercicio de la abogacía se ve de alguna manera limitada por los plazos tan cortos que se presenta en la figura de proceso inmediato por flagrancia, ya que como se viene estudiando que este proceso omite completamente las fases del proceso común que son investigación preparatoria y etapa intermedia; por su misma naturaleza de proceso especial pasa de las

diligencias preliminares a juicio oral directamente en un plazo de 60 días, y en alguno de los casos los abogados que son contratados por la familia para la defensa del investigado le es más complicado por que el tiempo para preparar la defensa es demasiado corto y solo le garantiza al investigado que su derecho a la defensa no sea vulnerado pero prácticamente si se ve el problema a profundidad es totalmente vulnerado y no existe una adecuada defensa técnica.

Simplemente se le pone a un abogado de oficio solo para aparentar que se está cumpliendo con todos los requisitos formales que exige una acusación de esta magnitud que en muchos de los casos termina con la pena privativa de libertad, en muchos casos el investigado no puede conocer todos los cargos que se le imputa por el mismo hecho de ignorar por completo el proceso judicial por lo mismo es fundamental que cuenta no solo con una defensa si no con una adecuada defensa técnica que pueda garantizar en todo momento la adecuada aplicación de los presupuestos procesales para que no se vea perjudicado y su condena sea de forma proporción al daño que este ha causado.

CAPÍTULO III: RESULTADOS DEL TRABAJO DE CAMPO

3.1. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

Con la finalidad de analizar y su posterior discusión de los datos obtenidos de la encuesta aplicada a Jueces, Fiscales y Abogados de la ciudad de Chiclayo, pertenecientes al Distrito Judicial de Lambayeque, se procedió a plasmar la información en cuadros estadísticos.

3.1.1. Tabulación de encuestas dirigida a operadores del derecho

Se analizarán los siguientes cuadros estadísticos:

CUADRO N° 01: DEFINICIÓN DE PROCESO INMEDIATO.

GRÁFICO 1

CUADRO N° 02: DEFINICION DE LOS SUPUESTOS APLICABLES AL PROCESO INMEDIATO.

GRÁFICO 2

CUADRO N° 03: INCOAR PROCESO INMEDIATO EN CASO DE FLAGRANCIA.

GRÁFICO 3

CUADRO N° 04: INCOAR PROCESO INMEDIATO EN CASO DE FLAGRANCIA.

GRÁFICO 4

CUADRO N° 05: VALOR PROBATORIO DE LA CONFESION DEBE SER CORROBORADO.

GRÁFICO 5

CUADRO N° 06: CONCEPTO DE LA FLAGRANCIA PRESUNTA.

GRÁFICO 6

CUADRO N° 07: OBJETIVOS DE LA DECLARACIÓN.

GRÁFICO 7

CUADRO N° 08: LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES PUEDEN
APORTAR ELEMENTOS PARA DEMOSTRAR LA
RESPONSABILIDAD.

GRÁFICO 8

CUADRO N° 09: EL DERECHO DE DEFENSA Y EL
PLAZO RAZONABLE PARA GARANTIZAR Y
PREPARAR LA
DEFENSA.

GRÁFICO 9

CUADRO N° 10: CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL DERECHO DE
DEFENSA EN EL PROCESO INMEDIATO.

GRÁFICO 10

CUADRO N° 11: EN FLAGRANCIA PRESUNTA ES FACTIBLE EN EL
PROCESO INMEDIATO.

GRÁFICO 11

CUADRO N° 12: DESIGNAR UN ABOGADO GARANTIZARÁ UNA
BUENA DEFENSA.

GRÁFICO 12

CUADRO N° 13: SE CUESTIONA EL TIEMPO RAZONABLE PARA
PREPARAR LA DEFENSA EN EL PROCESO
INMEDIATO.

GRÁFICO 13

CUADRO N° 14: CONCEPTO DE LA ADECUADA PREPARACION DE
DEFENSA TÉCNICA.

GRÁFICO 14

CUADRO N° 15: EL DEBIDO PROCESO ES REFERIDO A LAS

GARANTIAS PROCESALES QUE ASEGUREN EL
DERECHO.

GRÁFICO 15

CUADRO N° 16: CONCEPTO ADECUADO PARA EL PLAZO
RAZONABLE.

GRÁFICO 16

CUADRO N° 17: CONCEPTO DADO POR LA DOCTRINA AL PLAZO
RAZONABLE.

GRÁFICO 17

CUADRO N° 18: EFECTOS JURIDICOS DE LA VIOLACION DEL PLAZO
RAZONABLE.

GRÁFICO 18

CUADRO N° 19: CONSIDERA UD. QUE EN LA ACTUALIDAD SE VIENE
RESPETANDO UN ADECUADO PLAZO RAZONABLE
EN EL PROCESO INMEDIATO POR FLAGRANCIA
PRESUNTA.

GRÁFICO 19

CUADRO N° 20: SE CONSIDERA ENTONCES DE ESTA MANERA QUE
SE ESTARÍA VULNERANDO EL DERECHO AL PLAZO
RAZONABLE PARA UNA ADECUADA DEFENSA EN EL
PROCESO INMEDIATO POR FLAGRANCIA
PRESUNTA.

GRÁFICO 20

INFORME FINAL DE TESIS

“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total, encuestados: 65 personas

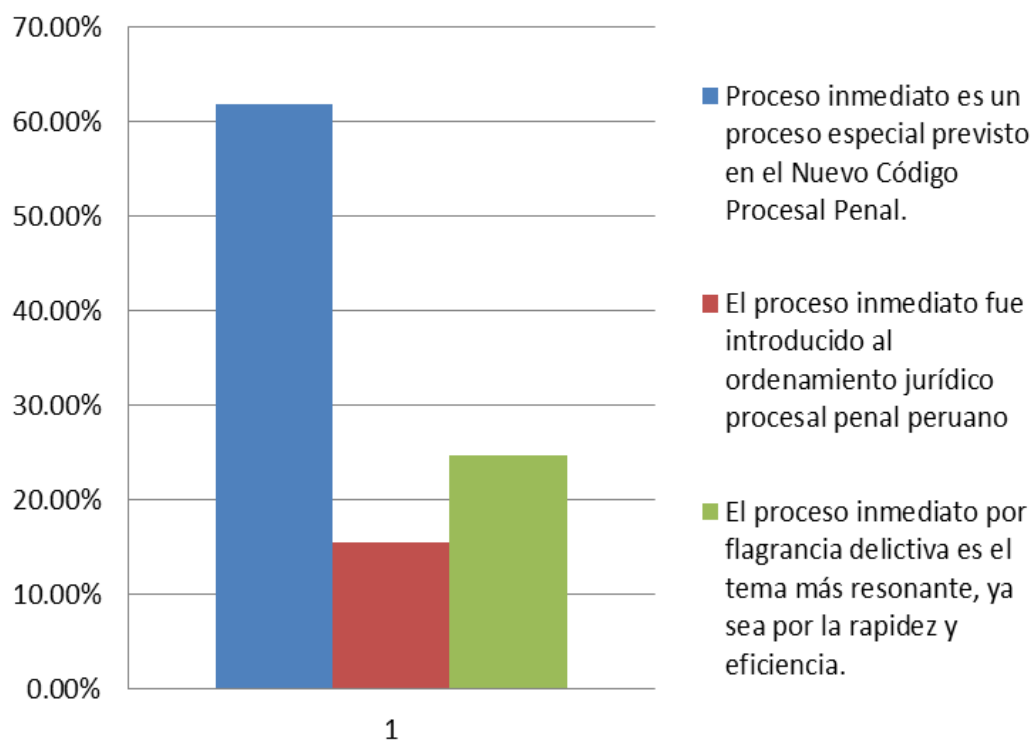
CUADRO N° 01: DEFINICIÓN DE PROCESO INMEDIATO.

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SABE UD. ¿QUÉ ES EL PROCESO INMEDIATO?	Proceso inmediato es un proceso especial previsto en el Nuevo Código Procesal Penal.	41	61.87%
	El proceso inmediato fue introducido al ordenamiento jurídico procesal penal peruano	11	15.42%
	El proceso inmediato por flagrancia delictiva es el tema más resonante, ya sea por la rapidez y eficiencia.	13	24.71%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 01

SABE UD. ¿QUÉ ES EL PROCESO INMDIATO?



**“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA,
EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO”**

INFORME FINAL DE TESIS

(Lambayeque, 2016-2017)

**TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE**

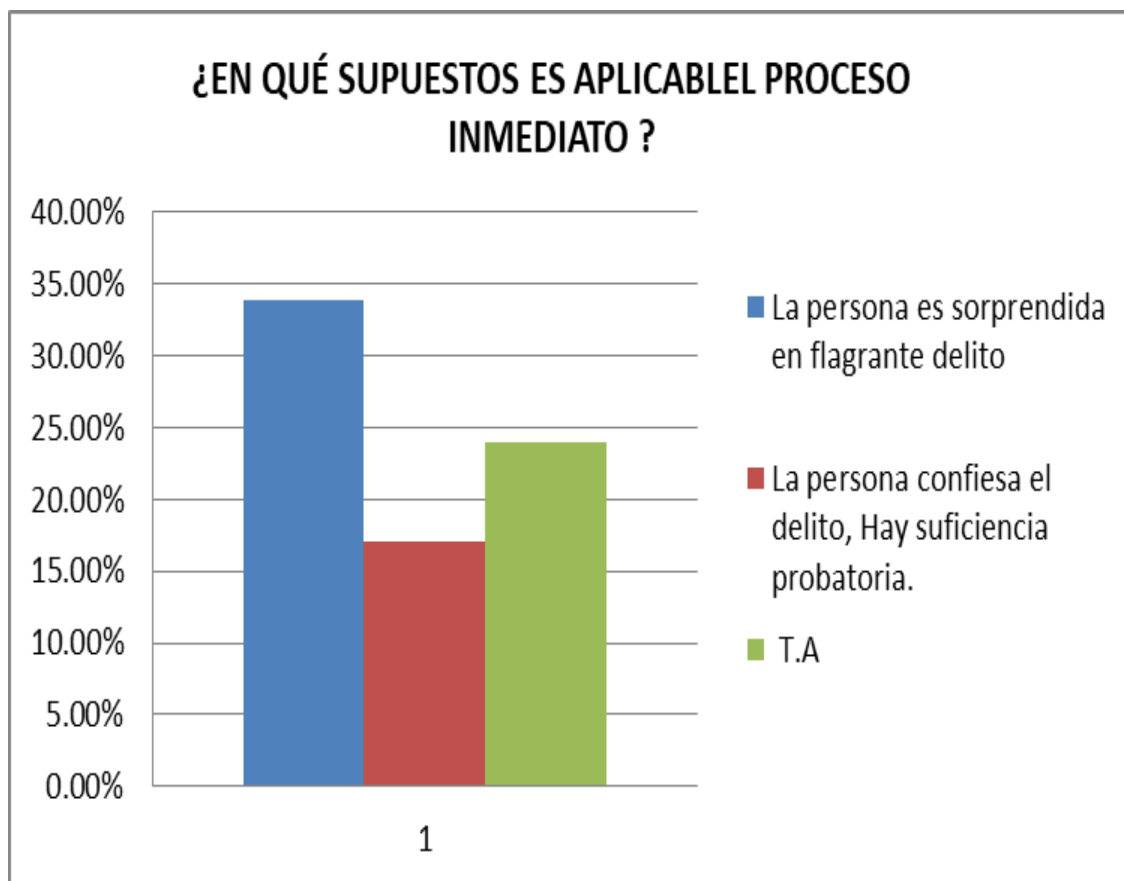
Total, encuestados: 65 personas

**CUADRO N° 02: DEFINICIÓN DE SUPUESTOS ES APLICABLE AL
PROCESO INMEDIATO.**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿EN QUÉ SUPUESTOS ES APLICABLE AL PROCESO INMEDIATO?	La persona es sorprendida en flagrante delito	21	33.87%
	La persona confiesa el delito, Hay suficiencia probatoria.	17	27.42%
	T.A	24	38.71%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 02



INFORME FINAL DE TESIS

(Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total encuestados: 65 personas

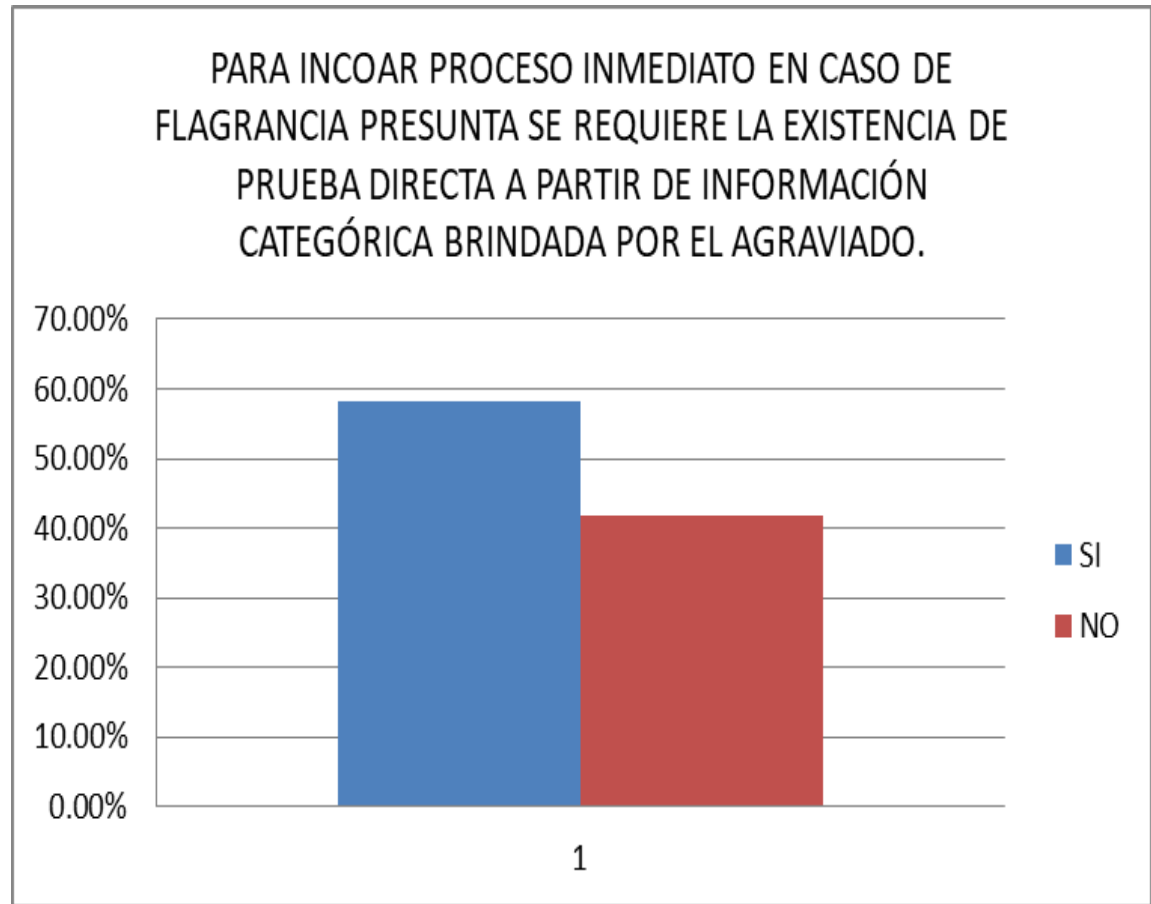
CUADRO N° 03: INCOAR PROCESO INMEDIATO EN CASO DE FLAGRANCIA

**“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA,
EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO”**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
PARA INCOAR PROCESO INMEDIATO EN CASO DE FLAGRANCIA PRESUNTA SE REQUIERE LA EXISTENCIA DE PRUEBA DIRECTA A PARTIR DE INFORMACIÓN CATEGÓRICA BRINDADA POR EL AGRAVIADO.	SI	47	58.18%
	NO	18	41.82%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 03



INFORME FINAL DE TESIS

(Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total encuestados: 65 personas

**“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA,
EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO”**

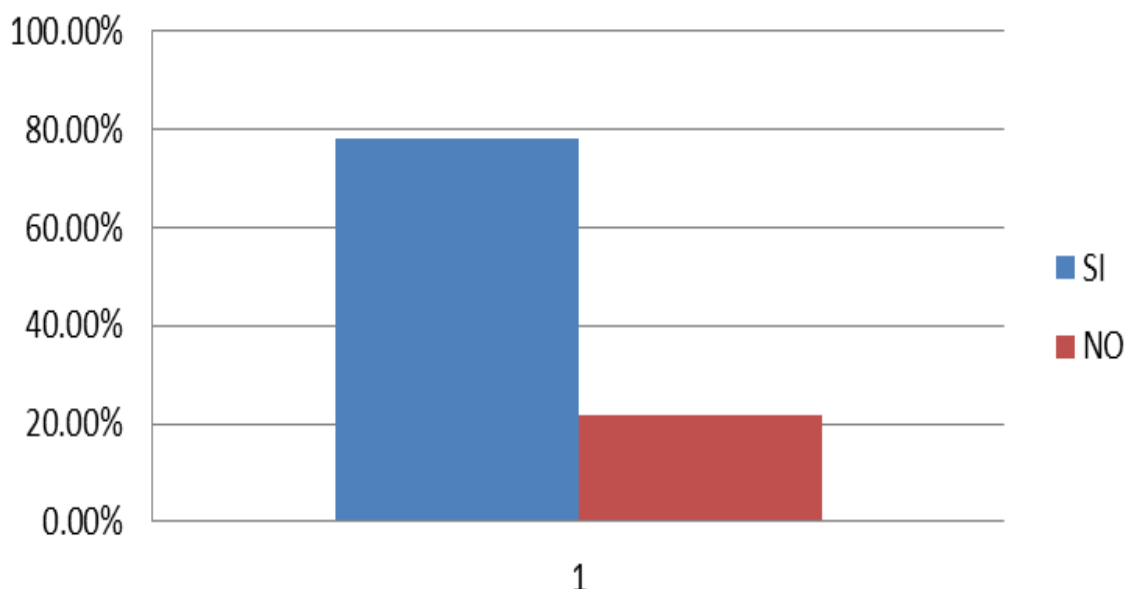
CUADRO N° 04: LA DECLARACION DEL IMPUTADO

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO EN LA QUE ACEPTA, RECONOCE SER AUTOR O PARTICIPE DE UN DELITO O UNA FALTA. SE CONSTITUYE EL CONCEPTO ADECUADO PARA DEFINIR LA CONFESIÓN.	SI	43	78.18%
	NO	22	21.82%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 04

LA DECLARACIÓN DEL IMPUTADO EN LA QUE ACEPTE, RECONOCE SER AUTOR O PARTÍCIPE DE UN DELITO O UNA FALTA. SE CONSTITUYE EL CONCEPTO ADECUADO PARA DEFINIR LA CONFESIÓN.



INFORME FINAL DE TESIS

“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO”
(Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL
DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total encuestados: 65 personas

CUADRO N° 05: VALOR PROBATORIA DE LA CONFESIÓN DEBE SER
CORROBORADO.

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
----------	-----------	------------	------------

**“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA,
EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO”**

PARA QUE LA CONFESIÓN TENGA VALOR PROBATORIA	SI	53	88.18%
--	----	----	--------

TIENE QUE SER CORROBORADO POR OTROS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN.	NO	12	11.82%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 05



INFORME FINAL DE TESIS

**“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA,
EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO”
(Lambayeque, 2016-2017)**

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL

DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total encuestados: 65 personas

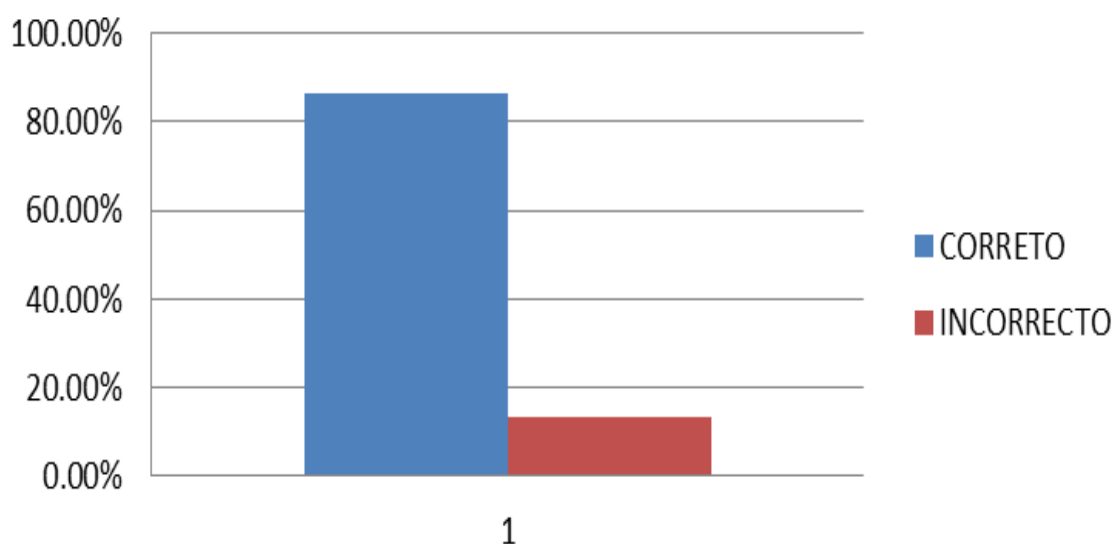
CUADRO N° 06: CONCEPTO DE FLAGRANCIA PRESUNTA.

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
La flagrancia presunta se presenta como: en este caso el individuo ni ha sido sorprendido al ejecutar o consumar el delito, y tampoco ha sido perseguido luego de cometido. Sólo hay indicios razonables que permiten pensar que él es el autor del hecho. lo dicho anteriormente es correcto o incorrecto	CORRECTO	49	86.45%
	INCORRECTO	16	13.55%
	TOTAL	65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 06

La flagrancia presunta se presenta como: en este caso el individuo ni ha sido sorprendido al ejecutar o consumir el delito, y tampoco ha sido perseguido luego de cometido. Sólo hay indicios razonables que permiten pensar que él es el autor del hecho. lo d



INFORME FINAL DE TESIS

“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total encuestados: 65 personas

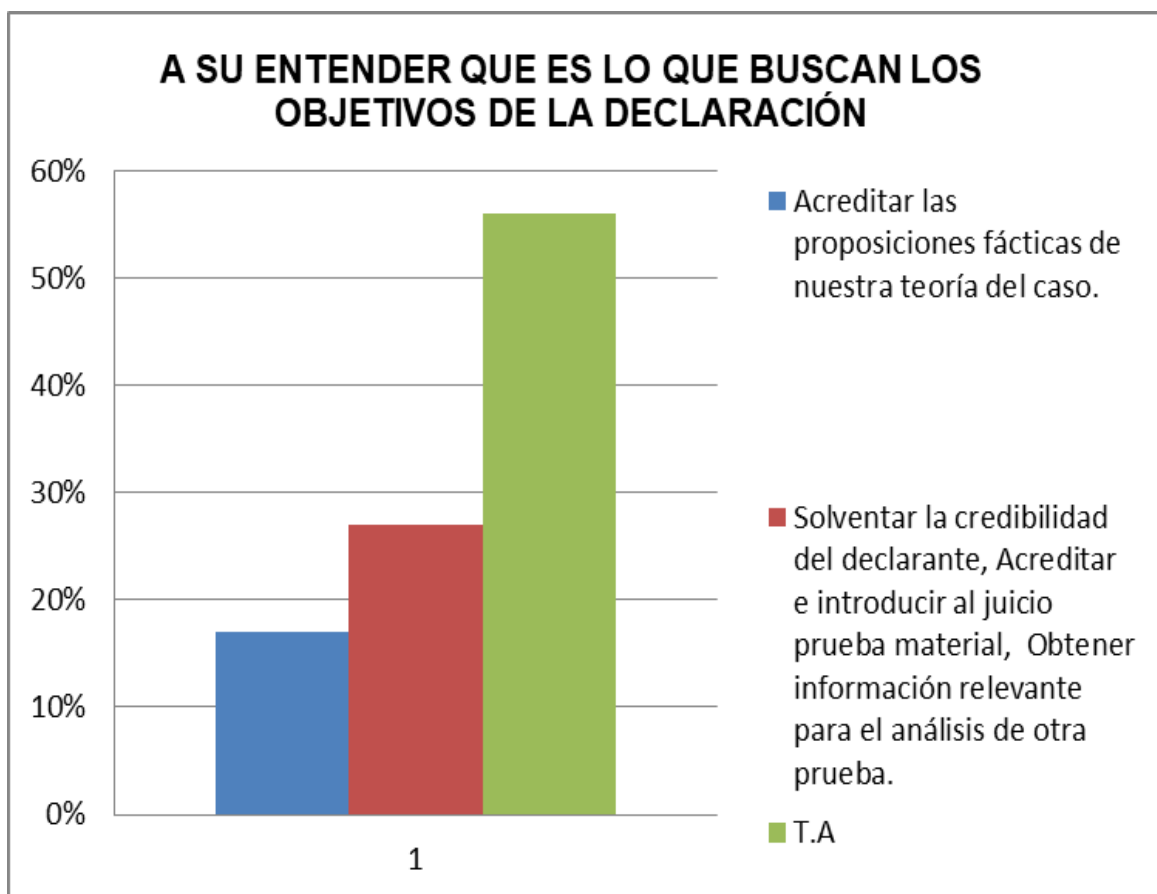
CUADRO N° 07: OBJETIVOS DE LA DECLARACIÓN.

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
	Acreditar las proposiciones	07	17%

A SU ENTENDER QUE ES LO QUE BUSCAN LOS OBJETIVOS DE LA DECLARACIÓN	fácticas de nuestra teoría		
	del caso.		
	Solventar la credibilidad del declarante, Acreditar e introducir al juicio prueba material, Obtener información relevante para el análisis de otra prueba.	09	27%
	T.A	49	56%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 07



INFORME FINAL DE TESIS

**“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA
ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO
INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)**

**TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE**

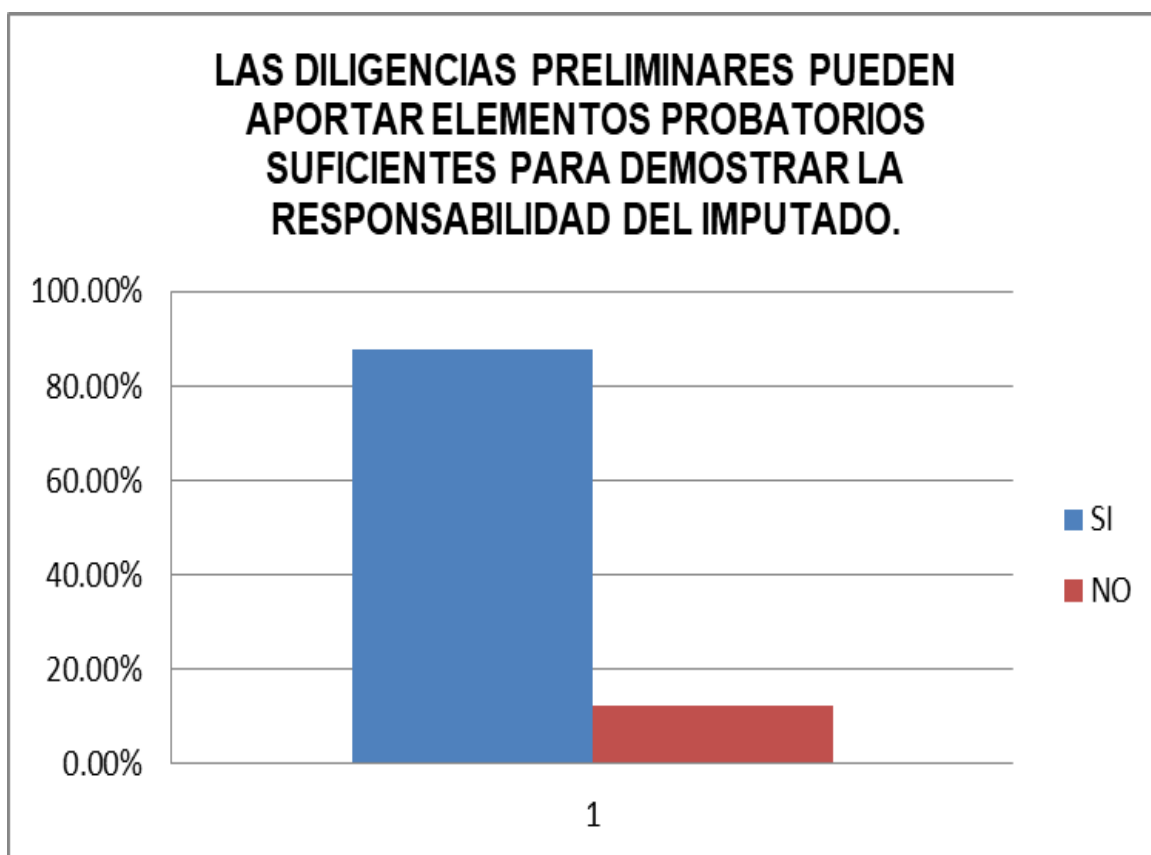
Total encuestados: 65 personas

**CUADRO N° 08: LAS DIILIGENCIAS PRELIMINARES PUEDEN APORTAR
ELEMENTOS PARA DEMOSTRAR LA RESPONSABILIDAD.**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES PUEDEN APORTAR ELEMENTOS PROBATORIOS SUFICIENTES PARA DEMOSTRAR LA RESPONSABILIDAD DEL IMPUTADO.	SI	52	87.60%
	NO	13	12.40%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 08



INFORME FINAL DE TESIS

“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

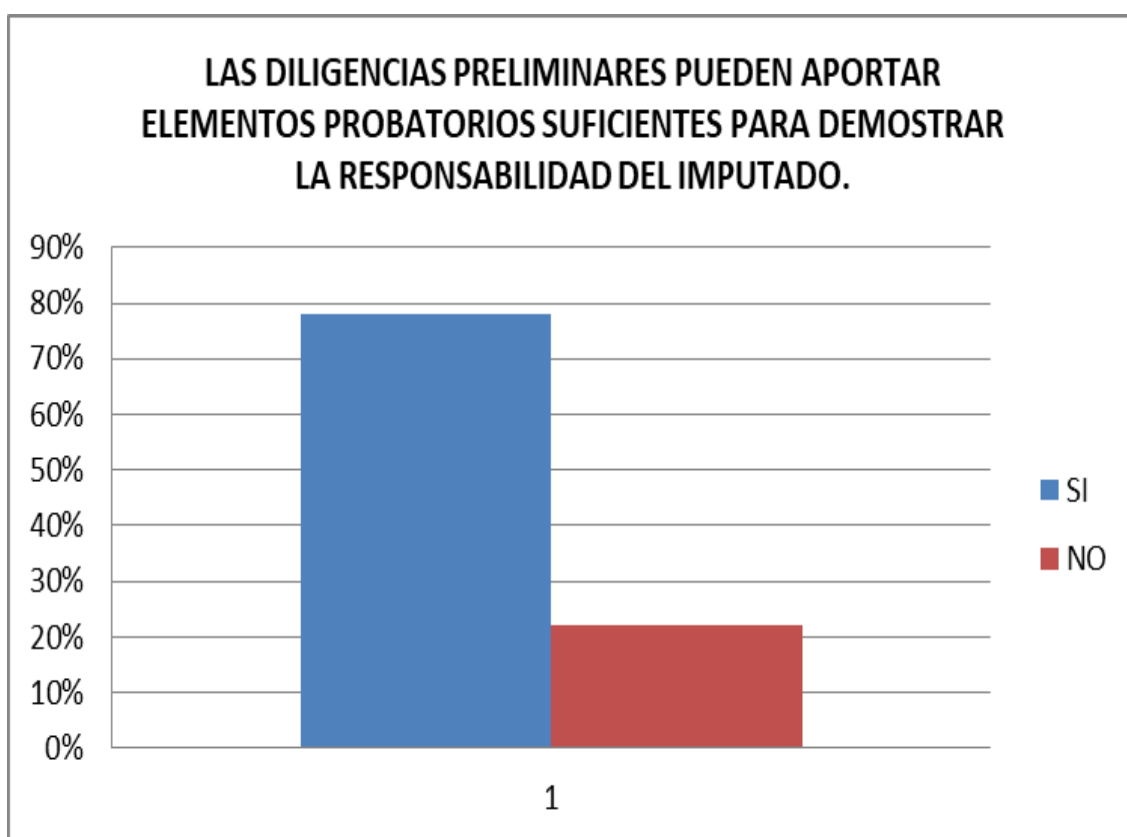
Total encuestados: 65 personas

CUADRO N° 09: EL DERECHO DE DEFENSA Y EL PLAZO RAZONABLE PARA GARANTIZAR LA DEFENSA.

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
EL DERECHO DE DEFENSA ES UN ATRIBUTO GENÉRICO QUE COMPRENDE UN CONJUNTO DE GARANTÍAS ENTRE ELLAS EL DERECHO A CONTAR EN EL PLAZO RAZONABLE PARA ORGANIZAR Y PREPARAR LA DEFENSA.	SI	48	78%
	NO	17	22%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 09



INFORME FINAL DE TESIS

**“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA
ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO
INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)**

**TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS
DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE**

Total encuestados: 65 personas

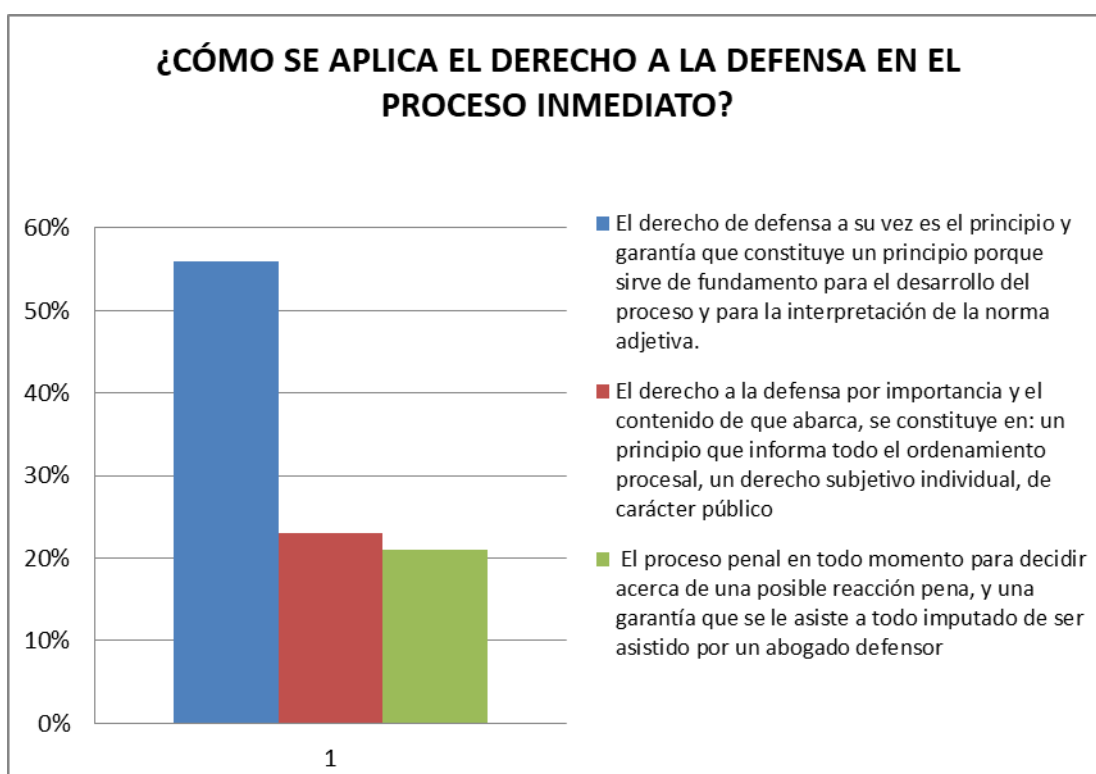
**CUADRO N° 10: CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA
EN EL PROCESO INMEDIATO.**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
----------	-----------	------------	------------

SEGÚN SU EXPERIENCIA, ¿CÓMO SE APLICA EL DERECHO A LA DEFENSA EN EL PROCESO INMEDIATO?	El derecho de defensa a su vez es el principio y garantía que constituye un principio porque sirve de fundamento para el desarrollo del proceso y para la interpretación de la norma adjetiva.	24	56%
	El derecho a la defensa por importancia y el contenido de que abarca, se constituye en: un principio que informa todo el ordenamiento procesal, un derecho subjetivo individual, de carácter público	26	23%
	El proceso penal en todo momento para decidir acerca de una posible reacción pena, y una garantía que se le asiste a todo imputado de ser asistido por un abogado defensor	15	21%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 10



INFORME FINAL DE TESIS

“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total encuestados: 65 personas

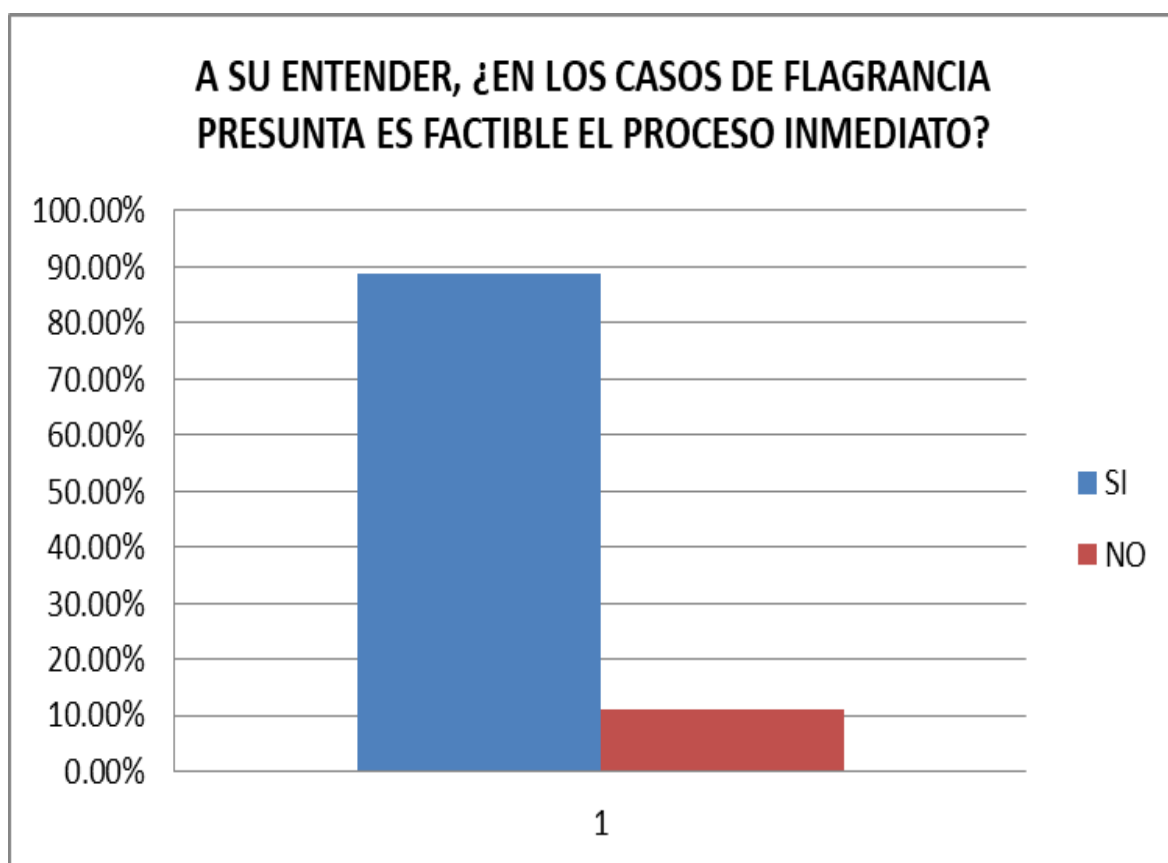
CUADRO N° 11: EN FLAGRANCIA PRESUNTA ES FACTIBLE EN EL PROCESO INMEDIATO.

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
----------	-----------	------------	------------

A SU ENTENDER, ¿EN LOS CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA ES FACTIBLE EL PROCESO INMEDIATO?	SI	55	88.88%
	NO	10	11.12%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 11



INFORME FINAL DE TESIS

“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

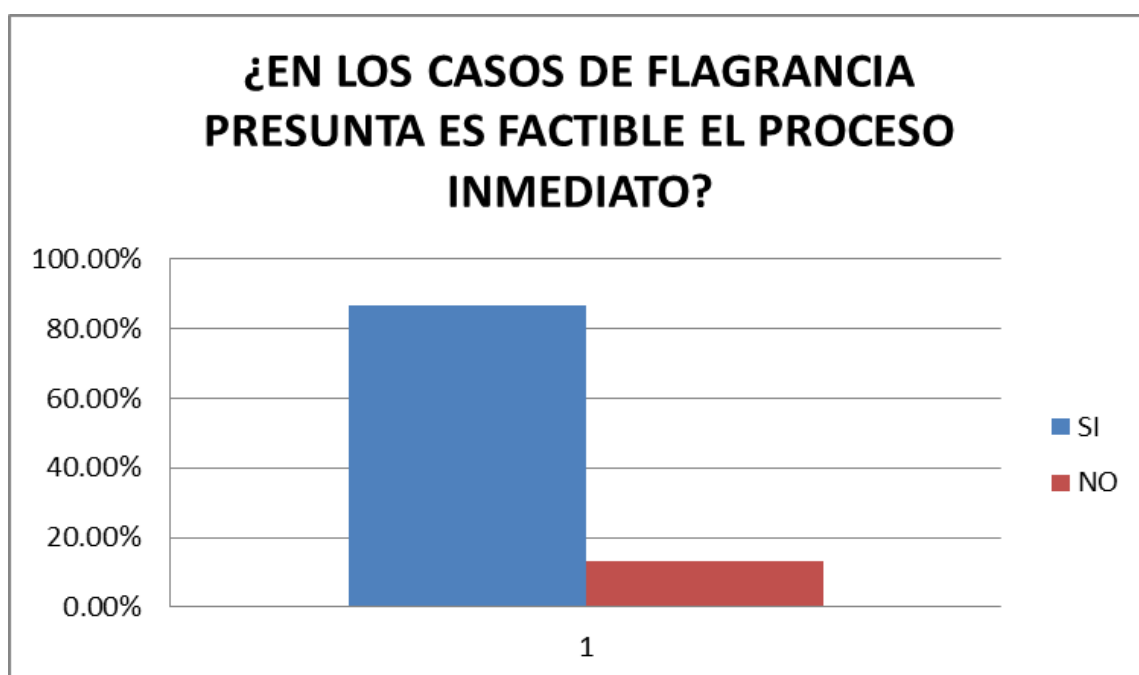
Total encuestados: 65 personas

CUADRO N° 12: DESIGNAR UN ABOGADO GARANTIZARÁ UNA BUENA DEFENSA.

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿LA DESIGNACIÓN FORMAL DE UN ABOGADO GARANTIZARÁ UN BUENA DEFENSA EN LA ACTUALIDAD?	SI	54	86.88%
	NO	11	13.12%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 12



INFORME FINAL DE TESIS

“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total encuestados: 65 personas

CUADRO N° 13: SE CUESTIONA EL TIEMPO RAZONABLE PARA PREPARAR LA DEFENSA EN EL PROCESO INMEDIATO.

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
¿EL PROCESO INMEDIATO	SI	23	24.65%

GARANTIZA UN TIEMPO RAZONABLE PARA PREPARAR LA DEFENSA?	NO	42	75.35%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 13



INFORME FINAL DE TESIS

“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA

ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

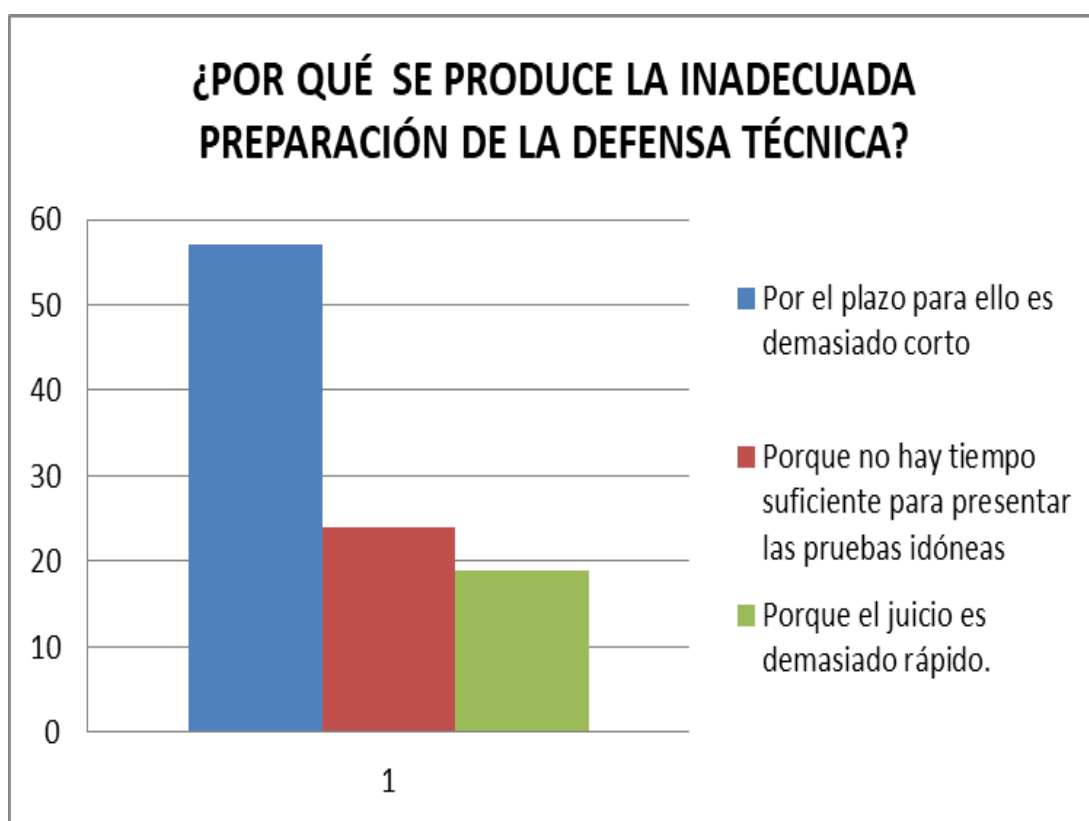
Total encuestados: 65 personas

CUADRO N° 14: CONCEPTO DE LA ADECUADA PREPARACION DE DEFENSA TÉCNICA.

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SEGÚN SU EXPERIENCIA EN LA PRACTICA DEL DERECHO, ¿POR QUÉ SE PRODUCE LA INADECUADA PREPARACIÓN DE LA DEFENSA TÉCNICA?	Por el plazo para ello es demasiado corto	33	57%
	Porque no hay tiempo suficiente para presentar las pruebas idóneas	18	24%
	Porque el juicio es demasiado rápido	14	19%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 14



INFORME FINAL DE TESIS

“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total encuestados: 65 personas

CUADRO N° 15: EL DEBIDO PROCESO ES REFERIDO A LAS GARANTIAS PROCESALES QUE ASEGUREN EL DERECHO.

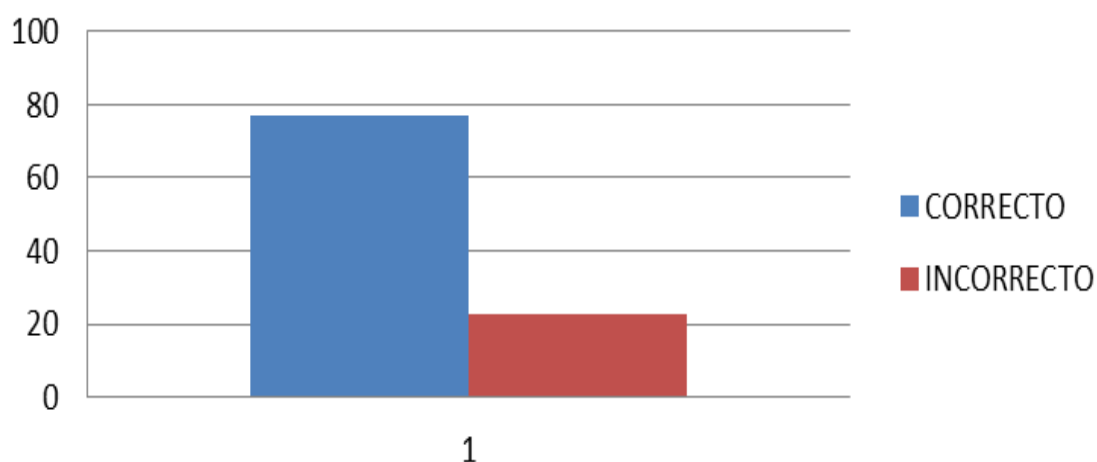
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
----------	-----------	------------	------------

EL DEBIDO PROCESO ADJETIVO, ES REFERIDO A LAS GARANTÍAS PROCESALES QUE ASEGURAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO ES REFERIDO A QUE PROTEGE A LOS CIUDADANOS DE LAS LEYES CONTRARIAS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LO DICHO ANTERIORMENTE ES:	CORRECTO	48	77%
	INCORRECTO	17	23%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 15

EL DEBIDO PROCESO ADJETIVO, ES REFERIDO A LAS GARANTÍAS PROCESALES QUE ASEGURAN LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DEBIDO PROCESO SUSTANTIVO ES REFERIDO A QUE PROTEGE A LOS CIUDADANOS DE LAS LEYES CONTRARIAS A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, LO DICHO ANTERIORMENTE



INFORME FINAL DE TESIS

“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total encuestados: 65 personas

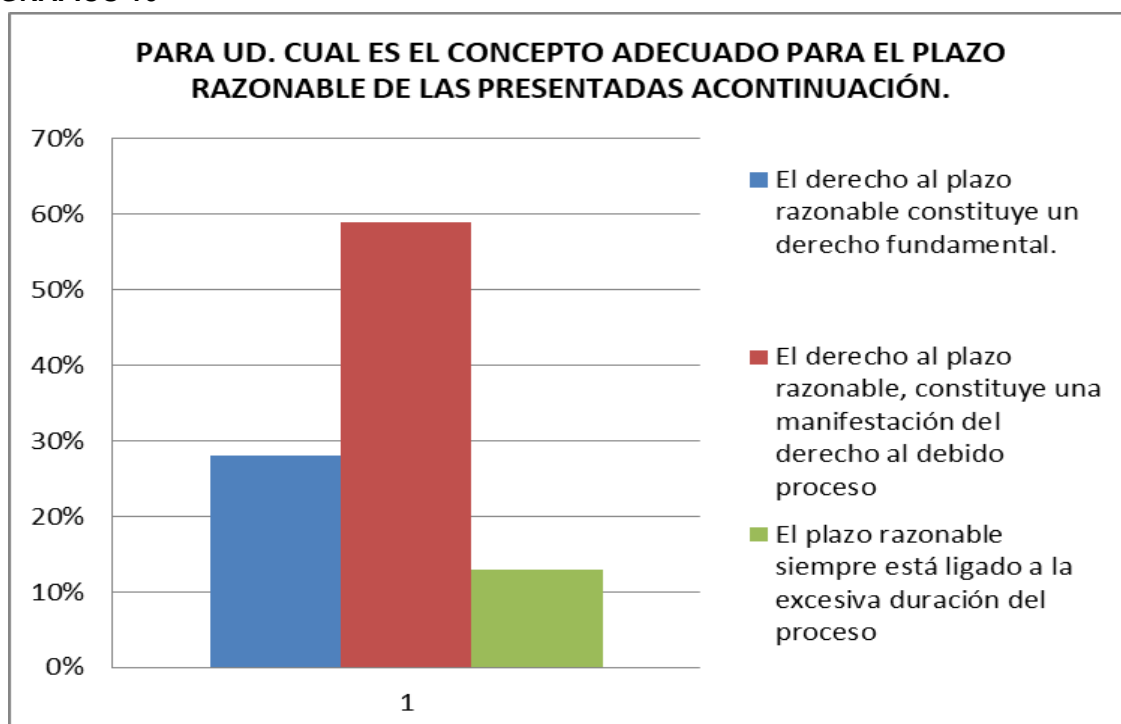
CUADRO N° 16: CONCEPTO ADECUADO PARA EL PLAZO RAZONABLE.

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
----------	-----------	------------	------------

PARA UD. ¿CUÁL ES EL CONCEPTO ADECUADO PARA EL PLAZO RAZONABLE?, DE LAS PRESENTADAS ACONTINUACIÓN.	El derecho al plazo razonable constituye un derecho fundamental.	14	28%
	El derecho al plazo razonable, constituye una manifestación del derecho al debido proceso	38	59%
	El plazo razonable siempre está ligado a la excesiva duración del proceso	13	13%
TOTAL		65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 16



INFORME FINAL DE TESIS

“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total encuestados: 65 personas

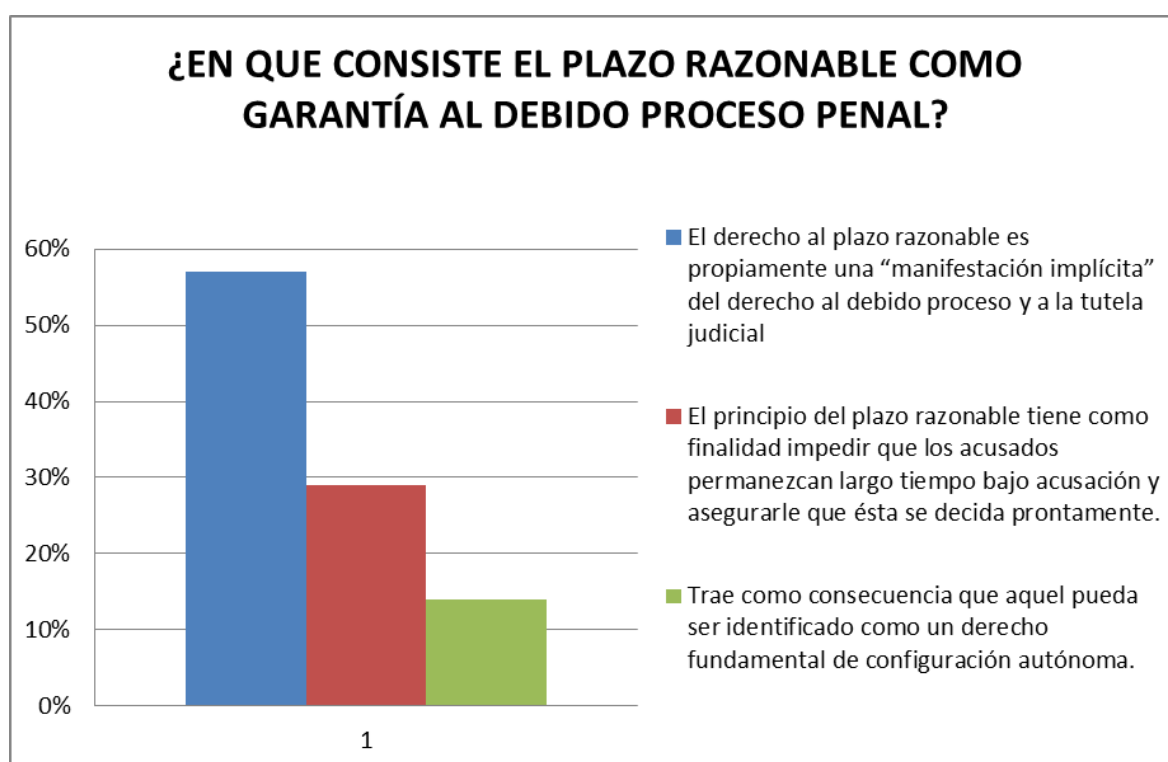
PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SABE UD. ¿EN QUE CONSISTE EL PLAZO RAZONABLE COMO GARANTÍA AL DEBIDO PROCESO PENAL?	El derecho al plazo razonable es propiamente una “manifestación implícita” del derecho al debido proceso y a la tutela judicial	34	57%
	El principio del plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurarle que ésta se decida prontamente.	19	29%
	Trae como consecuencia que aquel pueda ser identificado como un derecho fundamental de configuración autónoma.	12	14%

TOTAL	65	100%
-------	----	------

CUADRO N° 17: CONCEPTO DEL PLAZO RAZONABLE.

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 17



“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

Total encuestados: 65 personas

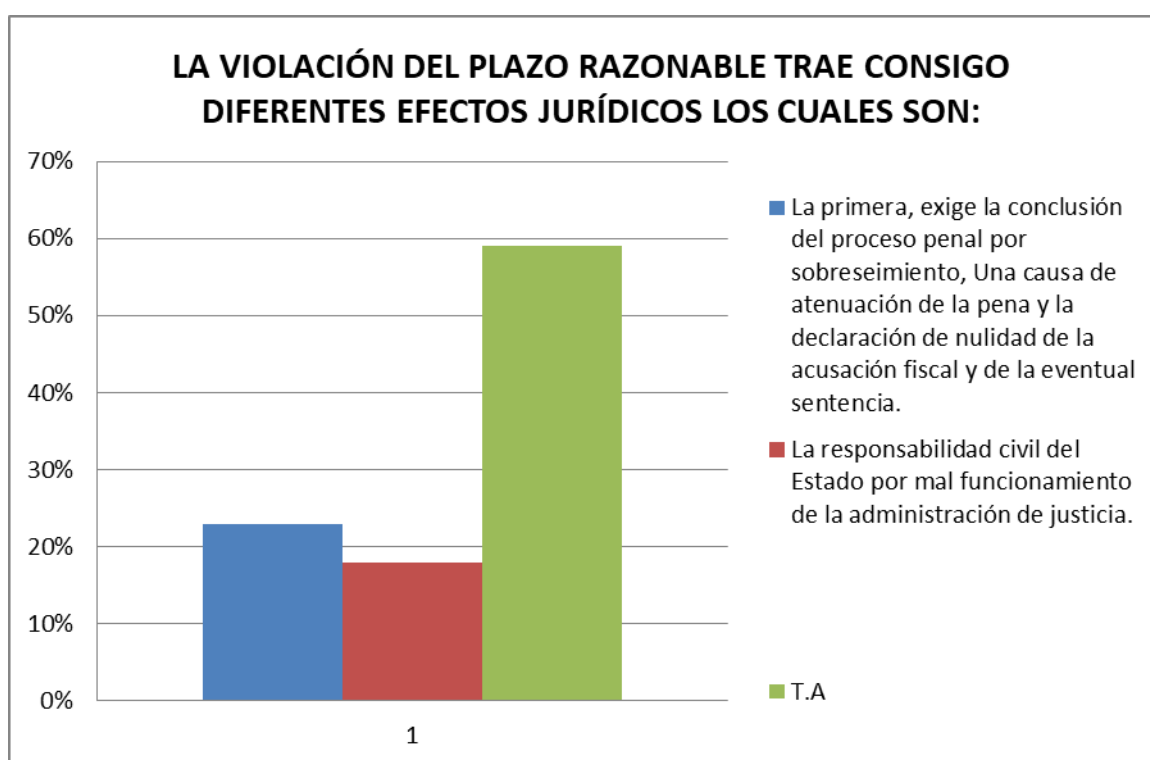
CUADRO N° 18: EFECTOS JURIDICOS DE LA VIOLACIÓN PLAZO

RAZONABLE.

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
LA VIOLACIÓN DEL PLAZO RAZONABLE TRAE CONSIGO DIFERENTES EFECTOS JURÍDICOS ¿CUALES SON?:	La primera, exige la conclusión del proceso penal por sobreseimiento, Una causa de atenuación de la pena y la declaración de nulidad de la acusación fiscal y de la eventual sentencia.	17	23%
	La responsabilidad civil del Estado por mal funcionamiento de la administración de justicia.	13	18%
	T.A	35	59%
	TOTAL	65	100%

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 18



“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

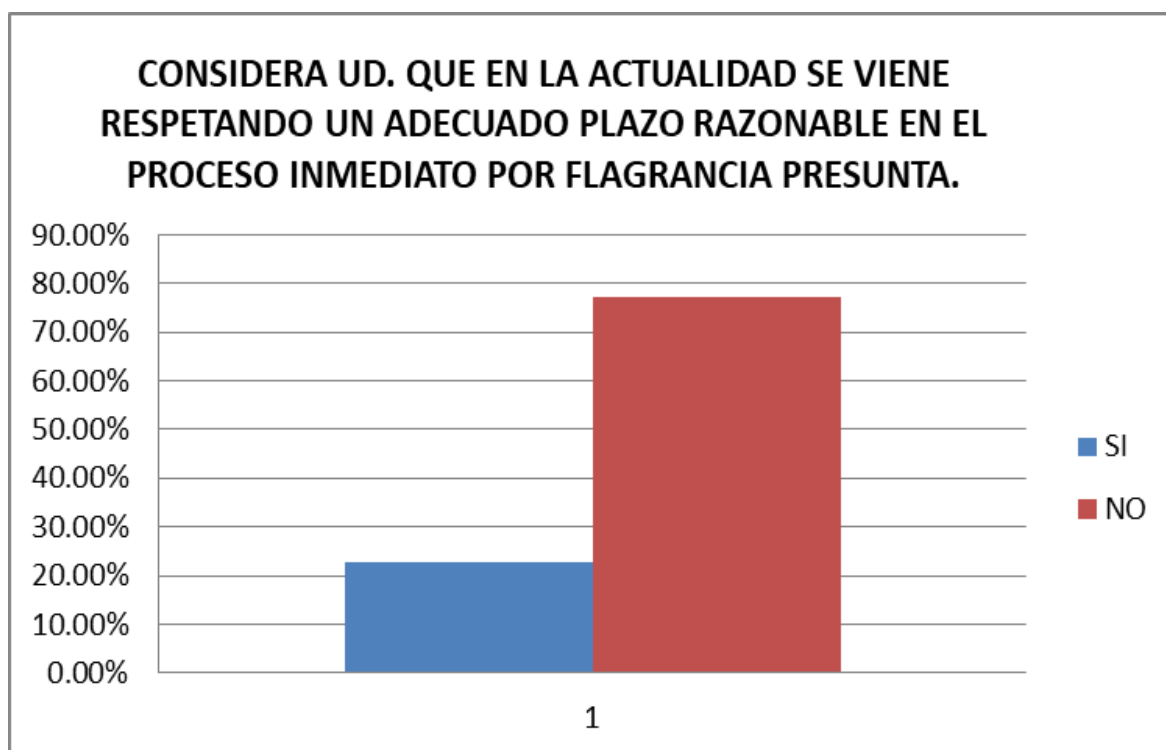
Total encuestados: 65 personas

**CUADRO N° 19: CONSIDERA UD. QUE EN LA ACTUALIDAD SE VIENE
RESPETANDO UN ADECUADO PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO
INMEDIATO POR FLAGRANCIA PRESUNTA.**

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
CONSIDERA UD. QUE EN LA ACTUALIDAD SE VIENE RESPETANDO UN ADECUADO PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO INMEDIATO POR FLAGRANCIA PRESUNTA.	SI	25	22.67%
	NO	40	77.33%
TOTAL			

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 19



“PRECISIONES AL PLAZO RAZONABLE PARA EL EJERCICIO DE LA ABOGACÍA, EN CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA, EN EL PROCESO INMEDIATO” (Lambayeque, 2016-2017)

TABULACION DE ENCUESTA APLICADA A JUECES, FISCALES Y ABOGADOS DEL DISTRITO JUDICIAL DE LAMBAYEQUE

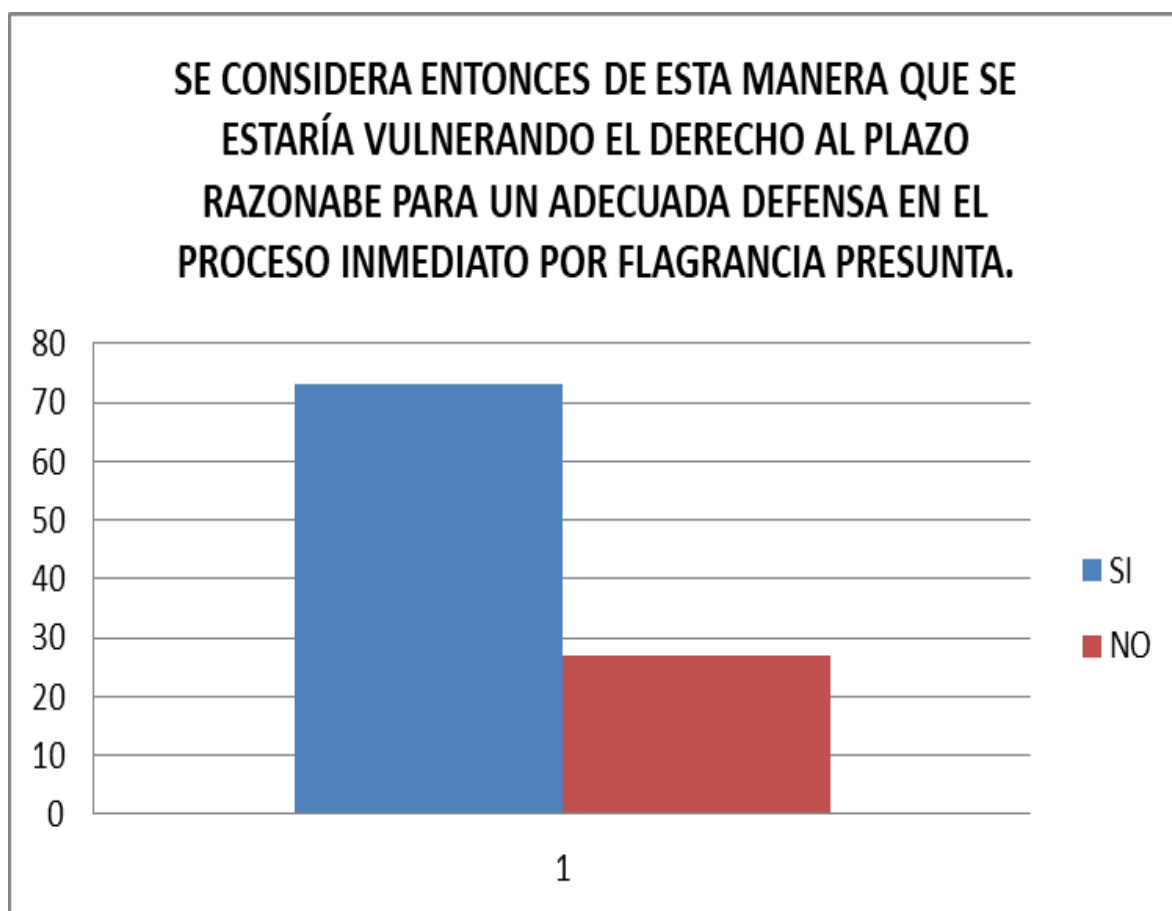
Total encuestados: 65 personas

CUADRO N° 20: SE CONSIDERA ENTONCES DE ESTA MANERA QUE SE ESTARÍA VULNERANDO EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE PARA UNA ADECUADA DEFENSA EN EL PROCESO INMEDIATO POR FLAGRANCIA PRESUNTA.

PREGUNTA	RESPUESTA	FRECUENCIA	PORCENTAJE
SE CONSIDERA ENTONCES DE ESTA MANERA QUE SE ESTARÍA VULNERANDO EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE PARA UNA ADECUADA DEFENSA EN EL PROCESO INMEDIATO POR FLAGRANCIA PRESUNTA.	SI	52	73%
	NO	13	27%
TOTAL			

Fuente: Trabajo de campo realizado en la ciudad de Chiclayo, al mes de Agosto de 2017.

GRÁFICO 20



3.2. Análisis de los Resultados

Tras recopilar la información brindada por las encuestas dirigidas a operadores del derecho del Distrito Judicial de Lambayeque se procedió a analizarla, obteniendo así el grupo denominado “**Tabulación de encuestas**”

dirigida a operadores del derecho", que contiene veinte cuadros y veinte gráficos. El **"CUADRO N° 01: DEFINICIÓN DE PROCESO INMEDIATO"**, nos muestra que de una población encuestada entre Jueces, Fiscales y Abogados

del Distrito Judicial de Lambayeque sobre el tema de Proceso Inmediato, el 61.87% del total de encuestados indicó que el Proceso inmediato es un proceso especial previsto en el Nuevo Código Procesal Penal, por su parte, un 15.42% señaló que El proceso inmediato fue introducido al ordenamiento jurídico procesal penal peruano y el 24.71% de los encuestados manifestó El proceso inmediato por flagrancia delictiva es el tema más resonante, ya sea por la rapidez y eficiencia que esta ha ganado en el transcurrir de los años. GRÁFICO 1.

De otro lado, se tiene que en la actualidad se ha establecido que este es un proceso obligatorio para los casos de flagrancia, de modo que se ha modificado el artículo 446 del código y se ha dado una estructura completamente nueva a los artículos 447 y 448. Con respecto al **“CUADRO N° 02: EN QUÉ SUPUESTOS ES APLICABLE AL PROCESO INMEDIATO”**, se tiene como muestra una población de 65 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque en donde el 33.87% del total manifestó que el proceso inmediato es aplicado cuando la persona es sorprendida en flagrante delito, por su parte, un 27.42% señaló que La persona debe confesar el delito y el restante 38.71% de los encuestados manifestó que las anteriores dos afirmaciones son correctas para referirse a los supuestos en donde es aplicable el proceso inmediato. GRÁFICO 2.

Con respecto a los delitos culposos, se tiene que el **“CUADRO N° 03: INCOAR PROCESO INMEDIATO EN CASO DE FLAGRANCIA”**, que

contiene la siguiente afirmación: Que para incoar proceso inmediato en caso de flagrancia presunta se requiere la existencia de prueba directa a partir de información categórica brindada por el agraviado. El 58.18% de una población encuestada de 65 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque indicó que sí es correcta la afirmación brindada, por su parte, el 41.82% señaló que no es correcta la afirmación brindada. Lo cual queda corroborado con el GRÁFICO 3.

Según la doctrina, la culpa es entendida como la omisión de la conducta debida para prever y evitar un daño, ya sea por negligencia, imprudencia o impericia. Se divide en: culpa consciente y culpa inconsciente. En ese sentido, se tiene que el **“CUADRO N° 04: LA DECLARACION DEL IMPUTADO”**, contiene la siguiente afirmación: “La declaración del imputado en la que acepte, reconoce ser autor o partícipe de un delito o una falta. Se constituye el concepto adecuado para definir la confesión”, y de 65 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque se desprende que para el 78.18% considera que, si es el correcto el concepto dado para definir la confesión, mientras que el 21.82% considera que no es adecuado el concepto dado para definir la confesión. Lo expresado en este cuadro queda verificado con el GRÁFICO 4.

En cuanto a la culpa Inconsciente el **“CUADRO N° 05: VALOR PROBATORIA DE LA CONFESIÓN DEBE SER CORROBORADO”**, se afirma: “Para que la confesión tenga valor probatoria tiene que ser corroborado por otros elementos de convicción” y de los 65 encuestados entre Jueces,

Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se tiene que para el 88.18% la afirmación antes menciona sí es correcta, por su parte, un 11.82% de los encuestados opinó contrariamente a la anterior posición. Siendo que, lo expresado queda corroborado con el GRÁFICO 5.

Luego, atendiendo que el Código Penal La Ley de Flagrancia no es nuevo, se creó para los delitos que están probados de manera indubitable, es decir que no cabe duda alguna de que la persona es culpable. De los tipos de flagrancia que nos presenta nuestro código penal vamos a estudiar específicamente la flagrancia presunta. En el “**CUADRO N° 06: CONCEPTO DE FLAGRANCIA PRESUNTA**”, se tiene la siguiente afirmación sobre el concepto de flagrancia presunta La flagrancia presunta se presenta como: “El individuo no ha sido sorprendido al ejecutar o consumir el delito, ni tampoco ha sido perseguido luego de cometido, pero sí hay indicios razonables que permiten pensar que él es el autor del hecho”, de los 65 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque se tiene que para el 86.45% del total de encuestados se considera que es correcto el concepto dado, mientras que el 13.55% opina contrariamente al concepto dado sobre flagrancia presunta. Lo indicado anteriormente se complementa con el GRÁFICO 6.

De otro lado, se tiene que del “**CUADRO N° 07: OBJETIVOS DE LA DECLARACIÓN**”, sobre la opinión acerca de que es lo que buscan los objetivos de la declaración, entre 65 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se tiene que para el 17% de los encuestados entienden que el objetivo es acreditar las proposiciones fácticas de nuestra

teoría del caso, por su parte un 27% considera que es solventar la credibilidad del declarante, acreditar e introducir al juicio prueba material, Obtener información relevante para el análisis de otra prueba, y finalmente el restante 56% el cual considera que lo dicho anteriormente es correcta en ambos sentidos. Lo anteriormente dicho se corrobora con el GRÁFICO 7.

Por otra parte, se debe precisar que existen dos posiciones frente a la concurrencia de acciones entre autor y víctima en los delitos culposos, siendo: la teoría de la imputación objetiva y la teoría de la determinación judicial disminuida. En ese sentido, se tiene que en el **“CUADRO N° 08: LAS DILIGENCIAS PRELIMINARES PUEDEN APORTAR ELEMENTOS PARA DEMOSTRAR LA RESPONSABILIDAD”**, de una población encuestada entre 65 personas entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se tiene la siguiente afirmación las diligencias preliminares pueden aportar elementos probatorios suficientes para demostrar la responsabilidad del imputado, para el 87.60% del total de encuestados manifiesta que es correcto la afirmación antes mencionada, por su parte, un 12.40% de los encuestados señala todo lo contrario por lo que no comparte la afirmación dada. Todo ello queda verificado con el GRÁFICO 8.

La otra posición También, nuestro tribunal constitucional, en el Expediente N° 00156-2012-PHC/TC-Lima, reconoce el derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar defensa, en basamento a las sentencias de la corte interamericanas de derechos humanos, el **“CUADRO N° 09: EL DERECHO DE DEFENSA Y EL PLAZO RAZONABLE PARA GARANTIZAR**

LA DEFENSA”, tras la siguiente afirmación “el derecho de defensa es un atributo genérico que comprende un conjunto de garantías entre ellas el derecho a contar en el plazo razonable para organizar y preparar la defensa”, de los 65 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, el 78% de los encuestados señaló que si es correcto lo señalado anteriormente, por su parte, el 22% señaló que lo dicho anteriormente para referirse al derecho de defensa es completamente lo contrario por lo que no se comparte la misma opinión. Lo dicho anteriormente se corrobora con el GRÁFICO 9.

Por otro lado, del **“CUADRO N° 10: CONCEPTO DE APLICACIÓN DEL DERECHO DE DEFENSA EN EL PROCESO INMEDIATO”**, que contiene la interrogante: ¿cómo se aplica el derecho a la defensa en el proceso inmediato?, muestra que de una población muestral de 65 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se desprende que para el 56% del total de encuestados El derecho de defensa a su vez es el principio y garantía que constituye un principio porque sirve de fundamento para el desarrollo del proceso y para la interpretación de la norma adjetiva, por su parte el 23% señala el derecho a la defensa por importancia y el contenido de que abarca, se constituye en: un principio que informa todo el ordenamiento procesal, un derecho subjetivo individual, de carácter público y el restante 21% de los encuestados indicó que el proceso penal en todo momento para decidir acerca de una posible reacción pena, y una garantía que

se le asiste a todo imputado de ser asistido por un abogado defensor. Lo anteriormente expresado se demuestra con el GRÁFICO 10.

Por otro lado, del **“CUADRO N° 11: EN FLAGRANCIA PRESUNTA ES FACTIBLE EN EL PROCESO INMEDIATO”**, que contiene la interrogante: **¿EN LOS CASOS DE FLAGRANCIA PRESUNTA ES FACTIBLE EL PROCESO INMEDIATO?**, muestra que de una población muestral de 65 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se desprende que para el 88.88% del total de encuestados menciona que sí es posible en casos de flagrancia presunta el proceso inmediato, por su parte el 11.12% señala que no cabe la posibilidad que proceda proceso inmediato en casos de flagrancia ya que es un tema discutido aun en doctrina. Lo anteriormente expresado se demuestra con el GRÁFICO 11.

Por otro lado, del **“CUADRO N° 12: DESIGNAR UN ABOGADO GARANTIZARÁ UNA BUENA DEFENSA”**, que contiene la interrogante: **¿La designación formal de un abogado garantizará una buena defensa en la actualidad?**, muestra que de una población muestral de 65 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se desprende que para el 86.88% del total de encuestados menciona que si, formalmente la designación de un abogado para que garantice su adecuada defensa es correcta, por su parte el 13.12% de la población restante señala que la designación formal de un abogado defensor no garantiza una buena defensa en la actualidad. Lo anteriormente expresado se demuestra con el GRÁFICO 12.

Por otro lado, del **“CUADRO N° 13: SE CUESTIONA EL TIEMPO RAZONABLE PARA PREPARAR LA DEFENSA EN EL PROCESO**

INMEDIATO”, que contiene la interrogante: ¿El proceso inmediato garantiza un tiempo razonable para preparar la defensa?, muestra que de una población muestral de 65 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se desprende que para el 24.65% del total de encuestados considera que el proceso inmediato si garantiza un tiempo razonable para preparar la defensa y el 75.35%, un porcentaje ampliamente mayoritario de los encuestados, indicó que el proceso inmediato no garantiza un tiempo razonable para preparar la defensa. Lo anteriormente expresado se demuestra con el GRÁFICO 13.

De este modo, del **“CUADRO N° 14: CONCEPTO DE LA ADECUADA PREPARACIÓN DE DEFENSA TÉCNICA”**, que contiene la interrogante ¿por qué se produce la inadecuada preparación de la defensa técnica?, muestra que de una población muestral de 65 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se desprende que para el 57% del total de encuestados respondieron por el plazo para ello es demasiado corto, por su parte el 24% señala porque no hay tiempo suficiente para presentar las pruebas idóneas, de carácter público y el restante 19% de los encuestados indicó Porque el juicio es demasiado rápido. Lo anteriormente expresado se demuestra con el GRÁFICO 14.

Por otro lado, del **“CUADRO N° 15: EL DEBIDO PROCESO ES REFERIDO A LAS GARANTIAS PROCESALES QUE ASEGUREN EL**

DERECHO", que contiene la afirmación: "El debido proceso adjetivo, es referido a las garantías procesales que aseguran los derechos fundamentales y debido proceso sustantivo es referido a que protege a los ciudadanos de las leyes contrarias a los derechos fundamentales", muestra que de una población muestral de 65 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se desprende que para el 77% del total de encuestados es correcto la afirmación antes mencionada y el restante 23% de los encuestados indicó es incorrecto la afirmación mencionada. Lo anteriormente expresado se demuestra con el GRÁFICO 15.

Por otro lado, del "**CUADRO N° 16: CONCEPTO ADECUADO PARA EL PLAZO RAZONABLE**", que contiene la interrogante: ¿Cuál es el concepto adecuado para el plazo razonable?, muestra que de una población muestral de 65 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se desprende que para el 28% del total de encuestados menciona que el derecho al plazo razonable constituye un derecho fundamental, por su parte el 59% señala que el derecho al plazo razonable, constituye una manifestación del derecho al debido proceso y el restante 13% de los encuestados indicó el plazo razonable siempre está ligado a la excesiva duración del proceso. Lo anteriormente expresado se demuestra con el GRÁFICO 16.

Por otro lado, del "**CUADRO N° 17: CONCEPTO DEL PLAZO RAZONABLE**", que contiene la interrogante: ¿En qué consiste el plazo

razonable como garantía al debido proceso penal?, se desprende que para el 57% del total de encuestados El derecho al plazo razonable es propiamente una “manifestación implícita” del derecho al debido proceso y a la tutela judicial, por su parte el 29% señala el principio del plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurarle que ésta se decida prontamente y el restante 14% de los encuestados indicó que Trae como consecuencia que aquel pueda ser identificado como un derecho fundamental de configuración autónoma. Lo anteriormente expresado se demuestra con el GRÁFICO 10.

Por otro lado, del “**CUADRO N° 18: EFECTOS JURIDICOS DE LA VIOLACIÓN PLAZO RAZONABLE**”, que contiene la interrogante: La violación del plazo razonable trae consigo diferentes efectos jurídicos los ¿cuáles son?., se desprende que para el 23% del total de encuestados La primera, exige la conclusión del proceso penal por sobreseimiento, Una causa de atenuación de la pena y la declaración de nulidad de la acusación fiscal y de la eventual sentencia, por su parte el 18% La responsabilidad civil del Estado por mal funcionamiento de la administración de justicia y el restante 59% de los encuestados que las afirmaciones anteriores son correctas ya que si se viola el plazo razonable los efectos jurídicos seria todos los ya mencionados. Lo anteriormente expresado se demuestra con el GRÁFICO 18.

Por otro lado, del “**CUADRO N° 19: CONSIDERA UD. QUE EN LA ACTUALIDAD SE VIENE RESPETANDO UN ADECUADO PLAZO RAZONABLE EN EL PROCESO INMEDIATO POR FLAGRANCIA**”

PRESUNTA”, que contiene la afirmación: considera usted que en la actualidad se viene respetando un adecuado plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia presunta, se desprende que para el 22.67% del total de encuestados considera que si se viene respetando un adecuado plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia presunta y el restante 77.33% de los encuestados indicó no se está respetando un adecuado plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia presunta. Lo anteriormente expresado se demuestra con el GRÁFICO 19.

Finalmente, el derecho de defensa a su vez es el principio y garantía que constituye un principio porque sirve de fundamento para el desarrollo del proceso y para la interpretación de la norma adjetiva. En ese sentido, del **“CUADRO N° 20: SE CONSIDERA ENTONCES DE ESTA MANERA QUE SE ESTARÍA VULNERANDO EL DERECHO AL PLAZO RAZONABLE PARA UNA ADECUADA DEFENSA EN EL PROCESO INMEDIATO POR FLAGRANCIA PRESUNTA**”, que contiene la siguiente afirmación: Se considera entonces de esta manera que se estaría vulnerando el derecho al plazo razonable para una adecuada defensa en el proceso inmediato por flagrancia presunta, se desprende que de un total de 62 encuestados entre Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de Lambayeque, se tiene que para el 73% del total de los encuestados considera que si se está vulnerando el derecho al plazo razonable para una adecuada defensa en el proceso inmediato por flagrancia presunta y el restante un 27% manifiesta que no se

estaría vulnerando el derecho al plazo razonable para una adecuada defensa.

Siendo que lo expresado por este cuadro se corrobora con el GRÁFICO 20.

3.3. Discusión y contrastación de hipótesis.

Luego de efectuado el trabajo de campo, con respeto a la encuesta aplicada a los Jueces, Fiscales y Abogados del Distrito Judicial de

Lambayeque se desprende que para la posición mayoritaria (56%) conceptual El derecho de defensa a su vez es el principio y garantía que constituye un principio porque sirve de fundamento para el desarrollo del proceso y para la interpretación de la norma adjetiva. De otro lado, El proceso inmediato fue introducido al ordenamiento jurídico procesal penal peruano, siendo que en ese sentido, el (23%) señala el derecho a la defensa por importancia y el contenido de que abarca, se constituye en: un principio que informa todo el ordenamiento procesal, un derecho subjetivo individual, de carácter público y el restante (21%) de los encuestados indicó que el proceso penal en todo momento para decidir acerca de una posible reacción pena, y una garantía que se le asiste a todo imputado de ser asistido por un abogado defensor.

Por otro lado, en este punto, es necesario indicar que existe una regulación para el plazo razonable del proceso penal, para la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los artículos 7.5 y 8.1 de la Convención Americana, persiguen justamente el propósito que las cargas que el proceso penal conllevan para el individuo no se prolonguen continuamente en el tiempo y causen daño permanente, para la posición dominante (57%) derecho al plazo razonable es propiamente una “manifestación implícita” del derecho al debido proceso y a la tutela judicial. Y con respecto al concepto de plazo razonable la

posición de un (29%) señala el principio del plazo razonable tiene como finalidad impedir que los acusados permanezcan largo tiempo bajo acusación y asegurarle que ésta se decida prontamente. El restante (14%) de otro lado los encuestados indicaron que trae como consecuencia que aquel pueda ser identificado como un derecho fundamental de configuración autónoma.

De otro lado, la mayoría de los encuestados, es decir, el 59% entiende que los efectos de la violación del plazo razonable exigen la conclusión del proceso penal por sobreseimiento, Una causa de atenuación de la pena y la declaración de nulidad de la acusación fiscal y de la eventual sentencia, también está la responsabilidad civil del Estado por mal funcionamiento de la administración de justicia. En ese sentido, también es conveniente poner en conocimiento de cómo los operadores jurídicos consideran que se está llevando a cabo el plazo razonable en el proceso inmediato en el proceso de flagrancia. la posición mayoritaria 77.33% de los encuestados indicó no se está respetando un adecuado plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia presunta. se desprende que para el 22.67% del total de encuestados considera que si se viene respetando un adecuado plazo razonable en el proceso inmediato por flagrancia presunta.

Cabe señalar que este cambio de modelo procesal se sustentó en la necesidad de articular una persecución penal más ágil, moderna y eficaz, pretendiendo con ello armonizar “garantía” con “eficacia”, tal como logra ser advertido del estudio de su Título Preliminar; consiguientemente, de allí se logran advertir las aristas que comprometen la reforma procesal penal peruana,

en donde el Ministerio Público asume un rol protagónico como órgano conductor y director de la investigación criminal, lo cual opera desde que toma conocimiento de la *notitiacriminis*, guiando con su actuación funcional la suerte del procesado, ya sea para lograr una condena, su absolución o el sobreseimiento de la causa, debiendo resaltarse que hasta antes de formalizarse la investigación de manera formal, cuenta entre sus funciones la exclusiva competencia para el cese de la persecución penal le es de su exclusiva competencia, ello a través de diversas instituciones procesales, como el principio de oportunidad, regulado en el Art. 2ª del NCPP, por el cual el Fiscal, de oficio o a pedido de parte, podrá a su decisión abstenerse de ejercitar la acción penal, la cual es de naturaleza pública. A la par de este instituto jurídico procesal se haya el acuerdo reparatorio, que lleva como eje central de sustento legal a la conciliación penal, entre otros.

Finalmente, la posición dominante (73%) del total de los encuestados considera que si se está vulnerando el derecho al plazo razonable para una adecuada defensa en el proceso inmediato por flagrancia presunta.

En consecuencia, la hipótesis se ha contrastado, confirmándola, en primer término, con la opinión especializada de juristas nacionales y extranjeros quienes entienden, también que no existe un adecuado tratamiento de la al proceso inmediato en el Perú tanto de manera doctrinal como por la legislación penal nacional y muy poca discusión de manera jurisprudencial, siendo que la Corte Suprema de la República tampoco se ha pronunciado al respecto. Así

como también por las opiniones de los encuestados del Distrito Judicial de Lambayeque entre Jueces, Fiscales y Abogados en que ante la concurrencia de la vulneración al plazo razonable el proceso inmediato no se toma en consideración dicho problema ya que no se considera siquiera el adecuado plazo para que imputado pueda ejercer su correcto derecho a la defensa por parte del juzgador nacional. Luego de la encuesta realizada se determina y así se confirman nuestra hipótesis; sobre El reducido tiempo para la preparación de una adecuada defensa técnica en los casos de flagrancia presunta se constituye en el presupuesto lógico-jurídico para sustentar la desregulación del proceso inmediato, dadas las especiales condiciones de probanza que presenta. En consecuencia, la propuesta de la investigación resultó viable y demostraba en su totalidad.

CONCLUSIONES

1. Para que el ordenamiento jurídico cumpla su efectividad en la sociedad, se requiere que todos los operadores jurídicos empiecen a identificar el problema que se presenta en el proceso inmediato con relación al plazo razonable, en lo que respecta a la preparación de una adecuada defensa técnica en aquellos casos de flagrancia presunta; lo cual, se constituye en el presupuesto necesario para sustentar la desregulación del proceso inmediato, dadas las especiales consideraciones de probanza que presenta, conllevando al correcto desarrollo del proceso inmediato y respeto del derecho de la adecuada defensa.
2. Se debe precisar que el derecho de defensa es un atributo genérico que comprende un conjunto de garantías, entre ellas el derecho de contar con el plazo razonable para organizar y preparar la defensa, en el modo y forma que así lo determine el procesado y su abogado defensor, aun cuando aquello pueda representar actuaciones dilatorias o tergiversadoras de la verdad, la cual es materia del devenir procesal entre acusación y defensa.
3. El proceso inmediato por flagrancia, en efecto, no se condice con la vigencia y respeto de los requisitos que debe tener toda acusación, transgrediendo así el principio acusatorio, siendo que la vulneración deviene en una consecuencia de la excesiva celeridad existente en el citado proceso, la cual deviene de la inadecuada interpretación del derecho a ser juzgado en un plazo razonable

4. El ejercicio irrestricto del derecho a la defensa técnica en el proceso inmediato encuentra serios reveses en lo que corresponde al proceso inmediato, más aun en los casos de flagrancia presunta, ello en atención a los polémicos fallos que se han producido en los últimos tiempos, encontrándonos cara a cara con las consecuencias de su incorrecta aplicación.

RECOMENDACIONES

1. Realizar a corto plazo debates jurídicos para la desregulación del proceso inmediato por flagrancia presunta dadas las especiales condiciones de probanza que presenta, por lo que se recomienda que se desregule ya que no es suficiente el tiempo para preparar una buena estrategia de defensa es mas para que una estrategia de defensa se pueda considerar en eficaz requiere la adopción de una serie de pasos los cuales no es posible hacerlo en el tiempo reducido que se puede ejercer la adecuada defensa.
2. Efectuar seminarios de difusión sobre la aplicación del derecho de defensa en el proceso inmediato, para de esta manera pueda la comunidad jurídica dar sus aportes tanto doctrinarios como prácticos sobre el tema y se llegue a un adecuado proceso inmediato respetando todos los derechos de defensa del imputado.
3. Proporcionar a la Corte Suprema de la República la toma de postura de que, ante la eminente vulneración del derecho fundamental a la defensa, por lo que se está vulnerando directamente al artículo 14 del pacto internacional de derechos civiles y políticos es: igualdad de las personas en su inciso tres nos señala que: durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho en plena igualdad, contando con las garantías mínimas como de disponer del tiempo para preparar su defensa.
4. es entonces que es menester señalar que se tiene que desregular el proceso inmediato ya que está contraviniendo al derecho a contar con el tiempo y los medios adecuados para preparar la defensa se encuentra se encuentra previsto

en el artículo 8.2.c de la convención americana. En sentido similar el título preliminar del código procesal penal en su artículo IX reconoce que toda persona “tiene derecho a que se conceda un tiempo razonable para que prepare su defensa”. Por lo que dicho de esta manera se estaría yendo contra con lo ya estipulado en la norma internacional por lo que se funda de esta manera la desregularización del proceso en el aspecto antes mencionado.

CAPÍTULO V: FUENTES DE INFORMACIÓN

1. Fuentes bibliográficas

ARAYA VEGA, Alfredo (2016). “El Nuevo Proceso Inmediato (Decreto Legislativo N° 1194) hacia un Modelo de una Justicia como Servicio Público de la Calidad de Rostro Humano”. Revista Informativa de actualidad jurídica. Lima.

ARAYA VEGA, Alfredo (2016). “Nuevo Proceso Inmediato Para Los Delitos En Flagrancia”. Jurista Editores. Lima.

BINDER, Alberto (1993). “Introducción Al Derecho Procesal Penal”. Jurista Editores. Lima.

BINDER, Alberto (2015). “Defensa Penal Efectiva en América Latina”. Ediciones Antropos. Bogotá.

GARCÍA CALIZAYA, Carmelo (2016). “Derecho al tiempo razonable para preparar defensa y juicio inmediato por flagrancia delictiva”. Editorial Latindex. Lima

GINEO SENDRA, Vicente (2015). “Derecho Penal”. “. Editorial Latindex. Lima

NAKAZAKI SERVIGÓN, Cesar (2017). “El derecho penal y procesal penal”, desde la perspectiva del abogado penalista litigante. Editorial Gaceta Jurídica, Lima.

NEYRA FLORES, José (2010) “Manual del nuevo código procesal penal y de litigación oral”. Editorial Idemsa. Lima

- NÚÑEZ BARBERO, R. y WELZEL, H (1964) “El nuevo sistema del Derecho Penal (una introducción a la doctrina de la acción finalista). Traducido por CEREZO MIR. 4ª Edición. Editorial Ariel. Barcelona.
- ORÉ GUARDIA, Arsemio (2011). “Manual de derecho procesal penal”. Editorial IUSTITIA. Lima
- PASTOR SALAZAR, Luis (2015). “La investigación del delito en el proceso penal” IUSTITIA. Lima
- PASTOR SALAZAR, Luis (2015). “La Investigación del Delito en el Proceso Penal”. IUSTITIA. Lima.
- PAUL RICOEUR (1999) “Lo justo”, Colección Esprit, Traducción de Agustín DOMINGO MORATALLA. Editorial Caparros editores, Madrid.
- PEDRO SAGÜÉS, Néstor (1993). “Elementos de derecho constitucional”, Tomo 2. Editorial Astrea. Buenos Aires.
- PEÑA CABRERA, Alonso y FRISANCHO APARICIO, Manuel (2003), “Terminación anticipada del proceso”. Primera Edición. Editorial Jurista Editores. Lima.
- PLASCENCIA VILLANUEVA, Raúl (2004). “Teoría del Delito”. Editorial del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. México.
- REVILLA LLASA, Percy Enrique (2013). “Principios Fundamentales del Nuevo Proceso Penal”. Gaceta Jurídica. Lima
- REYNA ALFARO, Luis Miguel (2004). “El proceso penal aplicado conforme el código procesal penal 2004”. Editorial Grijley. Lima

REYNA ALFARO, Luis Miguel (2004). "El proceso penal aplicado conforme al Código Procesal Penal". Grijley. Lima.

2. Lincografías

ALBERTO DONNA, Edgardo. "La imputación como base del sistema penal"

En:http://www.derecho.uba.ar/aquídemica/derecho-abierto/archivos/DALa-necesidad-del-Derecho-Penal-Donna_La-imputacion-como-base-delsistema-penal.pdf

CASTAÑEDA OTSU, Susana (2008), "El plazo razonable de la investigación preliminar y del proceso penal, su control a través del hábeas corpus"

En:[http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/0A1DB2D4EF4CB65605257A880015D6E9/\\$FILE/plazorazonable.pdf](http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/0A1DB2D4EF4CB65605257A880015D6E9/$FILE/plazorazonable.pdf)

DÍAZ ROMERO, Mónica Lucinda (2016) "La terminación anticipada en la etapa intermedia y su aplicación como criterio de oportunidad en los juzgados de investigación preparatoria de Huaura". En:
http://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstream/cybertesis/1213/1/Benavente_ch.pdf

ERNESTO DE LA JARA VASCO MUJICA GABRIELA RAMÍREZ (2009),

"¿Cómo es el proceso penal según el nuevo código cartilla informativa procesal penal?".

En:<http://www.derechoycambiosocial.com/revista019/como%20es%20el%20proceso%20penal%20segun%20NCP.pdf>

LANDA ARROLLO, Cesar (2012), "El derecho al debido proceso en la jurisprudencia: Corte Suprema de Justicia de la República del Perú, Tribunal Constitucional del Perú, Corte Interamericana de Derechos Humanos.En:http://sistemas.amag.edu.pe/publicaciones/derecho_constitucional/derecho_debido_proce_jurisp_vol1.pdf

MALMA CORDERO, Claudia. "El proceso inmediato fundamentos y supuestos de aplicación" En:
http://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4300_3_el_proceso_inmediato.pdf

MAVILA LEÓN, Rosa (2010). "Los Procesos Especiales en el Nuevo Código de Procedimientos Penales".
En:<http://rosamavilaleon.blogspot.pe/2010/05/los-procesos-especiales-enel-nuevo.html>

SAN MARTÍN CASTRO, César (2016). "El proceso inmediato (NCPPO originario y D. Leg. N° 1194)". En:
http://www.mpfm.gob.pe/escuela/contenido/actividades/docs/4361_lectura_proceso_inmediato.pdf

SANCHEZ VELARDE, Pablo (2006). "criminalidad organizada y procedimiento penal" en la reforma del proceso penal peruano, anuario de derecho penal 2004. En: <https://es.scribd.com/doc/140231676/Procesos-Especiales-enel-Nuevo-Codigo-Procesal-Penal-Peruano-docx>

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICAS.

LIBROS

ABALLERO GUEVARA, Rosa Magaly (2009) “La actual regulación de la flagrancia delictiva en el ordenamiento peruano Un flagrante desacierto”.

En: Gaceta Jurídica. Revista de Actualidad Jurídica. Lima.

ANGULO ARANA, Pedro Miguel (2002) “La Detención en Flagrancia”. En:

Gaceta Jurídica. Revista de Actualidad Jurídica. Lima.

MORALES GODO, Juan, “La Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo”, Tomo I, Gaceta Jurídica, Primera Edición, enero 2008, Lima, pág. 118.

BANDRES SANCHEZ-CRUZAT, Juan Manuel (1992). “Derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal Constitucional”. Editorial Arazandi. Pamplona.

BANDRES SANCHEZ-CRUZAT, Juan Manuel. (1992). “Derecho fundamental al proceso debido y el Tribunal Constitucional”. Editorial Arazandi. Pamplona.

BERNALES BALLESTEROS, Enrique, La Constitución de 1993. Análisis Comparado, Constitución y Sociedad, 3ra Edición Lima, 1997, pág. 178181.

BUSTOS RAMÍREZ, Juan (1989). “Manual de Derecho Penal”. Editorial Ariel S. A. Barcelona.

CARNELUTTI, Francesco. (1950). “Lecciones sobre el proceso penal”. Editorial ediciones jurídicas Europa-América. Alemana

- COUTURE EDUARDO. (1989) "Estudios de derecho procesal civil". 3ra Edición, Tomo I. Gaceta Constitucional. Buenos Aires.
- COUTURE, Eduardo. (1989). "Estudios de derecho procesal civil". 3ra Edición. Tomo I. Editorial De Palma. Buenos Aires.
- ESCRICHE RAMIREZ, Juan (1957). "Enciclopedia Jurídica Omeba", Tomo VI. Editorial Bibliográfica. Buenos Aires.
- FLORES POLO, Pedro (1984). "Diccionario de Términos Jurídicos". Tomo II. Editores Importadores. Lima.
- HINOSTROZA PARIACHI, César José. (2005) "La Confesión Sincera en el Proceso Penal y su Tratamiento en el Nuevo Código Procesal". Editorial Alternativas S.R.Ltda. Lima.
- MARTÍN M. Ricardo (1999). "Entrada en domicilio por causa de delito flagrante (A propósito de las SSTC 341/1993 y 94/1996)". Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología (RECP 01-02).
- MESÍA RAMIREZ, Carlos y SOSA SACIO Juan Manuel (2008), "La Constitución Comentada. Análisis artículo por artículo, Primera Edición, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, pág. 131.
- MINAYA RAMOS, Juan Leonardo (2015). "El Populismo Penal es una enfermedad crónica que debemos eliminar de nuestra práctica jurídica". Lima.
- MITTERMAIER, Kart Joseph (2006). "Tratado de la Prueba en Materia Criminal". Editorial Hammurabi SRL. Buenos Aires.

MOMMSEN Teodoro (1991). "Derecho Penal Romano". Editorial Temis.
Colombia.

MORY PRÍNCIPE, Freddy (2012). "La Investigación del Delito, El Policía, El
Fiscal y El Juez, Derechos Fundamentales del Imputado". Rodhas. Lima.
NEYRA FLORES, José Antonio (2015). "Tratado De Derecho Procesal Penal".
Editorial Idemsa. Lima.

NEYRA FLORES, José Antonio (2015). "Tratado De Derecho Procesal Penal".
Editorial Idemsa. Lima.

ORE GUARDIA, Arsenio (1999) "Manual de Derecho Procesal Penal".
Editorial Alternativas. Lima.

ORÉ GUARDIA, Arsenio (2011). "Manual Derecho Procesal Penal". Reforma.
Lima.

OSSORIO, Manuel. (1992). "Diccionario de Ciencias Jurídicas, Políticas y
Sociales". Editorial Heliasta. Buenos Aires.

PALOMINO AMARO, Raúl M (2014). "Aproximaciones sobre la defensa eficaz
en el proceso penal desde la jurisprudencia". Alerta Informativa. Loza
Avalos Abogados. Lima

PASTOR SALAZAR, Luis (2015). "La Investigación del Delito en el Proceso
Penal". IUSTITIA. Lima.

PESTANA URIBE, Enrique. (2009) "La configuración constitucional de los
derechos no enumerados en la cláusula abierta del sistema de derechos y
libertades". Editorial Gaceta Jurídica. Lima.

REVILLA LLASA, Percy Enrique (2013). "Principios Fundamentales del Nuevo Proceso Penal". Gaceta Jurídica. Lima

REYNA ALFARO, Luis Miguel (2004). "El proceso penal aplicado conforme al Código Procesal Penal". Grijley. Lima.

SAENZ DÁVALOS, Luis (1999). "La tutela del derecho al debido proceso en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional". en Revista Peruana de Derecho Constitucional N° 1, Lima, 1999.

SAN MARTÍN C. César (1999). "Derecho Procesal Penal". Vol. II. Editorial Grijley. Lima.

SAN MARTIN CASTRO, César (2015) "Derecho Procesal Penal" Editorial INPECCP-CENALES, Perú.

VINCENZO MANZINI, Luis (1952). "Tratado de Derecho Procesal Penal". Tomo III. Ediciones Jurídicas Europa, Buenos Aires.

LINKOGRAFIA

ALC. PENAL. ABIGADO PENALISTA ¿Qué son elementos de convicción? En:
<http://www.alc.com.ve/elementos-de-conviccion/>

BINDER M. Alberto (1999), "Introducción al derecho penal"
En:<https://polancoadrian.files.wordpress.com/2013/09/introduccion-alderecho-procesal-penal-alberto-binder.pdf>

CASTAÑEDA OTSU, Susana (2008), "El plazo razonable de la investigación preliminar y del proceso penal.- su control a través del hábeas corpus"
En:http://www2.congreso.gob.pe/sicr/cendocbib/con4_uibd.nsf/0A1DB2D4

EF4CB65605257A880015D6E9/\$FILE/plazorazonable.pdf

CORTE SUPREMA (2017) “Proceso inmediato por flagrancia presunta requiere prueba directa” En: <http://laley.pe/not/3969/proceso-inmediatopor-flagrancia-presunta-requiere-prueba-directa/>

DIAZ VARGAS, Felicita “la vulneración del derecho al plazo razonable en las diligencias preliminares”

En:<http://www.tdx.cat/bitstream/handle/10803/10432/beltran2.pdf;jsessionid=F71C7DDEE0381B995B8DFF34A7387B72?sequence=1>

GARRIDO MUÑOZ, Osvaldo (2010), “Flagrancia en la comisión de un delito” En: <http://flagranciaendelito.blogspot.com/>

MATOS BARZOLA, Alan Emilio (2010) “El derecho defensa-derecho en intérprete En: <https://derechoperu.wordpress.com/2010/07/04/el-derechode-defensa-derecho-de-interprete/>

MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS HUMANOS (2016) “Protocolo de actuación internacional para el proceso inmediato en casos de flagrancia y otros supuestos bajo el D. Ley 1194” En:http://portal.mpfh.gob.pe/descargas/ncpp/files/0412c8_protocolo%20de%20PROCESO%20INMEDIATO%2005%2011%2015.pdf

ROBLETO GUITIÉRREZ, Jaime (2013) “El derecho de defensa penal como derecho fundamental” En: https://www.poder-judicial.go.cr/escuelajudicial/archivos/bibliotecaVirtual/penal/6_El%20derecho%20de%20defensa%20como%20Derecho%20Fundamental_2013.pdf

VILLEGAS CADAVID, Luis Carlos (2013) “la violación del plazo razonable en la audiencia de juicio oral: una causal de libertad”, para optar el grado de bachiller en la universidad de Militar Nueva Granada.